

La justicia financiera en el foco

Comprender las desigualdades mundiales para superar la injusticia financiera



Manifestación de Change Finance a las puertas del Banco de Inglaterra el 15 de septiembre de 2018, día que marcó el décimo aniversario de la crisis financiera. Crédito de la imagen: Matti Kohonen



Financiado por la Unión Europea

Este contenido ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad única de Citizens for Financial Justice y no refleja necesariamente el punto de vista de la Unión Europea. Los capítulos individuales han sido elaborados por los autores y autoras y colaboradores especificados y no necesariamente reflejan el punto de vista de todos los miembros de Citizens for Financial Justice, aunque todos los miembros comparten las preocupaciones generales y principios presentados.

Quiénes somos

Citizens for Financial Justice

Informar, conectar y otorgar el poder a la ciudadanía para actuar juntas y hacer que el sistema de financiación mundial funcione mejor para todas las personas.

Somos un variado grupo de socios europeos; desde grupos de base local hasta grandes organizaciones internacionales. Juntos, pretendemos informar y conectar a la ciudadanía para actuar conjuntamente y conseguir que el sistema financiero mundial satisfaga las necesidades de todas las personas.

Obtenemos financiación de la Unión Europea y pretendemos apoyar la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) movilizando a la ciudadanía europea para apoyar una financiación eficaz para el desarrollo (FpD).

citizensforfinancialjustice.org

twitter.com/financing4dev

Autorías y personas colaboradoras

Este informe ha sido recopilado por los socios de Citizens for Financial Justice y otros colaboradores, coordinados por Flora Sonkin y Stefano Prato, Society for International Development (SID); Ida Quarteyson y Matti Kohonen, Christian Aid; y Nicola Scherer, Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). Un agradecimiento especial a Karen Judd por la edición de textos.

Introducción: Flora Sonkin y Stefano Prato, Society for International Development (SID); con la ayuda de Matti Kohonen, Christian Aid.

Alimentación y tierra: Philip Seufert, FIAN International.

Sanidad: Nicoletta Denticò, Society for International Development (SID).

Derechos de las mujeres: Rosana Miranda y Marcos Lopes Filho, Christian Aid; Renata Moreno y Miriam Nobre, Sempreviva Organização Feminista (SOF); y Janice Førde, KULU - Women and Development.

Vivienda: C.J. (Kees) Hudig, Globalinfo; y Éilis Ryan, Financial Justice Ireland; con la colaboración de Zsófia Miklós, DemNet.

Infraestructuras: Xavier Sol, Counter Balance; y Nicola Scherer, Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG); con revisiones de Aleksandra Antonowicz-Cyglicka, Polska Zielona Sieć /Polish Green Network; y Elena Gerebizza, Recommon.

Índice

Resumen ejecutivo	6
Introducción	8
Reformular los retos al desarrollo: afrontar las múltiples dimensiones de las desigualdades como una nueva guía	
Capítulo 1 Alimentación y tierra	22
De la producción alimentaria a una oportunidad de inversión: la financiarización de la tierra	
Capítulo 2 Sanidad	31
Hacer de la sanidad un proyecto mundial financiable	
Capítulo 3 Derechos de las mujeres	39
La financiarización de los derechos de las mujeres	
Capítulo 4 Vivienda	47
La financiarización y el derecho a la vivienda	
Capítulo 5 Infraestructuras	54
La financiarización de las infraestructuras: ¿un medio para un fin o un fin en sí mismo?	

Resumen ejecutivo

El aumento de las desigualdades entre el Norte y Sur Global, entre los económicamente privilegiados y los marginados, y entre diferentes sexos e identidades raciales, han sido históricamente reproducidos e intensificados durante generaciones y están definiendo las relaciones socioeconómicas y culturales de nuestro tiempo. Por ejemplo, aunque existen retos mundiales, como el cambio climático y la degradación medioambiental, que afectan indudablemente a todas las personas que viven en la tierra, lo cierto es que no nos afectan a todas por igual. Las diferencias en la posición geográfica, el estatus económico, el sexo y la edad, todo entra en juego si observamos los grupos que están sufriendo sistemáticamente las duras consecuencias del cambio climático.

Las causas de esta situación se encuentran en las normas actuales de nuestra economía mundial, que reproducen un círculo vicioso de desigualdad: la desigualdad en el crecimiento económico y la concentración de la riqueza aumentan la desigualdad política. Porque se favorece la capacidad de las élites corporativas y financieras de influir en las decisiones políticas con el fin de proteger su riqueza y privilegios. Por tanto, los elevados niveles de desigualdad se transmiten de unas generaciones a otras generaciones, culminando en disparidades a largo plazo y en la injusticia percibida por los grupos marginales.¹

Desde el golpe de la crisis financiera mundial de 2008, las estructuras de gobierno y las (des) regulaciones económicas que nos han traído hasta la situación actual, como la expansión sin control del sector financiero sobre el resto de la economía o la “financiarización”, han hecho saltar todas las alarmas sociales. Mientras los bancos más importantes fueron rescatados con el dinero de los contribuyentes, los estados rechazaban sus obligaciones con los derechos humanos básicos. Adoptaron medidas de austeridad, creando impactos generalizados sobre la vida de personas de todo el mundo. Las consecuencias han sido la reducción del acceso de las comunidades a

los recursos naturales comunes² y la restricción de la provisión de servicios públicos básicos como sanidad y vivienda a los grupos más desfavorecidos.³

En los últimos años, el significativo aumento de las desigualdades dentro y entre países ha puesto esta cuestión en el punto de mira de los debates internacionales de desarrollo.⁴ La Agenda de 2030 reconoció la gestión de sus múltiples facetas (económica, política y social) como uno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), señalando el compromiso de la comunidad internacional de reducir las desigualdades.

Para aprovechar este momento, los pasos necesarios para la transformación del sistema socioeconómico y alcanzar la justicia social son comprender los motores contemporáneos principales de las desigualdades y encontrar estrategias comunes para gestionarlos. Mirar a nuestros retos actuales a través de la lente de las desigualdades ofrece, por tanto, un potencial de transformación destacable: afrontar las desigualdades en su carácter multidimensional - social, político, económico, espacial e intergeneracional - puede convertirse en una especie de nueva guía en un mundo complejo. Un objetivo general para avanzar en el desarrollo sostenible y gestionar las causas principales de la exclusión. Como parte de este esfuerzo, el presente informe plantea la cuestión de las desigualdades mirando a uno de sus principales motores actuales, la financiarización de nuestra economía mundial, al igual que su contrapartida, la justicia económica.

A través de cinco capítulos temáticos: 1) alimentación y tierra, 2) sanidad, 3) derechos de las mujeres, 4) vivienda y 5) infraestructuras, el informe muestra que el aumento de las desigualdades y la expansión sin precedentes de la industria financiera, como uno de sus motores contemporáneos clave, han sido creados y reproducidos mediante reglas de juego sesgadas e injustas. Existe, por tanto, una necesidad urgente de que las personas se muevan para converger alrededor de una agenda común que recupere nuestras

1 https://www.2030spotlight.org/en/book/1730/chapter/1-increasing-concentration-wealth-and-economic-power-obstacle-sustainable#footnote10_utsqgho

2 Ver el caso de Brasil, Capítulo 1.

3 Ver el caso de Grecia, Capítulo 2; ver también el Capítulo 4.

4 <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg10>

economías, reclame los servicios públicos y proteja nuestros recursos naturales comunes. A través de este informe queda claro que la resistencia a nivel local ante la penetración de los actores financieros es extremadamente importante, y a la vez, confrontar los motores de la desigualdad que ahora son mundiales, como la financiarización, también requiere esfuerzos concertados en niveles superiores de creación de políticas. Se proponen cuatro pilares de acción:

- **Promover el conocimiento compartido y continuar cuestionándose la dinámica de la financiarización:** Es esencial despertar la conciencia de la gente alrededor de los verdaderos impactos de la financiarización en sus vidas y proporcionar herramientas de análisis nuevas para cuestionar la dinámica actual. Desafiar las desigualdades y cómo la multiplicidad y la expansión de los actores y servicios financieros están contribuyendo al problema puede evitar la complicidad no intencionada, particularmente dada la forma encubierta en la que esta dinámica se infiltra en los múltiples dominios de la vida;
- **Resistir los constantes intentos de alejar la toma de decisiones de los espacios políticos legítimos y democráticos, a menudo con el argumento de las “oportunidades de financiación” para hacer avanzar el progreso:** A nivel local y nacional, apoyar a la resistencia de los movimientos sociales frente a proyectos, políticas y otras intervenciones peligrosas respaldadas por actores financieros mundiales puede ser una forma efectiva de defender los derechos de las mayorías y poner cara y forma a una lucha que muy a menudo se considera inmaterial y difícil de conseguir;
- **Reafirmar la soberanía nacional para reestablecer límites saludables a la liberalización financiera y proporcionar una financiación crítica para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):** La última crisis financiera mundial ha expuesto críticamente las vulnerabilidades de un sistema financiero liberalizado y centrado en el sector privado. Sin embargo, muchas de las condiciones estructurales subyacentes que llevaron a la crisis solo han sido tratadas de forma superficial, si es que han sido tratadas. Por lo tanto, es esencial reestablecer la soberanía nacional para ayudar a evitar la nueva crisis al tiempo que se proporciona

una financiación crítica para el desarrollo sostenible. Esto demanda la explotación del potencial de los bancos de desarrollo nacionales, restaurando la gestión de flujos de capital dentro de las herramientas políticas de los gobiernos, y presentar un sistema de impuestos a las transacciones financieras, entre otras medidas;⁵

- **Democratizar la gobernanza económica mundial:** A nivel mundial, la justicia social y las narrativas basadas en los derechos deben encontrarse en el centro del proceso para reformular las instituciones internacionales y cambiar la gobernanza económica mundial. Las diferentes luchas sectoriales se deben unir bajo una agenda común, abogando por la reforma de instituciones existentes y el establecimiento de nuevas que sean capaces de regular los nuevos actores financieros de rápida evolución, y que puedan devolver la financiación a una contabilidad y control democráticos. Esto no solo exige construir una convergencia sobre las propuestas existentes referentes a nuevos pilares críticos de una gobernanza económica democratizado, como una entidad fiscal intergubernamental y una institución de ejercicio de deuda soberana bajo la tutela de las Naciones Unidas, sino también dirigir el vacío institucional a la hora de regular los actores financieros, principalmente aunque no de manera exclusiva, la industria de la gestión de activos. Dichas medidas podrían traducirse en una mejora de la transparencia, la participación y el control público de la creación de políticas fiscales y financieras a nivel nacional y mundial.

Ha llegado la hora de reconocer las luchas de la gente que resisten las múltiples facetas del proceso de financiarización. Como también de hacer confluir las estrategias para dirigir las múltiples dimensiones de la desigualdad. De esta manera se puede alcanzar la justicia financiera. ¡La hora del activismo por la justicia financiera es ahora!

5 K. Singh y S. Prato, “Preventing the next financial crisis while financing sustainable development: Three propositions”, *Spotlight Report on Sustainable Development*, 2019, https://www.2030spotlight.org/sites/default/files/spot2019/Spotlight_Innenteil_2019_web_chapter_III_Singh.pdf

Introducción

Reformulando los retos al desarrollo: afrontar las múltiples dimensiones de las desigualdades como nueva guía de las rutas políticas

Los retos al desarrollo mundial, especialmente el hambre, el acceso a una vivienda adecuada, el acceso a una energía limpia y al agua y sanidad, entre otros, han sido enfocados desde hace mucho tiempo por la comunidad internacional como aspectos relacionados con la pobreza extrema. La pobreza ha sido tratada como un punto de inicio del análisis al igual que como el problema principal que se debe afrontar a través de intervenciones de desarrollo. Sin embargo, esta narrativa principal centrada en la reducción de la pobreza solo miraba al final de la historia, cerrando los ojos ante la dinámica de la acumulación de riqueza en las economías conocidas como “desarrolladas” y despreciando el legado del colonialismo, la esclavitud y la extracción de recursos. La atención sobre la pobreza como un reto casi exclusivamente de “alcance” a menudo minimizó e ignoró las relaciones viciadas entre pobreza y prosperidad. Sin confrontar las condiciones históricas y la injusticia estructural del capitalismo mundial, que está en la raíz del problema, las falsas soluciones para minimizar la pobreza solo han terminado por reforzarla.⁶ Lo que finalmente se ha convertido en algo comúnmente aceptado es que la pobreza no existe en un vacío separada de la sanidad; este no es más que uno de los muchos síntomas de las desigualdades mundiales con una gran raíz histórica y aún en crecimiento.

En los últimos años, el significativo aumento de las desigualdades dentro y entre países tanto en el Norte como en el Sur Global ha puesto finalmente las desigualdades en el punto de mira de los debates de desarrollo internacionales⁷. Especialmente desde la crisis financiera mundial de 2008, las profundas desigualdades entre los dominios económico, social, político e intergeneracional ya no están confinadas

a los países de baja renta o “en desarrollo”. Al contrario, están aumentando en todo el mundo las profundas brechas entre ricos y pobres, entre grupos que influyen en la creación de políticas y aquellos apartados de la misma, entre aquellos que pueden acceder a una educación, sanidad, alimentación de calidad y a otros bienes y servicios básicos y aquellos que no se los pueden permitir. Algunos ejemplos sorprendentes son el hecho de que haya aumentado la inseguridad alimentaria durante cuatro años seguidos, tanto en los países ricos como pobres, con más de 820 millones de personas que sufren hambre (consulte la Imagen 1)⁸ y cerca de 1,6 mil millones no tienen una vivienda adecuada.⁹ Mientras tanto el 1 por ciento más rico posee más del 47 por ciento de la riqueza mundial total,¹⁰ y la concentración del poder financiero hace que los ricos sean cada vez más ricos en casi en todas partes (consulte la Imagen 1).¹¹

Nuestro sistema económico mundial actual y sus estructuras de gobernanza refuerzan un círculo vicioso de desigualdades manteniendo el poder político y financiero en unas pocas manos. Esta triste situación, por otro lado, también ofrece la oportunidad de articular diversos movimientos y luchas bajo una agenda común. El fuerte sentimiento de injusticia sobre la condición de profunda desigualdad en el mundo ya no se restringe a aquellos considerados económicamente marginados, sino que es realmente compartido por la mayoría de personas trabajadoras de todo el mundo. Y este sentimiento se está acercando a un punto de inflexión. Los movimientos sociales como Occupy Wall Street – y sus subsecuentes protestas en 951 ciudades de 82 países tanto del Norte como del Sur Global-, los Indignados/15M de España, Nuit Debout en París, y tantos otros alzamientos populares recientes en

6 https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jan/14/aid-in-reverse-how-poor-countries-develop-rich-countries?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR3Hevd03vf3dZwQ-Pt4pjdV-5GHZomNG8bdmruV9fAS9yQd_aHyKfkznB0

7 <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg10>

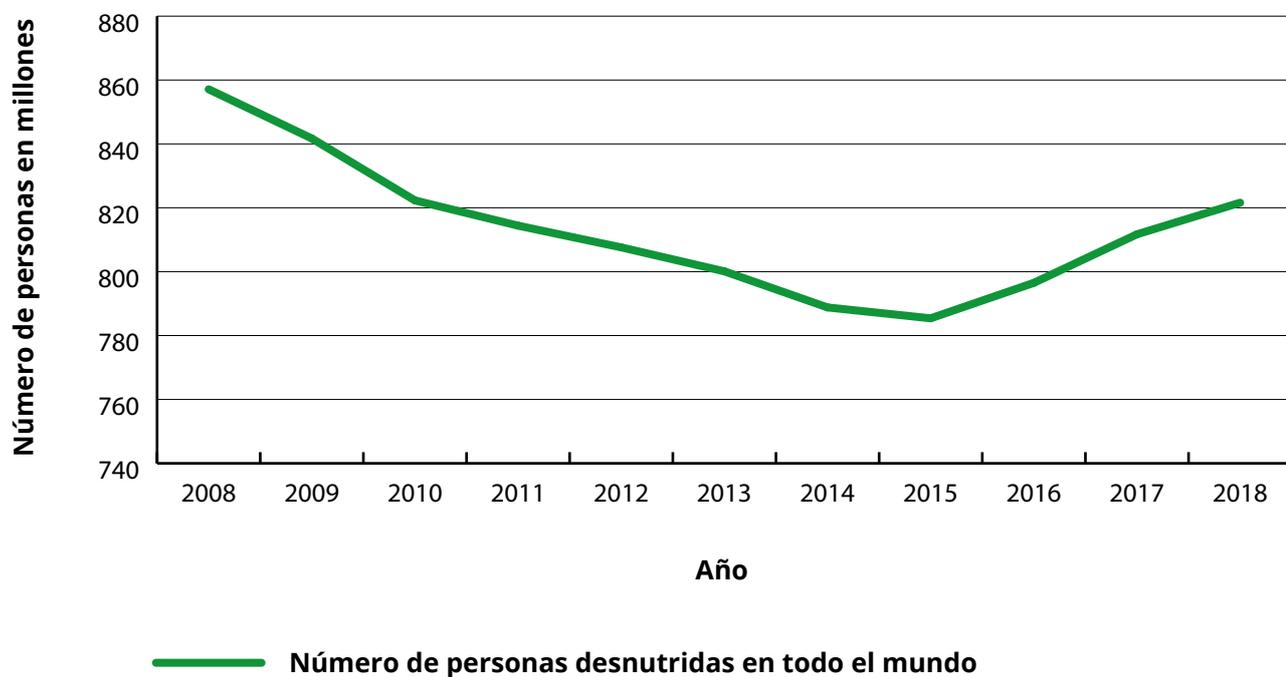
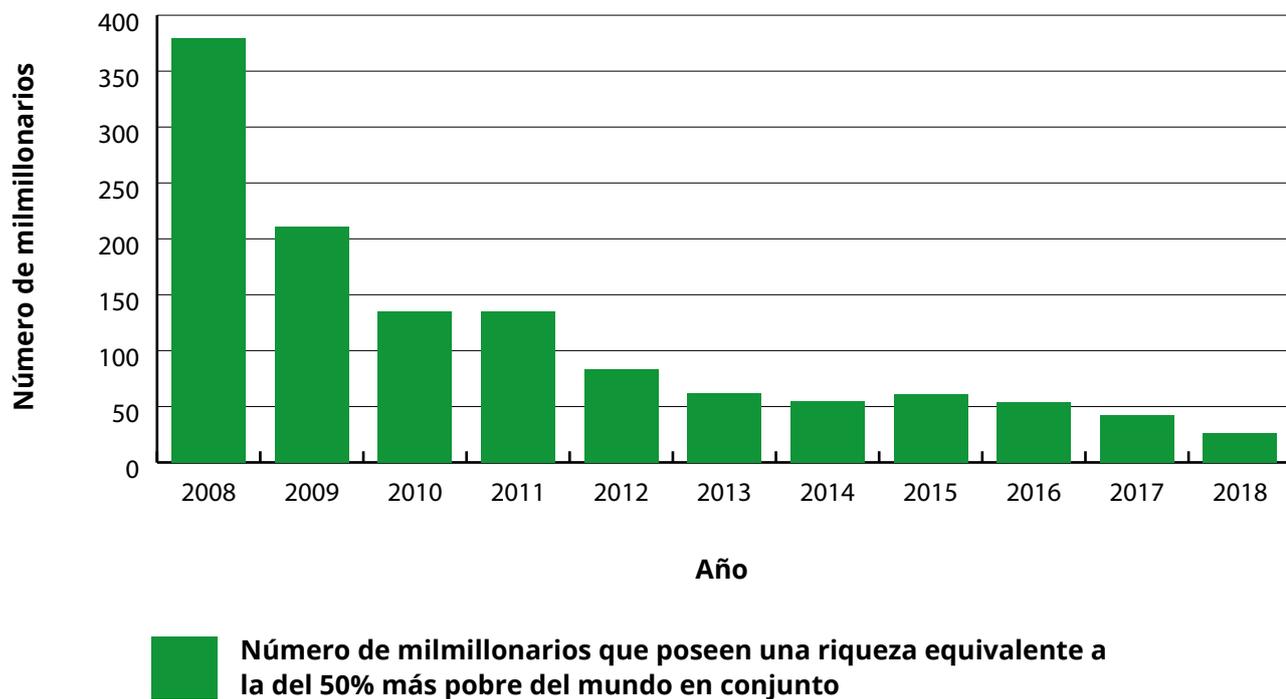
8 <http://www.fao.org/publications/sofi/en/>

9 <https://unhabitat.org/up-for-slum-dwellers-transforming-a-billion-lives-campaign-unveiled-in-europe/>

10 <https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html>

11 <https://www.theguardian.com/business/2019/jan/21/world-26-richest-people-own-as-much-as-poorest-50-per-cent-oxfam-report> ; <https://inequality.org/facts/global-inequality/>

Imagen 1: El número de personas desnutridas aumenta a medida que lo hace la concentración de la riqueza y la desigualdad económica



Fuente: FAO, 2019 y Oxfam, 2019. Tablas preparadas por F. Sonkin, SID.

todo el mundo han demostrado el poder de la gente para unirse contra la desigualdad, el capitalismo financiero y la gobernanza antidemocrática. El creciente movimiento por el clima y sus huelgas juveniles Fridays for Future también son clave para exponer la multidimensionalidad de la cuestión de la desigualdad. Los jóvenes se han lanzado a las calles de manera organizada en todo el mundo para hacer sonar la alarma por la inaceptable injusticia del cambio climático y la degradación medioambiental. Y es que la crisis climática no solo afecta de manera desproporcionada a los grupos según su situación geográfica y su poder económico, sino también entre generaciones. Aquellos responsables del consumo excesivo de nuestros recursos planetarios limitados en el presente no se ven limitados del mismo modo por las consecuencias futuras de sus acciones.

El marco de las desigualdades, de hecho, ofrece un potencial de transformación destacable si se compara con el enfoque tradicional de la pobreza. No solo proporciona una mayor precisión descriptiva (al desmitificar medias y exponer correlaciones entre los retos de desarrollo y los grupos sociales) y una capacidad analítica (al desvelar las relaciones entre pobreza y prosperidad), sino que también ofrece una potente “regla de oro” en términos normativos: afrontar las desigualdades en su carácter multidimensional – social, político, económico, espacial e intergeneracional – puede convertirse en una especie de nueva guía en un mundo complejo, un objetivo primordial para avanzar en el desarrollo sostenible y tratar las causas raíz de la exclusión. Esto significa que desafiar los motores que continúan ampliando las disparidades y confrontan las medidas normativas y fiscales a favor de las élites económicas y políticas son algunas de las prioridades políticas más urgentes para avanzar en la transformación socioeconómica. De hecho, el análisis de las desigualdades multidimensionales destaca cómo algunos grupos y comunidades sociales se encuentran de manera consistente en el extremo más bajo de cualquier distribución de riqueza. Se expone así cómo las desigualdades están ligadas a las estructuras de poder dentro de las sociedades y las disparidades socioeconómicas son uno de los muchos síntomas. De aquí, la necesidad de combinar las intervenciones socioeconómicas con procesos robustos dirigidos a democratizar la concentración existente de poderes económicos y políticos. Trabajar para limitar y regular la expansión descontrolada de las élites del sector financiero y sus intereses sobre nuestra economía y promover la justicia financiera son, por lo tanto, pasos clave en dicha dirección.

Justicia financiera, una agenda oportuna para la lucha de la justicia social

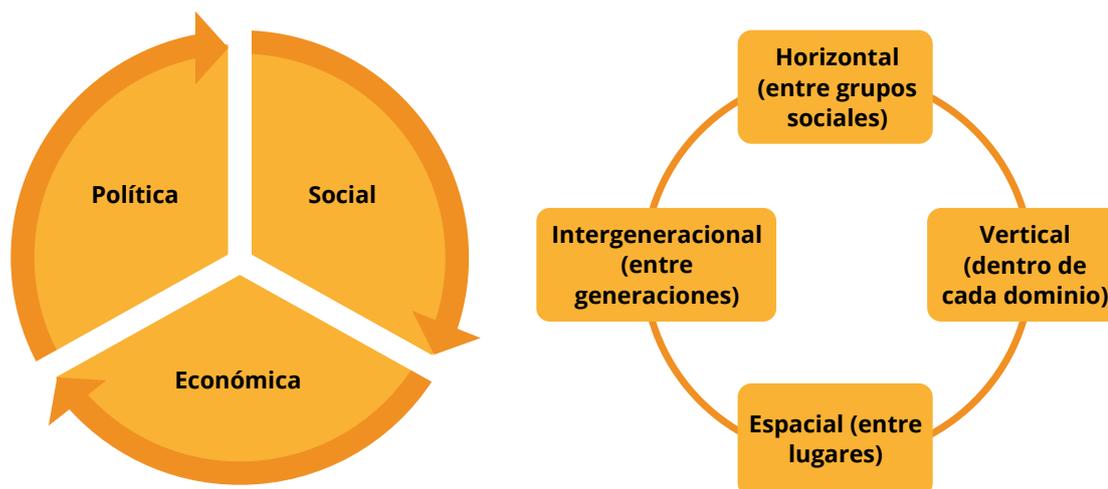


La justicia financiera reclama el reequilibrio de la desproporcionada influencia y poder del sector financiero sobre la economía mundial y adopta la necesidad urgente de devolver las finanzas a la contabilidad y

control democráticos a través de un aumento de la transparencia, una normativa centrada en las personas, instituciones democráticas y la supervisión pública. Aparece como una respuesta adecuada a la omnipresencia actual de los actores, productos y mercados financieros y su poder sobre la vida de la gente, especialmente en su papel de motores contemporáneos de desigualdades.

Como parte del esfuerzo para reducir las desigualdades a través de una transformación económica estructural y de la justicia financiera, este informe arroja luz sobre las diferentes luchas para resistir ante la captura financiera de los servicios básicos y las áreas críticas de nuestras vidas: 1) alimentación y tierra, 2) sanidad, 3) derechos de las mujeres, 4) vivienda e 5) infraestructuras. Con las desigualdades como punto de partida, se analizan soluciones financieras sobrevenidas para el desarrollo y el papel de la expansión de actores, mercados y motivaciones financieras sobre numerosas esferas de nuestra vida diaria. Se puede estudiar cuáles son los motores de las injusticias sistémicas y de la erosión de los derechos humanos y del medioambiente. Finalmente, este esfuerzo colectivo pretende superar la tendencia hacia la atomización y reunir las diversas luchas de justicia social y medioambiental para dar inicio a una agenda de justicia financiera.

Además, el informe también ofrece una crítica del fuerte énfasis puesto sobre la financiación privada para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este enfoque no solo representa la importancia de los retos financieros sobre los políticos, sino que también abre la forma de seguir fortaleciendo el control financiero sobre la implementación del desarrollo a través de una variedad de soluciones basadas en el mercado, a menudo falsas, más que afrontar las causas raíz de la exclusión y la marginalización. De hecho, el lento crecimiento que caracterizó la recuperación económica tras la crisis financiera puede sugerir que la mercantilización y la financiarización son dinámicas interrelacionadas que ponen a los retos de desarrollo

Imagen 2: Los múltiples ámbitos y dimensiones de las desigualdades

Fuente: S. Prato, Development, 2014

al servicio de una economía en dificultades, más que desafiar las distorsiones y disfuncionalidades que han generado las estrategias extralimitadas de liberalización de los mercados.

Comprender las desigualdades para alcanzar la justicia financiera

Afrontar nuestros retos de desarrollo actuales a través de la lente de la desigualdad puede ser una potente manera de unir diferentes luchas para la justicia social. Por ejemplo, al analizar de manera crítica temas como los derechos sobre la tierra o los derechos de las mujeres a través del marco de la desigualdad, es posible ver que algunos grupos sociales y algunas situaciones geográficas son más propensas a sufrir múltiples desigualdades. Este sería el caso del acceso desigual a los recursos naturales en Brasil (Capítulo 1), o los impactos de las políticas de austeridad en Argentina y Zimbabue (Capítulo 3). Este análisis destaca la existencia de estructuras de poder dentro de la sociedad que mantienen y refuerzan dichas desigualdades. De hecho, el reconocer las estructuras de poder y desvelar la economía política de desigualdades son pasos esenciales para tratar sus motores y trabajar hacia la equidad y la justicia.¹²

A través de un análisis multidimensional de las desigualdades, (Imagen 2) es posible inferir que la cuestión de la desigualdad trata fundamentalmente sobre las reglas del juego. Sobre lo que mantiene al poder político, económico y social en la cima, y lo que evita que la riqueza, en un sentido amplio, sea

compartida por la mayoría. Debido a que las normas de la economía mundial se han organizado de manera que se beneficia a las élites, especialmente en el Norte Global, a costa de la mayoría del resto de la humanidad, afrontar las desigualdades requiere reformular las estructuras de gobernanza para crear sociedades y economías más igualitarias y equitativas.

Las normas actuales de nuestra economía mundial reproducen un círculo vicioso de desigualdad: la desigualdad en el crecimiento económico aumenta la desigualdad política al expandir la capacidad de las élites corporativas y financieras para influir en la decisión de políticas y proteger su riqueza y privilegios. Los mayores niveles de desigualdad, o el control desproporcionado de los recursos y la influencia sobre la toma de decisiones políticas y económicas, se pasan así a las siguientes generaciones, acumulándose en las disparidades a largo plazo percibidas por los grupos marginalizados.¹³

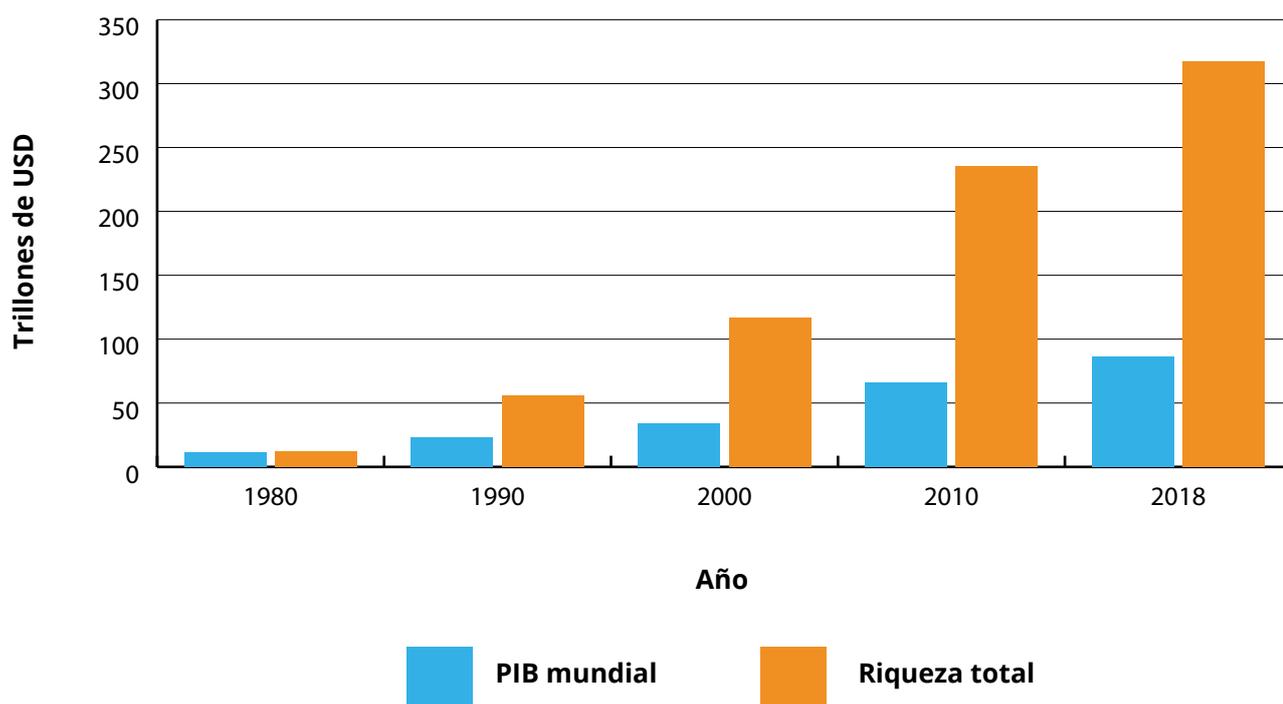
En términos más concretos, la concentración de riqueza y poder económico en las manos de un número relativamente pequeño de personas – banqueros, CEOs y otras personas ultra ricas – les permite jugar un gran papel a la hora de formar instituciones que puedan mantener su riqueza y privilegios. Si la riqueza compra al poder político, tanto mediante la financiación de campañas políticas como mediante la contratación de abogados y miembros de grupos de presión caros para presionar hacia políticas y legislaciones favorables,¹⁴ entonces también da forma a las instituciones económicas que determinan las actividades económicas y quién se beneficia de ellas. Esta dinámica se hace patente

12 S. Prato, "Editorial: The Struggle for Equity: Rights, food sovereignty and the rethinking of modernity", Development, 2014.

13 https://www.2030spotlight.org/en/book/1730/chapter/1-increasing-concentration-wealth-and-economic-power-obstacle-sustainable#footnote10_utsqgho

14 <http://longreads.tni.org/state-of-power-2019/lobbying-political-power/>

Imagen 3: Riqueza mundial en comparación con el PIB mundial



Sources: Credit Suisse 2018 (global wealth 2000-2018); World Bank (for GDP)

en la forma en la que se generan y distribuyen los recursos públicos. Por ejemplo, las políticas fiscales como los recortes fiscales a los ingresos corporativos benefician a las grandes corporaciones y a sus CEOs, permitiéndoles acumular incluso más riqueza, que a su vez se reinvierte en más campañas de presión y políticas que continúan apoyando su concentración de riqueza.¹⁵

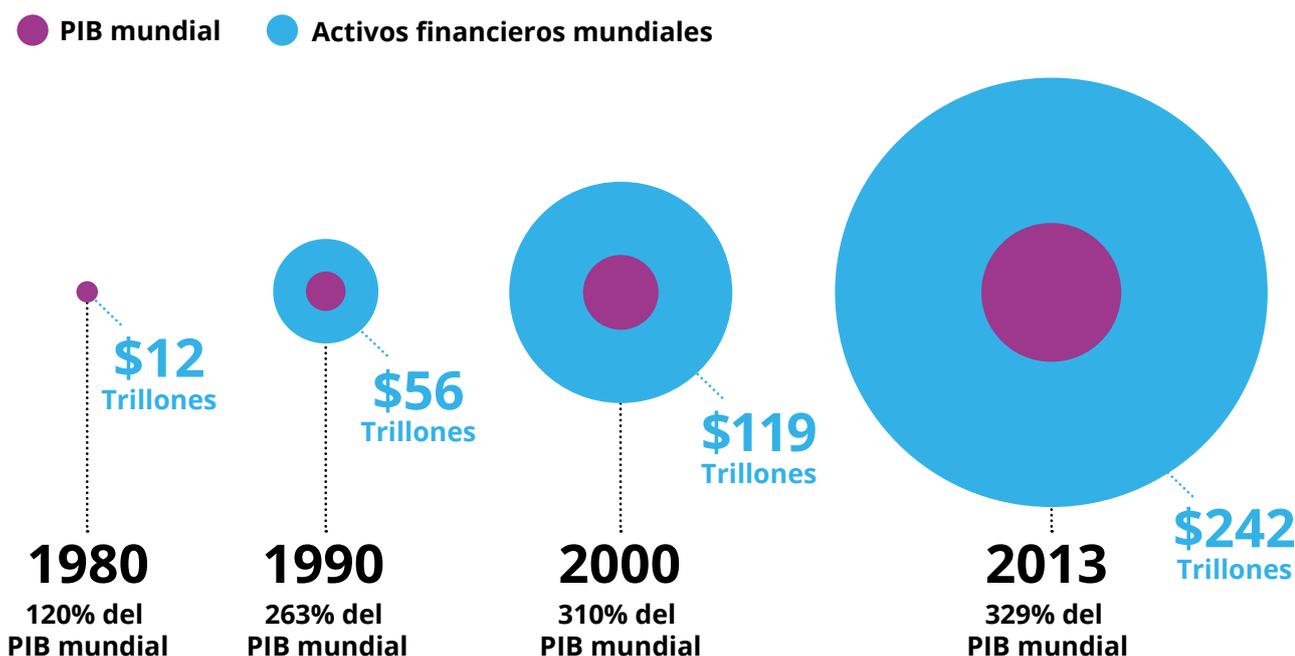
Aunque el sistema actual económico mundial dirigido por la financiación se basa en la idea de que el crecimiento económico y una mayor riqueza mejorarán el bienestar general al permitir que los ingresos se “filtren” hasta todos los niveles de la sociedad/partes del mundo, las pruebas demuestran que este no es el caso.¹⁶ Mientras (algunas de) las economías siguen expandiéndose (en término de crecimiento del PIB), el espacio fiscal de los gobiernos a menudo se reduce (por el efecto combinado de políticas fiscales cada vez más regresivas, la eliminación y evasión de impuestos y otros flujos de financiación ilícitos, entre otras razones) y los salarios de los trabajadores se estancan, debido a una concentración masiva de capital privado (consulte la Imagen 3).¹⁷

Financiarización: motor y mantenimiento de desigualdades

Las desigualdades no son un fenómeno nuevo. Pero las disparidades han ido más lejos y se han consolidado por la proliferación mundial de la industria de las finanzas. En las últimas décadas, la riqueza y el capital que se han concentrado por las desigualdades entre los grupos sociales y entre el Norte y Sur Global, han decidido sobre los activos financieros considerándolos su lugar preferido y más rentable. En lugar de generar riqueza y bienestar social a través de la inversión en la economía productiva, como la manufacturación o la producción de bienes básicos, las inversiones realizadas basadas en especulaciones de beneficios futuros se han convertido en la actividad principal de creación de dinero de nuestro tiempo. Sin embargo, este cambio en la forma en la que se acumula la riqueza de manera privada, generada por la escala de crecimiento y la rentabilidad del sector de las finanzas, trae consigo un alto coste para el resto de la economía (consulte la Imagen 4) y actúa como motor clave de las desigualdades dentro y entre países de tres maneras principales.

15 Ver el infame ejemplo de los hermanos Koch en EE. UU.: <https://www.theguardian.com/us-news/2019/aug/23/david-koch-death-kochtopus-legacy-right-wing>
 16 <https://www.epi.org/publication/ceo-compensation-2018/> ; <https://www.latimes.com/business/story/2019-08-19/column-trickle-down-is-a-lie>
 17 https://www.2030spotlight.org/sites/default/files/spot2018/Spotlight_2018_web.pdf

Imagen 4: Activos financieros mundiales frente al PIB mundial



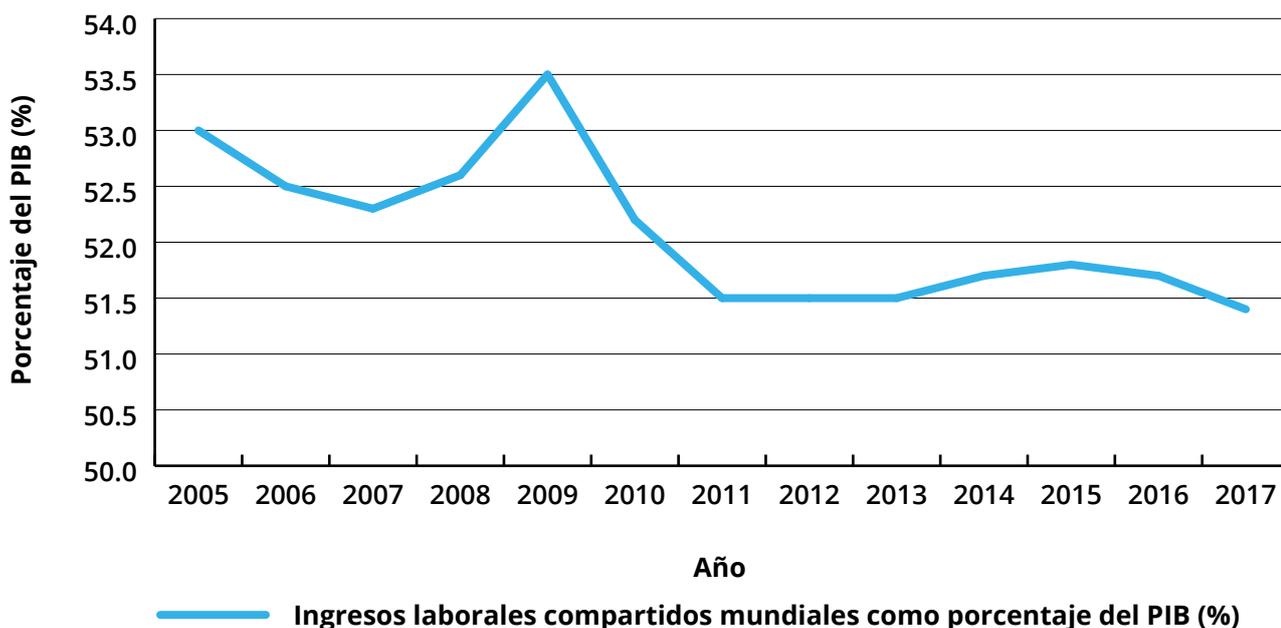
Fuentes: Deutsche Bank, 2013; Transnational Institute, 2018

- En primer lugar, mientras en el pasado los beneficios provenían principalmente de la producción de materias y el comercio de bienes, ahora la riqueza se extrae ampliamente a través de canales financieros especulativos en vez de ser reinvertidos en la economía productiva. En el Reino Unido (R. U.), por ejemplo, hace un siglo, el 80 por ciento de los préstamos bancarios iban a empresas productivas como fábricas, minoristas, granjas y similares. Ahora, menos del 4 por ciento de los préstamos a empresas por parte de las instituciones financieras va a manufacturación. En su lugar, las instituciones financieras se prestan principalmente entre ellas, e invierten en viviendas y en propiedades comerciales.¹⁸
- En segundo lugar, el descenso de la rentabilidad de los sectores no financieros también está vinculado al desempleo, la congelación o reducción de los salarios y el debilitamiento de las instituciones y políticas dirigidas a contener la disparidad de ingresos, como los convenios colectivos de los sindicatos y la legislación sobre salarios mínimos.¹⁹ Irónicamente, al mismo tiempo que el sector financiero extrae recursos económicos que se podrían invertir en trabajo remunerado, aumenta la dependencia de los trabajadores del crédito para cubrir la mayoría de sus necesidades básicas diarias. Mientras los salarios están congelados, la privatización y el aumento de los costes de los servicios como educación y sanidad han llevado cada vez más a la ciudadanía a endeudarse (consulte la Imagen 5).
- Y en tercer lugar, y quizá el más importante, la financiarización y las desigualdades han sido también permitidas por el cambio que ha sufrido la gobernanza económica desde los espacios legítimos hasta las instituciones no democráticas. Estas incluyen el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio, donde los países del Norte Global controlan una parte desproporcionada del poder de decisión. Es por esto que ejercen el control sobre decisiones políticas económicas en el hemisferio Sur a través de la deuda y de las finanzas condicionadas. Esta dinámica ha llevado a elecciones y reformas políticas a niveles nacionales e internacionales que han permitido que el poder financiero transnacional florezca y permanezca altamente inmune a las normativas y políticas monetarias y fiscales. Los recortes a los impuestos de sociedades, los paraísos fiscales (consulte la Imagen 6), las inversiones directas en el extranjero

¹⁸ <https://www.theguardian.com/news/2018/oct/05/the-finance-curse-how-the-outsized-power-of-the-city-of-london-makes-britain-poorer>

¹⁹ <https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/15/valuing-corporations-over-workers-has-led-to-americas-income-inequality-problem>; https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_712232.pdf

Imagen 5: Ingresos laborales compartidos mundiales como porcentaje del PIB (%)



Source: ILOSTAT, 2019

no reguladas y otras políticas económicas neoliberales han dado poder a las finanzas mundiales para prosperar y ocupar nuevos papeles y espacios en los que antes no estaban presentes. Por ejemplo, estamos presenciando la forma en la que los actores financieros operan ahora los servicios sociales en Escandinavia a través de empresas deslocalizadas²⁰ y de capital privado al tiempo que se evitan los impuestos públicos. También se podría hablar de cómo en España, miles de ciudadanos endeudados son desahuciados por los bancos y dejados sin hogar como consecuencia de la ruptura de la burbuja del mercado inmobiliario en 2008.

Lo que es realmente preocupante es que la expansión desregulada de las finanzas no solo implica cambios en niveles macro y de muy largo alcance sobre cómo funciona la economía, sino que también tiene impactos muy concretos sobre la vida diaria de las personas y el medioambiente. El sistema económico

mundial dirigido por las finanzas ha hecho que los gobiernos sean responsables ante los inversores en vez de ante sus ciudadanos. Es decir, han incumplido sus obligaciones frente a los derechos humanos y han privatizado los servicios que anteriormente se proporcionaban de manera pública como la sanidad, la educación y el suministro de agua, entre otros. Finalmente, el análisis actual de la financiarización a menudo pasa por alto que el mayor subsidio para la economía mundial es proporcionado por el trabajo doméstico y de cuidado no remunerados derivado de la división por géneros del trabajo. Su consecuencia es la restricción grave de la realización completa de los derechos de las mujeres. Es más, las crisis financieras tienden a empeorar la situación de las mujeres, no solo porque a menudo aumenta su carga de cuidados, sino porque también son las primeras y, con frecuencia de manera desigual, en verse afectadas por la austeridad fiscal y la simplificación de los programas sociales.

20 <https://www.finnwatch.org/images/pdf/SoteV.pdf>

Imagen 6: Geografía del poder financiero: centros financieros y paraísos fiscales

Centros financieros



Lista de los Top 10 según los indicadores industriales que analizan cinco factores, incluyendo las empresas, el medioambiente, las infraestructuras y la reputación.

Paraísos fiscales



Activos extranjeros (en miles de millones de USD)

- Luxemburgo: \$5,513
- Islas Caimán: \$4,173
- Hong Kong: \$2,065
- Islas Vírgenes británicas: \$1,777
- Bermudas: \$1,033
- Jersey: \$681
- Chipre: \$350
- Mauricio: \$170

Los paraísos fiscales atraen y retienen capital extranjero

Un hecho: 1/6 de toda la riqueza privada mundial está escondida en paraísos fiscales

Fuentes: Global Financial Centre Index: 2018; Instituto Transnacional, 2019

Financiarización y sus efectos sobre el desarrollo, la gobernanza económica y la financiación pública

En la carrera a la baja por competir con otros países “favorables a las finanzas/empresas” y atraer inversiones privadas (y a menudo, extranjeras), los gobiernos a menudo reducen los impuestos corporativos y las normativas para los inversores privados, incluyendo todas las obligaciones sociales y medioambientales. Estas medidas (no) regulatorias eclipsan el papel del estado al reducir sus ingresos (consulte la Imagen 7). Consecuentemente, con menos espacio fiscal para invertir en servicios públicos, los gobiernos reaccionan para ampliar la privatización y comercialización de la provisión de los servicios que anteriormente eran públicos, incluyendo la sanidad, la educación, el suministro de agua y otros servicios esenciales.

En definitiva, se trata de un cambio desde la propiedad pública directa - en la que el gobierno paga y proporciona bienes como el agua, o servicios como el cuidado sanitario y la educación - hacia un sistema de suministro público indirecto - en el que el gobierno se asocia a proveedores privados en busca de beneficios.²¹ Este cambio presenta varias repercusiones. En primer lugar, lleva a la reducción de la responsabilidad democrática sobre las transacciones financieras, ya que el gobierno no las controla incumpliendo su responsabilidad de cumplir los derechos humanos de sus ciudadanos; en segundo lugar, tiene consecuencias para la transparencia, ya que los contratos entre los gobiernos y las empresas privadas no están a disposición del público; en tercer lugar, implica que se produce una transferencia de poder desde los estados (que representan los intereses de los ciudadanos) hasta los actores financieros (que representan los intereses de sus CEOs, accionistas, ejecutivos financieros, etc.) que operan con una lógica de beneficio privado a corto plazo, y no pensando en el bienestar social de la mayoría; finalmente, las garantías de inversión proporcionadas para atraer a los inversores privados transfieren los riesgos

de la inversión sacándolos de las empresas, confiando en los fondos públicos (el dinero de los contribuyentes) para correr con los gastos de los problemas de préstamo.

Irónicamente, las mismas reformas políticas que permitieron al sector financiero y a las empresas concentrar más riqueza en los últimos años son las que han llevado a reducir los presupuestos públicos y a aumentar la deuda pública. En consecuencia, han aumentado la dependencia de los estados de las inversiones privadas para proporcionar los servicios que tradicionalmente eran públicos. Esta dinámica también ha sido promovida de manera activa por los actores financieros de desarrollo internacional, a través de estrategias para “atraer inversiones del sector privado” o “apalancar la financiación innovadora” para cubrir la brecha de financiación pública.²²

Ignorando la volatilidad y la lógica de beneficios privada de las finanzas mundiales, las iniciativas como la agenda “Maximizar la Financiación para el Desarrollo”, del Banco Mundial, el enfoque de Cascade,²³ y la Iniciativa de Financiación Sostenible de la Comisión Europea²⁴ se han convertido en prácticas generales y dominantes en la financiación internacional del desarrollo. Más recientemente, también se ha añadido un memorándum de entendimiento preocupante entre la ONU y el Foro Económico Mundial a la tendencia de la financiación privada y la influencia de los mil millonarios sobre la toma de decisiones económicas a nivel mundial.²⁵ La justificación de este memorándum es que los inversores y sus gestores de activos puedan redirigir sus inversiones hacia activos con aspectos sociales o medioambientales teóricamente positivos. Según su perspectiva se facilita así la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) mundiales. Sin embargo, el compromiso de los inversores privados con la causa de los ODSs tiene consecuencias. Los gobiernos deben quitar riesgo a las inversiones privadas, asumiendo la carga de los proyectos fallidos como las colaboraciones público-privadas (CPPs), y también son presionados para reducir los derechos a favor del interés público (p. ej. medioambiente y derechos humanos).

21 <https://www.tni.org/en/publication/financialization-a-primer#Q1>

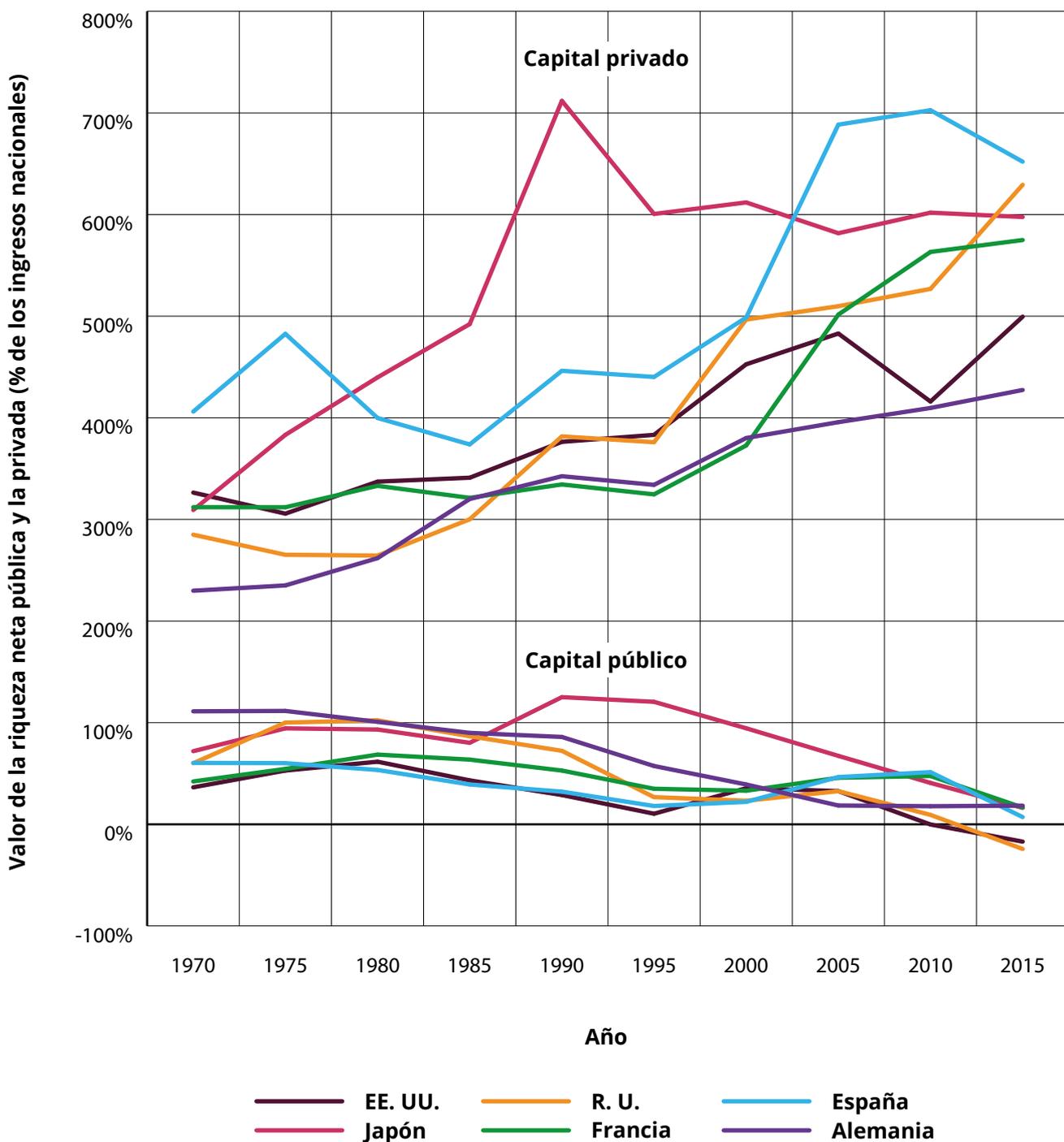
22 <https://www.worldbank.org/en/news/speech/2018/05/15/leveraging-innovative-finance-for-realizing-the-sustainable-development-goals>

23 <https://www.worldbank.org/en/about/partners/maximizing-finance-for-development>

24 https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-resources_en

25 <https://www.tni.org/en/article/un-signs-deal-with-davos-that-threatens-democratic-principles>

Imagen 7: La cada vez mayor brecha entre el capital privado y el capital público en los países ricos, 1970-2016



Fuente: World Inequality Lab, World Inequality Report 2018

Comprender la financiarización

La sobre expansión de los activos y mercados financieros no ha salido de la nada. Aunque los inicios de la financiarización datan de las décadas de 1950 y 1960 con el surgimiento de los centros financieros descentralizados, fue la caída del sistema monetario de Bretton Woods a principios de 1970 lo que aceleró el crecimiento de la liquidez mundial y provocó el aumento de la liberalización financiera y su falta de regulación.²⁶

El término “financiarización”, utilizado para describir el aumento de poder de los actores financieros sobre la economía, se hizo más popular e importante tras el golpe de la crisis financiera mundial de 2008.²⁷ Aunque se ha reconocido mundialmente que el golpe financiero de 2008 fue impulsado por la especulación financiera no regulada y sin escrúpulos, desde entonces los gobiernos nacionales de todo el mundo han redoblado la apuesta por la desregularización de los mercados financieros y la reducción fiscal sobre los ingresos de las corporaciones.²⁸ En lugar de tomarse la crisis como una llamada de alerta sobre el cambio sistémico, no se ha cuestionado de manera seria la idea mal concebida de un sistema financiero mundial guiado por el mercado financiero.

Tras la crisis, los bancos principales fueron

rescatados y los estados se comportaban de manera negligente frente a sus obligaciones con los derechos humanos básicos, como la sanidad, la educación, el agua y saneamiento y una vivienda adecuada. Porque la carga económica se ha transferido a los ciudadanos a través de medidas de austeridad – reduciendo el gasto social y aumentando los impuestos – lo que daña sobre todo a los grupos desfavorecidos.²⁹ Los catastróficos efectos sanitarios de los recortes en el gasto público de los servicios sociales impuestos en Grecia, Irlanda, Portugal y España son un claro ejemplo de esta realidad.³⁰

Los dañinos resultados también han sido percibidos en el hemisferio Sur, a través de la transformación intensificada de recursos y derechos, como la tierra y el medioambiente, en nuevas clases de activos financieros. A menudo presentados a través de condicionalidades financieras de desarrollo, los cambios normativos para atraer a actores financieros transnacionales, les permite convertirse en una fuerza política poderosa capaz de crear nuevos mercados para generar beneficios en detrimento de la vida de las personas.³¹

En este contexto, es urgente comprender la expansión de las finanzas mundiales, especialmente su estrecha relación con la profundidad de las desigualdades y sus efectos sobre el acceso y la realización de los derechos humanos.

26 <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13224.pdf>

27 <http://www.peri.umass.edu/media/k2/attachments/WP394.pdf>

28 <https://www.taxjustice.net/2015/03/18/new-report-ten-reasons-to-defend-the-corporate-income-tax/>

29 https://academic.oup.com/eurpub/article/27/suppl_4/18/4430523

30 Para datos concretos sobre Grecia, consultar [https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpub/PIIS2468-2667\(18\)30130-0.pdf](https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpub/PIIS2468-2667(18)30130-0.pdf); consultar también <https://www.brettonwoodsproject.org/2018/09/greece-exits-loan-programme-trail-devastation-revealed/>

31 Consultar la especulación financiera sobre la tierra en Brasil, Capítulo 1.

Financiarización y erosión de los derechos humanos y del medioambiente

Las amplias desigualdades en todo el mundo entorpecen la igualdad de oportunidades y llevan a legislaciones, normativas e instituciones que favorecen a los poderosos (incluyendo los actores financieros) y perpetúan la discriminación contra determinados grupos.³² Los efectos son percibidos, principalmente, por aquellos más marginados de la provisión de servicios públicos, los más pobres y vulnerables ante la inestabilidad económica y las crisis medioambientales y climáticas.

La transformación de la **tierra** en un activo comercializable que se puede comprar y con el que especular por parte de grandes capitales, afecta directamente a la capacidad de la gente de utilizarla para la producción de alimentos, afectando de este modo al derecho a la alimentación, la nutrición y la sanidad. De hecho, estas dinámicas influyen – a menudo en lugares distantes y opacos – en el espacio principal en el que se toman las decisiones sobre el uso de la tierra y de otros recursos. En consecuencia, generan profundas implicaciones para la soberanía de las comunidades sobre las decisiones que afectan directamente a sus vidas y bienestar. Estos efectos son especialmente graves para los pequeños agricultores tanto en el Norte como en el Sur, Global como se ve por los casos de Alemania y Brasil (Capítulo 1).

La financiarización del suministro de **sanidad** – incluyendo intereses financieros detrás de los sistemas sanitarios privados y el extremado poder financiero de las empresas farmacéuticas – afecta profundamente a la capacidad de las personas para acceder a unos servicios sanitarios (públicos) asequibles y de calidad.³³ Es más, el papel de las empresas aseguradoras cada vez influye más en la toma de decisiones, alejándola de los procesos políticos públicos legítimos y limitando la capacidad para avanzar en la prevención de enfermedades y en los programas de bienestar. Los efectos se notan en todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta Grecia (consulte el Capítulo 2). Esto a su vez también puede ampliar la carga sobre las mujeres, que son responsables, de manera desigual del trabajo del cuidado, especialmente cuando el cuidado público no es accesible (Capítulo 3).

La financiarización **de los derechos de las mujeres** ha guiado la agenda de desarrollo de manera que la inclusión financiera de las mujeres se ha convertido en la panacea de la igualdad de género. Esto ha significado ampliar el acceso de las mujeres a los créditos e invertir en mujeres empresarias como actores instrumentales en el proceso del crecimiento y el desarrollo económico. Sin embargo, este foco de “micro política” ha ensombrecido el análisis “macro político” de los obstáculos sistémicos para la realización completa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. De hecho, la agenda de financiación del “empoderamiento femenino” tiene consecuencias en el aumento de la deuda de las mujeres. Tampoco soluciona la falta del reconocimiento del trabajo no remunerado e infravalorado que sobrecarga a las mujeres en todas partes, desde el Norte hasta el Sur Global (Capítulo 3).

La financiarización de la **vivienda** funciona de manera similar, convirtiendo un bien social y un derecho humano en una máquina de beneficios para aquellos con más dinero para invertir y especular. La especulación inmobiliaria es una causa principal del aumento de la desigualdad, la indigencia y la inseguridad de la vivienda. A su vez, la inasequibilidad y la falta de disponibilidad de una vivienda decente son algunos de los problemas políticos sociales más difíciles del mundo y son una manifestación visible del fallo de las políticas gubernamentales. Los ejemplos de Dublín y de Ámsterdam son buena muestra de ello (Capítulo 4).

En cuanto a las **infraestructuras**, los grandes proyectos de infraestructura (carreteras, vías férreas, presas, minas, etc.) han ido siendo cada vez más externalizados hacia el capital financiero mundial. Estos proyectos, cuando se financian de manera privada, se centran en extraer la riqueza y crear beneficios para los accionistas de las empresas en lugar de proporcionar un servicio de buena calidad para los ciudadanos y respetar los derechos de las comunidades. Los megaproyectos de infraestructura, aunque a menudo son vistos por los inversores privados como negocios comercialmente viables y altamente rentables, pueden tener graves efectos sobre la vida de las personas y el medioambiente. Entre otros, pueden producir el desplazamiento masivo, el despojo y la violación sistemática de los derechos humanos, como en el caso de la autopista Mombasa-Mariakani de Kenia (Capítulo 5).³⁴

32 Philip Alston, “The Human Rights Implications of Extreme Inequality”, febrero de 2018, Informe del Relator Especial sobre pobreza extrema y derechos humanos, 27 de mayo de 2015 (A/HRC/29/31); Escuela de Derecho de NYU, N° de documento de investigación de derecho público 18-

33 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5829462/>

34 https://odg.cat/wp-content/uploads/2016/02/financialization_of_infrastructure_eng.pdf

En este contexto, la lucha por la igualdad y por los derechos humanos requiere la comprensión de la financiarización y la promoción activa de la desfinanciarización. Es urgente cuestionarse y cambiar de manera radical las estructuras de gobernanza que nos han traído hasta este punto. Y para ello un paso en esta transformación es que nos convirtamos en *activistas de la justicia financiera*.

La desfinanciarización como camino para la justicia financiera

La expansión desregulada de los actores financieros sobre nuestras economías, servicios y prácticas de desarrollo ha tenido efectos dominantes sobre la vida de las personas en todo el mundo. Desde profundizar y bloquear múltiples dimensiones de la desigualdad, hasta reducir el acceso de las comunidades a los recursos naturales comunes y restringir la provisión de servicios públicos a grupos excluidos y desfavorecidos. Y por mucho que la financiarización se manifieste en muchos niveles y actividades, la lucha por la justicia financiera puede avanzar si el activismo financiero llega a las organizaciones sociales que están atomizadas.

Diferentes sectores, como la alimentación y la tierra, la sanidad, los derechos de las mujeres, la vivienda y las infraestructuras sufren efectos específicos, pero es esencial comprender los retos dentro de cada sector y después conectar las luchas tanto de manera geográfica entre el Norte y Sur Global como entre los múltiples sectores para afrontar tal reto sistémico. Estudiar las desigualdades mundiales de manera multidimensional, es decir, no solo en términos de ingresos o propiedades, sino también afrontando las desigualdades de género, geográficas, intergeneracionales y raciales, nos permite tener una visión más amplia de lo que significaría tener una justicia social y financiera, y de cómo conseguirla.

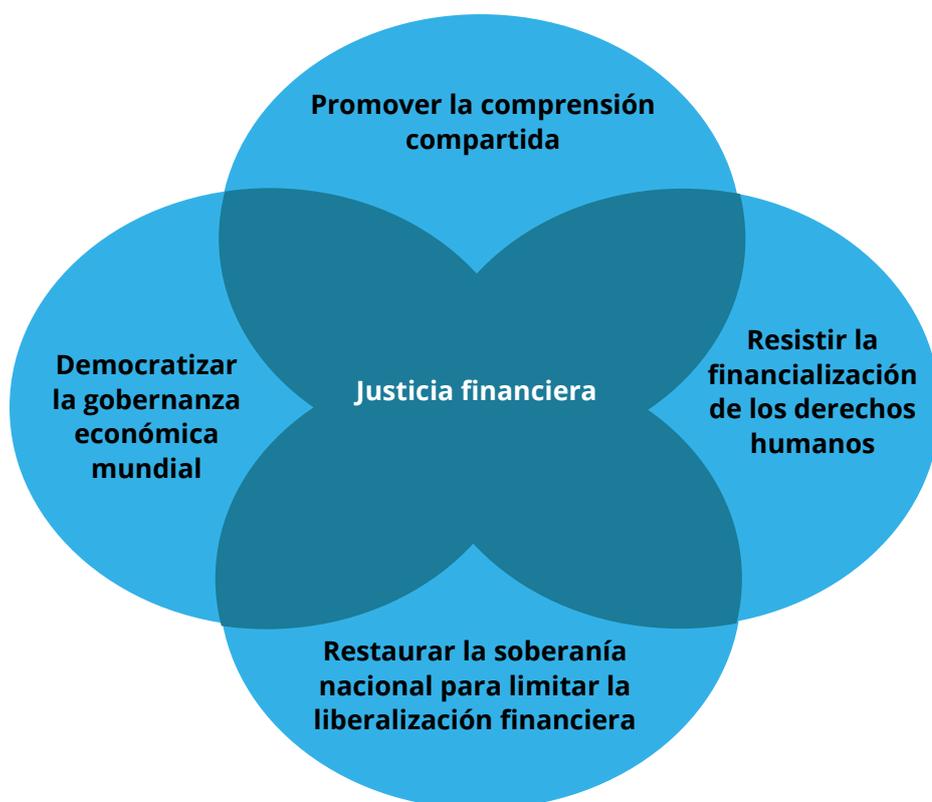
Existe por tanto una necesidad urgente de que las personas se muevan para converger alrededor de una agenda común para recuperar nuestras economías, reclamar los servicios públicos y proteger nuestros recursos naturales comunes. A través de este informe queda claro que la resistencia a nivel local ante la penetración de los actores financieros es extremadamente importante, y también lo es confrontar los motores de la desigualdad que ahora son mundiales, como la financiarización. Todo ello requiere esfuerzos concertados a niveles superiores

de creación de políticas. Así, se pueden proponer tres pilares principales de acción (consulte la Imagen 8):

- **Promover el conocimiento compartido y continuar cuestionándose la dinámica de la financiarización:** Es esencial despertar la conciencia de la gente alrededor de los verdaderos impactos de la financiarización en sus vidas y proporcionar herramientas de análisis nuevas para cuestionar la dinámica actual. Desafiar las desigualdades y cómo la multiplicidad y la expansión de los actores y servicios financieros están contribuyendo al problema puede evitar la complicidad no intencionada, particularmente dada la forma encubierta en la que esta dinámica se infiltra en los múltiples dominios de la vida;
- **Resistir los constantes intentos de alejar la toma de decisiones de los espacios políticos legítimos y democráticos, a menudo con el argumento de las “oportunidades de financiación” para hacer avanzar el progreso:** A nivel local y nacional, apoyar a la resistencia de los movimientos sociales frente a proyectos, políticas y otras intervenciones peligrosas respaldadas por actores financieros mundiales puede ser una forma efectiva de defender los derechos de las mayorías y poner cara y forma a una lucha que muy a menudo se considera inmaterial y difícil de conseguir;
- **Reafirmar la soberanía nacional para reestablecer límites saludables a la liberalización financiera y proporcionar una financiación crítica para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):** La última crisis financiera mundial ha expuesto críticamente las vulnerabilidades de un sistema financiero liberalizado y centrado en el sector privado. Sin embargo, muchas de las condiciones estructurales subyacentes que llevaron a la crisis solo han sido tratadas de forma superficial, si es que han sido tratadas. Por lo tanto, es esencial reestablecer la soberanía nacional para ayudar a evitar la nueva crisis al tiempo que se proporciona una financiación crítica para el desarrollo sostenible. Esto demanda la explotación del potencial de los bancos de desarrollo nacionales, restaurando la gestión de flujos de capital dentro de las herramientas políticas de los gobiernos, y presentar un sistema de impuestos a las transacciones financieras, entre otras medidas;³⁵
- **Democratizar la gobernanza económica mundial:** A nivel mundial, la justicia social y

35 K. Singh y S. Prato, “Preventing the next financial crisis while financing sustainable development: Three propositions”, Spotlight Report on Sustainable Development, 2019, https://www.2030spotlight.org/sites/default/files/spot2019/Spotlight_Innenteil_2019_web_chapter_III_Singh.pdf

Imagen 8: Múltiples niveles de acción necesarios para alcanzar la desfinanciarización y la justicia financiera



las narrativas basadas en los derechos deben encontrarse en el centro del proceso para reformular las poderosas instituciones mundiales y cambiar la gobernanza económica mundial. Las diferentes luchas sectoriales se deben unir bajo una agenda común, abogando por la reforma de instituciones existentes y el establecimiento de nuevas que sean capaces de regular los nuevos actores financieros de rápida evolución, y que puedan devolver la financiación a una contabilidad y control democráticos. Esto no solo exige construir una convergencia sobre las propuestas existentes referentes a nuevos pilares críticos de una gobernanza económica democratizado, como una entidad fiscal intergubernamental y una institución de ejercicio de deuda soberana bajo

la tutela de las Naciones Unidas, sino también dirigir el vacío institucional a la hora de regular los actores financieros, principalmente aunque no de manera exclusiva, la industria de la gestión de activos. Dichas medidas podrían traducirse en una mejora de la transparencia, la participación y el control público de la creación de políticas fiscales y financieras a nivel nacional y mundial.

Ha llegado la hora de reconocer las luchas de la gente para resistir las múltiples facetas del proceso de financiarización. Como también de hacer confluir las estrategias para dirigir las múltiples dimensiones de la desigualdad. De esta manera se puede alcanzar la justicia financiera. ¡La hora del activismo por la justicia financiera es ahora!

1. Alimentación y tierra

De la producción alimentaria a una oportunidad de inversión: la financiarización de la tierra

por Philip Seufert, FIAN International, basado en un análisis colectivo realizado por el International Planning Committee for Food Sovereignty's (IPC) Land and Territory Working Group*³⁶

La transformación de la tierra en un activo comercializable, que se puede comprar y con el que especular por parte de los actores financieros mundiales, afecta directamente a la capacidad de la población de utilizarla para la producción de alimentos. Se afecta así al derecho a la alimentación, la nutrición y la sanidad. Estos efectos son especialmente graves para los pequeños agricultores en las comunidades rurales tanto en el Norte como en el Sur Global. Este capítulo analiza particularmente la financiarización de la tierra, mostrando cómo los actores y mercados financieros mundiales condicionan cada vez más el modo en el que se producen, distribuyen y consumen los alimentos.

Un derecho humano se ha transformado en una "oportunidad de inversión"

Para todos nosotros, los alimentos son una necesidad fundamental y un derecho humano. Durante la última década, sin embargo, los actores financieros, como empresas de inversión y bancos, fondos de cobertura, gestores de activos, empresas corredoras, empresas de seguros, fondos de pensiones, fondos de capital y similares han transformado los alimentos en un activo financiero y en una "oportunidad de inversión". Los mercados financieros cada vez dominan más los sistemas de alimentación a todos los niveles: producción, distribución y consumo de los alimentos. Esto tiene consecuencias dramáticas para el modo en el que se producen los alimentos, cómo llegan hasta nuestros platos, las elecciones que hacemos sobre los alimentos y qué comemos y cómo lo conseguimos. Las consecuencias son especialmente dramáticas para las comunidades de productores a pequeña escala.

Las comunidades rurales de todo el planeta se enfrentan a un aumento dramático de la desposesión y la destrucción de sus tierras, pastos, bosques y océanos. En otras palabras, se enfrentan a la pérdida de acceso a y del control efectivo sobre sus territorios, que son el elemento clave de su subsistencia y del tejido social. El motor de esta dramática pérdida es el capitalismo financiero. En lo que frecuentemente se llama "Fiebre mundial por la tierra" o "Acaparamiento mundial de la tierra", las corporaciones transnacionales y los actores financieros están tomando el control de los recursos naturales de todo el planeta para extraer beneficios. Dos ejemplos, de Alemania y Brasil, ilustran este proceso y sus consecuencias.

En Alemania, uno de los terratenientes más grandes ha sido la empresa inversora KTG Agrar. Adquirió la mayor parte de sus tierras tras la reunificación alemana de 1990, beneficiándose de las políticas gubernamentales para privatizar y vender tierras que habían pertenecido al estado de la Alemania oriental. En 2016 KTG Agrar se declaró en bancarrota, desvelando una red de casi 100 empresas subsidiarias. Poco después de la bancarrota, los granjeros locales reclamaron la redistribución de los terrenos de la empresa a granjeros jóvenes y a pequeña escala y organizaron una ocupación del terreno y movilizaciones. Demandaron que las autoridades aplicaran las salvaguardas existentes en la legislación alemana sobre las tierras, de acuerdo a la cual las autoridades locales podrían denegar o restringir las transacciones de la tierra. Sin embargo, KTG Agrar consiguió vender rápidamente la mayoría de sus terrenos principalmente a dos inversores: la mayor aseguradora del mundo, Munich Re, en primer lugar, y a una fundación privada, llamada Gustav-Zech-Stiftung, con sede en el paraíso fiscal de Lichtenstein. Para evitar las normativas existentes compraron las empresas subsidiarias que poseían la tierra, en lugar de la tierra en sí. Esta maniobra cerró la

36 *El IPC es una plataforma mundial de movimientos sociales de productores alimentarios a pequeña escala y pueblos indígenas. Para más información, consulte www.foodsovereignty.org.



Una mujer posa de pie enfrente de su casa destruida al sur de Piauí, Brasil. La casa fue destruida para dejar espacio a plantaciones de soja. La expansión de los monocultivos de soja en la región se ve alimentada por el dinero que procede de los fondos de pensiones de Europa, los Estados Unidos y Canadá. Crédito de la imagen: Rosilene Miliotti / FASE

posibilidad de que las entidades públicas locales intentasen evitar o regular estas transacciones de tierra.³⁷

En la región brasileña de MATOPIBA, las comunidades de agricultores y pescadores están siendo expulsados de sus tierras, bosques y ríos para dejar espacio a la expansión de los monocultivos de soja. Estas comunidades han vivido durante generaciones en una región llamada El Cerrado, que tiene una importancia similar al Amazonas en cuanto a biodiversidad y cambio climático. Ahora, la deforestación, la contaminación del suelo y del agua con agroquímicos, la destrucción de la vida, la alteración de las comunidades y la inseguridad alimentaria y de nutrición hacen imposible la vida diaria. Además, está aumentando la violencia contra las comunidades por parte de grupos armados conectados con las empresas agroindustriales. En muchos casos, las personas

de la zona son obligadas a migrar a las favelas de las ciudades brasileñas. La apropiación de la tierra y la destrucción ecológica es posible debido a las enormes cantidades de dinero procedente de los fondos de pensiones de EE. UU., Canadá y Europa. De hecho, las empresas agroindustriales locales y nacionales han firmado acuerdos conjuntos con los actores financieros transnacionales. Si bien estos actores han estado financiando la producción de materias primas agrícolas para la agroindustria durante muchos años, actualmente la tierra se ha convertido en su objetivo principal. Consecuentemente, han aparecido nuevas empresas terratenientes, cuyo negocio es la especulación con la tierra. Esta evolución ha aumentado más la violencia a la que se enfrentan las comunidades rurales en la zona y han restringido su capacidad para producir alimentos.³⁸

37 Para más información, consulte Paula Gioia, "Resisting Land Grabbing in Germany", *Farming Matters*, abril de 2017. Disponible en: www.ileia.org/2017/04/18/resisting-land-grabbing-germany

38 Para más información, consulte FIAN International, Rede Social de Justiça e Direitos Humanos y Comissão Pastoral da Terra (CPT), *The Human and Environmental Cost of Land Business. The Case of MATOPIBA*, Brasil, 2018. Disponible en: <http://bit.ly/MATOPIBALandGrab>

Aunque el proceso de creación de materias primas no es completamente nuevo en el área de la alimentación y la agricultura – por ejemplo, se ha comercializado con los alimentos como materia prima durante siglos y los productos agrícolas han sido vendidos como valores específicos desde principios del siglo XX – estos ejemplos muestran ahora cómo los nuevos actores financieros se han visto más involucrados, y cómo el ritmo y la intensidad de la financiarización ha aumentado en los últimos años.

Efectos sobre las personas y las comunidades locales



Los efectos inmediatos sobre las comunidades locales son dramáticos. En muchos casos, la gente se ve despojada de la tierra, los bosques, pastos y fuentes de agua de los que dependen para

sobrevivir y tener una vida decente. En otros casos, las familias y las comunidades no pueden seguir produciendo alimentos y vivir como lo han hecho porque los ecosistemas de los que dependen han sido destruidos: se talan bosques para dejar sitio a plantaciones a gran escala, carreteras, presas, minas y similares; los ríos son desviados o secados debido al exceso de extracción de agua por las empresas agroindustriales o mineras; los suelos y recursos hídricos son contaminados por productos químicos peligrosos; los cultivos son contaminados por organismos genéticamente modificados (OGMs) que se utilizan en monocultivos industriales; las carreteras por las que la gente accede a escuelas y servicios sanitarios son privatizadas o clausuradas... Frente a ello, la población resiste, pero la violencia y la represión son fuertes, y alimentar a una familia y tener una vida decente en tales condiciones es extremadamente difícil. Lo que queda son paisajes desolados con plantaciones de monocultivo interminables, pero sin personas que respeten y cuiden los ecosistemas locales.

Aunque los “inversores” implicados ponen en funcionamiento grandes campañas de relaciones públicas para contarle al mundo que sus negocios contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria, proporcionar empleo y desarrollo y contribuir a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas. La verdad es que las comunidades de agricultores a pequeña escala son las que producen el 80 % de los alimentos mundiales.³⁹ Son sus sistemas agroecológicos los que proporcionan un trabajo

decente y garantizan ingresos para cientos de millones de familias al tiempo que mantienen las comunidades rurales que crean cohesión y sostienen una expresión cultural rica.

Agroecología, desafiar las estructuras de poder y democratizar la gobernanza de los sistemas de alimentación

La agroecología es un componente clave del proyecto político de soberanía alimentaria que ha sido definido por movimientos sociales de productores alimentarios a pequeña escala y pueblos indígenas como “el derecho de las personas, los pueblos, las comunidades y los países a definir sus propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias, y de gestión de tierras y agua, que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas para sus circunstancias únicas”.⁴⁰ La agroecología es una propuesta para transformar radicalmente nuestros sistemas alimentarios y reparar el daño creado por el sistema alimentario industrial, que ha llevado a la destrucción de ecosistemas, la degradación de los suelos, el empobrecimiento de la pesca, semillas tolerantes a los herbicidas, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, como también la malnutrición y los problemas de sanidad graves relacionados con dietas basadas en la comida industrial y basura (obesidad, diabetes, etc.). Las prácticas productivas de la agroecología, como el cultivo intercalado, la pesca tradicional y el pastoreo trashumante, la integración de cultivos, árboles, ganado y pesca, el abonado, el compostaje, el uso de semillas y especies de animales locales y demás, tienen unas raíces muy profundas en el conocimiento e innovaciones desarrolladas por los campesinos y pueblos indígenas durante siglos, al igual que en sus formas de vida. La agroecología es fundamentalmente política debido a que desafía y transforma estructuras de poder en la sociedad. El control sobre la tierra, el agua, las semillas, el conocimiento y la cultura necesita estar en manos de las comunidades y de las personas que alimentan al mundo. Las diversas formas de producción alimentaria a pequeña escala, basadas en la agroecología, generan conocimientos locales, promueven la justicia social, nutren la identidad y la cultura y fortalecen la viabilidad económica de las zonas rurales.

39 http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Factsheet_SMALLHOLDERS.pdf

40 http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/sustainability_pathways/docs/Factsheet_SMALLHOLDERS.pdf

Como ha quedado inevitablemente claro que el sistema de producción alimentaria industrial, basado en combustibles fósiles, es insostenible en todas sus formas posibles. La apropiación de la tierra por parte de las finanzas mundiales elimina las posibilidades de escalar a una producción alimentaria agroecológica, ampliar los mercados territoriales y garantizar alimentos nutritivos y saludables para todos y todas.

Mecanismos tras la financiarización de la tierra



Es importante comprender que muchos de los nuevos “inversores” en agricultura y tierra no están principalmente interesados en la producción, sino en obtener ingresos rápidos de la especulación sobre

los alimentos y las inversiones relacionadas con la tierra. Históricamente, los actores financieros han respaldado la expansión de la producción de alimentos industriales. Las empresas financieras y los bancos comerciales han proporcionado el capital necesario a las empresas agroindustriales para ampliar a gran escala los monocultivos de efectivo rápido como la soja, el azúcar, el algodón, el aceite de palma, el maíz y otros. En muchas partes del mundo, esta expansión se aceleró en la década de 1990.⁴¹ Tras la crisis financiera en Asia y la rotura de la burbuja de las “punto com” en los EE. UU. a finales de la década de 1990 y principios de los 2000, las finanzas mundiales buscaron nuevas áreas de inversión. En este contexto, identificaron las materias primas agrícolas como la soja, el azúcar, el maíz, el algodón, el eucalipto y la carne como bienes en los que colocar su “exceso de capital”. Esto ha llevado a un “boom de bienes básicos”, que ha resultado en el aumento especulativo del precio de las materias primas agrícolas. Y han alimentado, además, la expansión territorial de monocultivos y agroindustrias, especialmente en países en vías de desarrollo y emergentes.

Tras la crisis financiera de 2008, comenzó a tener lugar una evolución destacable: mientras el precio de los bienes agrícolas disminuía en los mercados internacionales, el interés de los inversores en la tierra continuaba en alza, y el precio de la tierra continuó creciendo en muchas partes del mundo. Por aquel entonces, las organizaciones de productores alimentarios y las ONG comenzaron a hacer sonar las alarmas sobre lo que llamaron la “Fiebre mundial

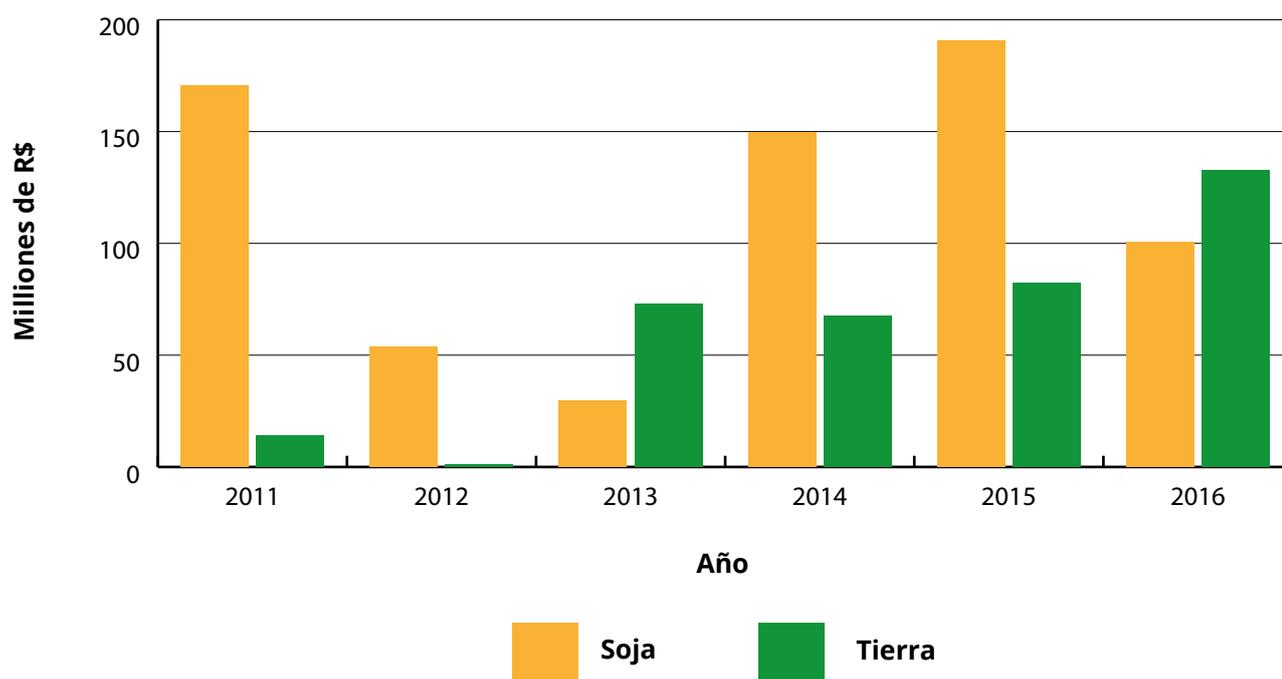
de la tierra”, o la “Apropiación mundial de la tierra”, demandando una regulación pública para proteger y garantizar los derechos de los pueblos. Muchos acuerdos de tierra de los últimos 10 o 15 años se basan, teóricamente, en establecer o ampliar proyectos agrícolas a gran escala, pero la expansión territorial de las plantaciones agrícolas industriales sirve principalmente para justificar el aumento de los precios de la tierra, y para que corporaciones financieras y agroindustriales tomen el control de la tierra, los bosques y la biodiversidad. El objetivo principal del capital financiero es la tierra, independientemente de la producción de bienes agrícolas.

El caso de MATOPIBA, Brasil, mencionado anteriormente, ilustra esta evolución. Algunas de las empresas implicadas en el negocio de la tierra en esta región aún están vinculadas a la producción agrícola industrial. Un buen ejemplo es la empresa SLC (Schneider Logemann Company), cuya sucursal SLC Agrícola es una de las mayores productoras de soja de Brasil, mientras que la rama SLC Land Co. se ha convertido en un gran participante en el negocio de la tierra. SLC controla casi medio millón de hectáreas de tierra en Brasil, de las que unas 300 000 hectáreas están plantadas con soja. En 2015, SLC generó por primera vez más ingresos a través de sus compraventas de tierras que mediante su principal negocio hasta la actualidad, la producción de soja.⁴² Otras empresas con negocios en MATOPIBA ya no están directamente vinculadas a la producción y se concentran totalmente en adquirir, vender, arrendar y/o gestionar la tierra. Un ejemplo es la empresa Radar Imobiliária Agrícola S/A, que fue creada a través de una joint venture entre el fondo de pensiones estadounidense TIAA y la mayor azucarera de Brasil, Cosan. El objetivo de Radar es obtener ingresos capitalizados de la tierra, es decir, adquirir terrenos baratos, establecer granjas en dichos terrenos y después venderlos, en muchos casos mediante transacciones especulativas. La implicación de los actores financieros internacionales – en este caso especialmente fondos de pensiones de EE. UU., Canadá y Europa – que canalizan inmensas cantidades de capital hacia el negocio de la tierra es una expresión de la financiarización de la tierra. Alimentan la especulación, intentando extraer la riqueza asociada a la compraventa de terrenos en la región. Los fondos de pensiones, los fondos de inversión y otros instrumentos financieros se benefician directamente del aumento de los precios de la tierra, ya que aumenta el valor de sus carteras.

41 Brasil, uno de los mayores productores de bienes agrícolas, es un buen ejemplo de este proceso. Consulte la Red para la Justicia Social y los Derechos Humanos, *Transnational corporations and land speculation in Brazil*, 2018, págs. 10-35. Disponible en: https://social.org.br/images/MATOPIBA_EN.pdf.

42 *Ibidem*.

Imagen 9: Ingresos netos de SLC en millones de reales brasileños (2011-2016) con la soja (verde) y la tierra (naranja)⁴³



Fuente: Red para la Justicia Social y los Derechos Humanos, 2018

La financiarización de la tierra es, así, una nueva forma de extraer y acumular riqueza por parte de las finanzas mundiales. La creación de la tierra como nueva clase de activos es una parte importante de este proceso. Al mismo tiempo, varios países han puesto en marcha medidas que permiten la creación de instrumentos financieros, como contratos a futuro y derivados,⁴⁴ que facilitan aún más la especulación con la tierra.

Es importante destacar que la creciente dominación de las finanzas mundiales sobre los territorios y las vidas de las personas no viene de la nada, sino que es el resultado de la creación de políticas de las últimas décadas. Actualmente, varias instituciones y políticas contribuyen a crear un entorno en el que las finanzas mundiales pueden operar y acaparar el control sobre los bienes comunes. A niveles nacionales, los gobiernos y parlamentos han desregulado el comercio y la inversión, al igual que las leyes que rigen la tierra, la agricultura, los bosques, océanos y la pesca, la protección medioambiental, la vivienda, los servicios públicos, la energía, el transporte y otros ámbitos relacionados con las infraestructuras. En muchos

países, los centros/agencias de inversión promueven y facilitan “inversiones” privadas y especulaciones en todo tipo de sectores. Desde la agricultura y laminaria, hasta el turismo, entre otros. El papel de las instituciones financieras públicas, que se supone que deben regular y monitorizar las transacciones financieras, acompaña a los actores financieros que expanden sus operaciones comerciales a nuevas áreas. En muchos casos, estas instituciones están actuando como facilitadores del capitalismo financiero. Un ejemplo es la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (DG FISMA)⁴⁵, que ha iniciado procedimientos contra varios Estados miembro de la UE que han aprobado legislaciones que regulan el mercado de la tierra y limitan la propiedad de la misma por parte de corporaciones y/o extranjeros. La DG FISMA establece que los Estados miembro de la UE deben, principalmente, garantizar el libre movimiento de capital dentro de la UE, que es uno de los principios básicos de la Unión.⁴⁶ Lo que significa que los derechos humanos de estos pueblos están sometidos al movimiento libre del capital. En otros casos, los ministerios estatales

43 Network for Social Justice and Human Rights, 2018

44 Los Derivados son instrumentos financieros con un valor que se basa en, o deriva de, un activo o grupo de activos subyacente. El derivado en sí es un contrato entre dos o más partes, y su precio es determinado por las fluctuaciones del activo subyacente. Los activos subyacentes más comunes incluyen acciones, bonos, materia primas, divisas, tipos de interés e índices del mercado. Un contrato a futuros es un acuerdo legal para comprar o vender una materia prima particular o activo a un precio predeterminado en un momento específico del futuro. Los contratos a futuros se compran y venden en mercados a futuros, o bolsa de futuros, para su entrega en una fecha acordada en el futuro con un precio fijado en el momento del trato.

45 Las Direcciones Generales de la UE son una especie de ministerios de la Comisión de la UE.

46 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1827_en.htm?locale=EN.



Una mujer zambiana muestra la tierra que su comunidad utilizaba antes de que fuese reclamada por los inversores internacionales de Agrivision. Crédito de la imagen: Roman Herre / FIAN Alemania

que han supervisado los instrumentos financieros, como los fondos de pensiones, no han monitorizado adecuadamente sus operaciones, ni han asegurado una normativa apropiada.

De hecho, muchos estados – en particular los países ricos - se oponen o entorpecen con respecto a normativas para imponer una responsabilidad a las corporaciones transnacionales (TNCs) y a los flujos de finanzas internacionales. En su lugar, confían en la buena voluntad de las empresas y en programas de autorregulación voluntarios, que no prevén límites para que las corporaciones e inversores respeten los derechos humanos y el medioambiente ni provisiones para castigarles por los delitos que cometan. Al mismo tiempo, los actores empresariales y financieros reciben cada vez mejor consideración y son tratados como participantes clave en la gobernanza, incluyendo la creación de políticas. Esto cambia profundamente la forma en la que se ejerce la autoridad pública en todos los niveles, especialmente a niveles nacionales y en el sistema multilateral de las Naciones Unidas.

¿Desarrollo o beneficios?



A nivel internacional, las instituciones financieras internacionales (IFIs), incluyendo los bancos de desarrollo, han tenido papeles importantes en abrir camino para la incursión de las finanzas mundiales dentro de la vida y tierra de los pueblos. Esto apunta al hecho de que la lógica de las finanzas ha penetrado en más y

más sectores y en el dominio de la política. Como la cooperación al desarrollo. De hecho, las agencias de desarrollo, en particular sus ramas financieras (las conocidas instituciones de financiación del desarrollo, IFD), actúan cada vez más como cualquier otro inversor financiero, a pesar de su mandato público de contribuir a las políticas de cooperación al desarrollo de los estados. Un ejemplo es la implicación de la cooperación al desarrollo alemana en un proyecto de inversión agrícola a gran escala en Zambia.

Las comunidades de campesinos zambianas están luchando por defender sus tierras frente al inversor financiero Agrivision Africa. Con sede en el paraíso fiscal de Mauricio, la empresa es propiedad de la Corporación Internacional de Financiación (CIF) del Banco Mundial, la Institución Financiera del Desarrollo noruega (Norfund) y una empresa de inversión sudafricana llamada Zeder. Agrivision Africa, mediante su subsidiaria Agrivision Zambia, adquirió al menos siete granjas en este país, con un total de 19 000 hectáreas de tierra. Además, hizo una fuerte inversión para que las granjas fuesen más productivas a través de la mecanización, la irrigación y otros procesos intensivos de capital, que también resultó en una mayor expansión. En la provincia de Mkushi, el proclamado “corazón de la agroindustria zambiana”, Agrivision expandió los campos hasta las zonas limítrofes que habían sido, durante muchos años, cultivados para la producción alimentaria de la comunidad local, Ngambwa. Ahora, esta comunidad ha perdido la mayoría de su tierra agrícola y ha sido

amenazada varias veces con el desalojo por las fuerzas de seguridad privada de la empresa. Uno de los inversores en Agrivision Africa es el Fondo Africano de Comercio Agrícola e Inversión (AATIF), con sede en Luxemburgo, que se describe a sí mismo como una “estructura de financiación público-privada innovadora”. Fue constituido por el Ministerio alemán para la Cooperación y el Desarrollo Económico (BMZ) y su rama de asistencia financiera, el Banco de Desarrollo KfW, en colaboración con Deutsche Bank AG. Curiosamente, el Ministerio alemán para la Cooperación al Desarrollo (BMZ) fundó este fondo en Luxemburgo porque no habría sido legal hacerlo en Alemania. Para 2018, el fondo desembolsó 160 millones de USD, que generaron unos beneficios de 33 millones de USD – en Luxemburgo, no en Zambia.⁴⁷

Bajo la bandera de la “inclusión financiera”, las agencias de cooperación al desarrollo también se han convertido en actores clave para facilitar el acceso a la financiación para las poblaciones pobres y rurales. Es importante destacar que uno de sus pilares clave, la industria de los microcréditos, ahora renombrada “inclusión financiera”, requiere tierra privada y transferible para los préstamos relacionados. Los micro-seguros son otro sector cada vez más apoyado por la cooperación al desarrollo, que empujan a los pueblos pobres dentro de los mercados financieros y de la lógica de la inversión.

Financiarización de la tierra y las tecnologías digitales



La financiarización en general, y la de la tierra en particular, está vinculada en muchos modos a la digitalización. Es decir, la integración de las tecnologías digitales, basadas en el proceso de convertir la información a un formato digital, también llamado, “digitalización”. De hecho, las tecnologías digitales son claves para permitir a la financiación mundial ejercer control sobre los territorios de los pueblos. Controlar los negocios financieros y los flujos de efectivo de los centros

financieros mundiales requiere flujos de información y herramientas para llevar a cabo las transacciones y compra venta de tierras, partes u otras formas de territorio. De hecho, la digitalización, que en último lugar significa la integración de las tecnologías digitales en las diferentes esferas de la vida, ha sido un motor clave de la financiarización mundial. El crecimiento exponencial de la financiación mundial, por ejemplo, ha sido solo posible debido a las tecnologías de la información, incluyendo el comercio de alta frecuencia. La digitalización y las tecnologías de la información también han sido claves para traer la tierra y otros bienes comunes a los mercados financieros mundiales.

Es importante distinguir dos aspectos clave de la digitalización de la tierra. El primero, el acceso a datos del terreno de localización muy específica, como la calidad del suelo, los rendimientos de la producción, el acceso al agua, las cubiertas forestales, la evolución de los precios de la tierra, los patrones de precipitaciones y demás datos que son esenciales para los inversores. La digitalización hace posible que un bróker financiero de Singapur, por ejemplo, acceda a dicha información de una parcela en Colombia. Bajo la bandera de la “digitalización de la agricultura” subyace fuertemente la recogida y privatización de datos en nubes virtuales dirigidas por los conglomerados transnacionales John Deere, AGCO y CHN.⁴⁸

El segundo, la digitalización de los datos de administración de la tierra, en particular la propiedad de la misma o los datos catastrales, permite (potencialmente) las transacciones de los terrenos en la esfera virtual. Actualmente, se están llevando a cabo varios esfuerzos para aplicar la tecnología de cadena de bloques a la tierra. Esto es la tecnología subyacente a criptomonedas como el Bitcoin y que se describe comúnmente como un libro de contabilidad abierto, distribuido/descentralizado que puede registrar información y transacciones entre dos partes. La tecnología de la cadena de bloques no solo permite el almacenamiento de datos de administración de la tierra, sino que también permite que se lleven a cabo transacciones a través de los conocidos “contratos inteligentes”, que se producen de manera ampliamente automatizada y entran en vigor de manera automática. Se han llevado a cabo experiencias piloto en diferentes países de todo el mundo.⁴⁹ La literatura relacionada se centra

47 Para más información, consulte Roman Herre, “Fast track agribusiness expansion, land grabs and the role of European public and private financing in Zambia,” publicado por Hands off the Land Alliance, 2014. Disponible en: <http://bit.ly/AgribusinessLandGrabZambia>.

48 Grupo ETC, “Software vs. Hardware vs. Nowhere,” 2016. Disponible en: <http://www.etcgroup.org/content/deere-co-becoming-monsanto-box>. Se espera que la demanda de drones, robots, sensores, cámaras etc. relacionados con la agricultura crezca de 2,3 mil millones de USD en 2014 a 18,45 mil millones de USD en 2022.

49 Se están llevando a cabo pilotos en Georgia, Ucrania, Suecia, India, Australia, Dubái, Honduras, EE. UU. y Ghana. J.M. Graglia y C. Mellon, “Blockchain and Property in 2018: at the end of the beginning”. Ponencia presentada en el Congreso anual del Banco Mundial sobre Tierra y Pobreza, 2018. Disponible en: www.conftool.com/landandpoverty2018/index.php/02-11-Graglia-864_paper.pdf?page=downloadPaper&filename=02-11-Graglia-864_paper.pdf&form_



Trabajadora de una plantación de árboles en la provincia de Niassa, Mozambique. Los inversores financieros europeos han presionado para el establecimiento y la expansión de plantaciones de árboles en el norte de Mozambique. Los campesinos que perdieron sus tierras se encuentran obligados a trabajar en las plantaciones como temporeros por un sueldo bajo. Crédito de la imagen: Duckin' and Divin' Films.

principalmente en estados y administraciones ineficaces, transmitiendo el mensaje de que los actores privados serán mucho más eficaces cuando se encarguen del trabajo de administración de la tierra de manera descentralizada y sin interferencias de las autoridades públicas. Las empresas implicadas prometen un “acceso más fácil, mayor precisión, mejor escalabilidad y transparencia”,⁵⁰ e incluso una administración más democrática de la tierra.

Nuevos retos para las comunidades que defienden sus derechos



Para las comunidades y pueblos afectados, la financiarización ha llegado de la mano de nuevos retos para defender sus derechos y mantener controladas a las empresas implicadas en el acaparamiento de la tierra. Esto

se debe porque los inversores financieros mundiales a menudo actúan a distancia, confiando en una compleja red de intermediarios, brókers, empresas e inversores internacionales, nacionales y locales – tanto legales como no – que limitan el control de los territorios de los pueblos. Normalmente compran acciones de empresas que han sido constituidas,

por ejemplo, para acumular terrenos. A través de dichos acuerdos de compraventa de acciones, no son considerados propietarios legales de la tierra, sino más bien “inversores”, incluso aunque su influencia como accionistas les dé el control de facto sobre la empresa propietaria de la tierra y, por tanto, sobre la tierra en sí. Dichos acuerdos también les permiten librarse de la legislación que limita la propiedad de la tierra a manos de extranjeros. Es más, son capaces de eludir la responsabilidad por el acaparamiento de la tierra y “externalizar” el proceso de acaparamiento de tierras hacia los brókers locales. Los actores financieros utilizan complejas estructuras de inversión – o redes de inversión – que implican a varios actores, empresas subsidiarias y similares para distanciarse deliberadamente de cualquier tipo de responsabilidad por los efectos de sus operaciones.

Además, la financiación mundial actúa principalmente a través de un pequeño número de centros financieros, centros financieros externalizados (CFEs) y paraísos fiscales para evitar el control público y la fiscalidad.⁵¹ Las comunidades y organizaciones que desean saber quién está financiando y beneficiándose de los proyectos de “inversión” en sus zonas tienen que embarcarse en un complicado proceso de investigación. Además, atribuir la responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos y los abusos

id=864&form_version=final.

50 <https://bravenewcoin.com/news/brazil-pilots-bitcoin-solution-for-real-estate-registration/>

51 Al menos, el 30 % de todas las inversiones directas extranjeras y cerca del 50 % de todos los flujos comerciales a través de paraísos fiscales, mientras que una sexta parte de toda la riqueza privada mundial está escondida en los paraísos fiscales. Consulte: <http://longreads.tni.org/state-of-power-2019/geography-of-financial-power>.

a cada uno de los actores implicados se convierte en un reto importante, no solo para ellas, sino también para los sistemas judiciales existentes.

Resistencia



Los movimientos sociales rurales de productores de alimentos y los pueblos indígenas han estado defendiendo sus tierras y territorios frente a la usurpación y la destrucción medioambiental durante mucho

tiempo. En todo el mundo, las comunidades y colectivos están resistiendo, protestando contra todo tipo de proyectos de "inversión". En algunos casos, son luchas muy locales, otras veces, se convierten en campañas internacionales. Los movimientos sociales y los pueblos indígenas también han estado luchando por la restitución de la tierra al igual que por reformas agrarias y acuáticas, ya que no es legítimo que unos pocos posean y controlen la mayoría de tierras, bosques, mares, ríos y el resto de la naturaleza. También están luchando por el reconocimiento y garantía de sus derechos sobre los territorios, incluyendo la posesión habitual y colectiva de sus comunidades y sus sistemas de gestión.

Según los derechos humanos fundamentales y la visión compartida de la soberanía alimentaria, los movimientos sociales de productores de alimentos y pueblos indígenas han desarrollado propuestas detalladas sobre cómo gobernar los territorios y los bienes naturales.⁵² Estas propuestas se basan principalmente en el reconocimiento internacional de los derechos humanos y las obligaciones estatales que surgen de ellos, en particular el derecho a la alimentación y la nutrición, al igual que los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales (Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas), y los derechos de los campesinos y otros pueblos rurales sobre sus tierras y recursos naturales (Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y otros Pueblos que Trabajan en Zonas Rurales). Los tratados y declaraciones sobre los derechos humanos, al igual que otros instrumentos internacionales que han adoptado los Estados miembro de la ONU (p. ej. la Guía para la Gobernanza Responsable de la Tierra, la Pesca y los Bosques), muestran que las organizaciones de los pueblos rurales han sido capaces de conseguir un reconocimiento parcial de su visión y sus propuestas.

Con la financiarización, las comunidades se enfrentan a tratados y problemas nuevos y viejos que amenazan de manera fundamental las visiones, derechos y formas de vida de los pueblos rurales. Basándonos en las luchas pasadas, debemos encontrar nuevas formas de conseguir y garantizar los derechos y la dignidad de los pueblos en el nuevo contexto mundial. El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) ha hecho suya esta reflexión y discusión. Basándonos en nuestro análisis de los efectos y los motores de la financiarización, hemos identificado tres áreas clave de acción:

- La primera, el reconocimiento completo y la implementación eficaz del derecho humano sobre la tierra y el territorio por parte de los estados y de la comunidad internacional.
- El segundo, garantizar que la legislación a nivel nacional y/o regional respeta, protege y garantiza los derechos de las comunidades sobre sus tierras, bosques, pastos, zonas de pesca y similares. Un aspecto clave de este contexto es el reconocimiento completo legal y el soporte a las formas de autogobernanza de las comunidades y su gestión de tierras y áreas comunes, incluyendo sus sistemas de posesión tradicionales y sus derechos colectivos.
- La tercera, según sus obligaciones por los derechos humanos, los estados necesitan poner en marcha marcos que regulen a las empresas, especialmente sus operaciones transnacionales y sus flujos financieros. Dichos marcos deben garantizar la responsabilidad y prever sanciones por los delitos cometidos por las corporaciones. Dado que el capital financiero opera desde un pequeño número de centros financieros y paraísos fiscales, cerrar dichas jurisdicciones secretas es una parte importante de la lucha por la justicia social.

Pero la normativa sola no será suficiente. Por lo tanto, necesitamos medidas audaces que resocialicen y redistribuyan la riqueza y los recursos que han sido acaparados y acumulados por las finanzas mundiales. En otras palabras, tenemos que expropiar a los (nuevos) expropiadores.

52 www.fian.org/fileadmin/media/publications_2015/2011_3_CSOProposals_LandTenureGuidelines.pdf.

2. Sanidad

Hacer de la sanidad un proyecto mundial financiable

por Nicoletta Dentico, Society for International Development (SID).

“El desarrollo económico y social, basado en un Nuevo Orden Económico Internacional, es de vital importancia para la obtención completa de la sanidad para todos y para la reducción de la brecha entre el estado sanitario de los países en vías de desarrollo y los desarrollados.”

Declaración de Alma Ata, OMS septiembre de 1978

Las instituciones financieras y las entidades de la intermediación financiera son los protagonistas del orden económico actual y tienen un papel dominante en la sanidad. Este proceso en el que la sanidad mundial cada vez más dependiente de los mercados financieros a veces se describe como “financiarización”. Una tendencia que se promociona ahora bajo la bandera del desarrollo sostenible y la provisión de la Cobertura de Sanidad Universal. Así, presenta una serie de temas críticos en términos de gobernanza y organización de la sanidad, monopolios del sector empresarial y demandas de participación democrática, el acceso desigual al cuidado sanitario, al igual que la redefinición cultural y política de la forma en la que se debe interpretar y buscar el derecho universal a la sanidad.

De Alma Ata al efecto de la crisis financiera de 2008 en la sanidad griega

La inseparable conexión entre el derecho a la sanidad y el orden económico internacional mencionado en la Declaración de Alma Ata⁵³ es una lección dura que el pueblo griego conoce demasiado bien. Su historia, sin embargo, no tiene nada que ver con la aspiración para desarrollar un sistema económico que compense

los errores del colonialismo y la dominación económica extranjera “en el nombre de la justicia social”, como indican los autores de la Declaración. Los griegos han pagado un precio desorbitado por los problemas económicos de la globalización basada en la privatización y desregulación, especialmente la crisis financiera que surgió en septiembre de 2008 causada por las políticas de préstamos bancarios privados de EE. UU. La primera crisis financiera a nivel mundial de la historia. Los excesivos programas de ajuste económico impuestos a Grecia y a otros países por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando la crisis golpeó Europa son un duro recordatorio de que los mayores acreedores del mundo no se preocupan demasiado de la justicia social, los derechos de las personas y la soberanía nacional cuando están en juego sus finanzas. Aún existe uno de los mayores problemas en una zona de la que los europeos se han enorgullecido durante mucho tiempo: la sanidad pública.

Cuando Grecia tuvo problemas en mayo de 2010, el mayor proveedor de insulina de Europa, Novo Nordisk, fue el primero en declarar su decisión de dejar de vender determinados tipos de insulina (17 productos) a las personas en Grecia que tuvieran diabetes de tipo 1 y necesitaran insulina para sobrevivir (más de 50 000 pacientes). La empresa danesa rechazó las demandas del gobierno griego de recortar los precios en un 25 por ciento, negándose a “ser acosado con recortes de precio”, esto es lo que aparentemente sucede cuando a las empresas se las deja solas en el mundo. Como compensación. Novo Nordisk ofreció elaborar otro producto disponible en su versión genérica, gratuito:⁵⁴ una mejor opción para ellos en vez de tener que poner en peligro su posición dominante y revisar el precio estándar de la insulina para toda Europa; y una confirmación firme del vínculo entre la rentabilidad económica y la sanidad, por si a alguien le quedaban dudas.

En junio de 2016, en el Banco Nacional de Grecia volvió a sonar una alarma mayor sobre el efecto de las políticas de austeridad de la UE.⁵⁵ Su informe proporcionó estadísticas para demostrar la extensión del deterioro de la sanidad griega en los años de

53 https://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf

54 <https://www.bbc.com/news/10189367>

55 <https://greece.greekreporter.com/2016/06/17/bank-of-greece-report-concludes-greeks-health-deteriorating-life-expectancy-shrinks/>

acuerdos de préstamos y políticas de austeridad. Las medidas a menudo se implantaron rápidamente, sin considerar suficientemente los posibles efectos secundarios, cuando el gobierno griego se vio forzado a reducir inversiones y a poner límites estrictos a los servicios sociales básicos, aumentando la desigualdad y socavando la resiliencia de la comunidad ante la crisis. Solo el presupuesto nacional de sanidad sufrió un recorte del 36 por ciento entre 2009 y 2014: el coste compartido de la sanidad aumentó significativamente, incluso para aquellos con seguros, mientras que se introdujeron restricciones de titularidad en relación al nacimiento de niños y a un número de otros tratamientos esenciales.⁵⁶ Tal hundimiento del sistema de sanidad pública resultó en un aumento del 50 por ciento de mortalidad infantil, especialmente entre niños menores de 1 año; el aumento de enfermedades crónicas en un 24,2 por ciento, debido al bloqueo del sistema sanitario y a la ausencia de los tratamientos médicos necesarios causada por una falta de medios financieros; y en el aumento drástico de enfermedades mentales entre la población debido a la crisis económica, del 3,3 por ciento en 2008 hasta el 12,3 por ciento en 2013. Según el *British Medical Journal*, la tasa general de suicidios aumentó en un 35 por ciento entre 2010 y 2012.⁵⁷ La prescripción de Grecia para el golpe al sistema sanitario fue un seguro de salud subvencionado por el estado, pero con la tasa de desempleo al 27 por ciento, muchos se quedaron fuera de los criterios de admisión.

La financiarización y sus “armas de destrucción masiva”



La forma de nuestra economía y el desarrollo de nuestras vidas dentro de esta se ven profundamente afectadas por los flujos financieros y su volatilidad. Esta tendencia se describe a veces como “financiarización”, que se refiere al “creciente papel de los motivos económicos, los mercados financieros, los actores financieros y las instituciones financieras en el funcionamiento de las economías nacionales e internacionales”.⁵⁸ A través de la privatización, la desregularización y los

flujos de crédito, la financiarización ha supervisado una conversión a gran escala de la riqueza pública en capital privado. La crisis financiera de 2008 solo magnificó este proceso, cuando se adoptaron rescates con financiación pública para cubrir los riesgos de las financieras privadas.⁵⁹ Como sugiere una reciente publicación del Transnational Institute, “las finanzas públicas ascienden a más de 73 trillones de USD, equivalente al 93 por ciento del producto interior bruto mundial, cuando incluimos fondos multilaterales, de pensiones y de riqueza soberana, y bancos centrales”.⁶⁰ Esto significa que la distribución eficaz del capital público es una de las tareas más valiosas en una economía mundial, y la financiación tiene un potencial tremendo si vamos a tratar la enorme desigualdad estructural que se ha convertido en la característica definitoria de nuestro tiempo.

Pero podemos hacerlo mucho mejor. La crisis financiera y económica mundial de 2008 es una demostración elocuente de que el *laissez-faire* no funciona. Los mercados financieros descontrolados produjeron bancos “demasiado grandes para caer” y no estimularon la competencia, sino que crearon oligopolios y varios golpes a los intentos de los reguladores de organizar los mercados a favor del interés público. Los precios de los activos financieros no consiguieron señalar la crisis inminente. Las rentables especulaciones que alteraron el sistema económico y llevaron al derrumbe y a la miseria de millones de personas afectadas – “armas financieras de distracción masiva”, como el inversor Warren Buffet las llama – vienen de la mano de pagos muy altos para las sociedades, como hemos visto en Grecia, junto con muchos otros países del Norte y del Sur Global, tras la crisis. Describen el rumbo que toma el mundo cuando los “mercados financieros, las instituciones financieras y las élites financieras obtienen una mayor influencia sobre la política económica y sus resultados”.⁶¹ De esto es de lo que se trata la financiarización de la economía. Un proceso que, en último lugar, amenaza los esfuerzos primarios necesarios para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), y nos hace vulnerables a los frecuentes ciclos de crisis que el “capitalismo de casino” gestionado por el comercio digital de alta frecuencia necesita para sobrevivir.

56 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/266380/The-impact-of-the-financial-crisis-on-the-health-system-and-health-in-Greece.pdf.

57 C. Branas, A. Kastranaki, et al., “The impact of economic austerity and prosperity events on suicide in Greece: a 30 year interrupted time-series analysis”, *British Medical Journal*, 2014. Disponible en: <https://bmjopen.bmj.com/content/5/1/e005619>.

58 G.A. Epstein, “Introduction: Financialization and the World Economy”. En G. A. Epstein, ed., *Financialization and the World Economy*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, 2006, págs. 3-16.

59 I. Ortiz y M. Cummins, M., “The age of austerity: a review of public expenditures and adjustment measures in 181 countries”, documento de trabajo, Nueva York y Ginebra, Iniciativa para el Diálogo de Políticas / Centro Sur, 24 de marzo de 2013. Disponible en: ssrn.com/abstract=2260771.

60 L. Steinfurt y S. Kishimoto, *Public Finance for the Future We Want*, Instituto Transnacional (TNI), Ámsterdam, junio de 2019.

61 T. Palley, “Financialization: What it is and Why it Matters”, Universidad de Massachusetts, Amherst Instituto de Investigación de Economía Política, Documento de trabajo 153, 2007. Disponible en: <https://ideas.repec.org/p/uma/periwp/wp153.html>.

Una empresa saludable para la financiarización del desarrollo.

El estímulo para introducir el capital financiero privado en el sector sanitario tiene un precedente histórico. Tiene su origen en el novedoso informe del Banco Mundial de 1993 *Investing in Health*,⁶² que presentó las reformas que daban una creciente importancia a generar mercados y ganancias en el sector sanitario.⁶³ El comienzo de la implementación de la reforma se estructuró con moratorias a la expansión de la provisión de la sanidad, la contratación de servicios auxiliares en hospitales y la introducción de esquemas muy controvertidos de tarifas a los usuarios. Cuando se publicó el informe, el modelo de provisión de sanidad formal y beneficioso se limitaba, básicamente, a los países con rentas altas. Se necesitó menos de una década para que la presencia del capital privado fluyera por la gobernanza sanitaria mundial, la financiación y provisión de la sanidad, bajo el seductor disfraz de colaboraciones público-privadas (CPPs): pragmatismo fundamentado para reemplazar los acuerdos institucionales.⁶⁴

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) han sido el campo de pruebas para el modelo de partenariado público-privado, a través de la lucha contra la pobreza y las enfermedades pandémicas en los países en vías de desarrollo, especialmente. Pero esta agenda se ha seguido desarrollando para dirigirse hacia el sector sanitario general y para institucionalizar la presencia de actores corporativos en el polémico escenario de la toma de decisiones públicas sobre la sanidad mundial,⁶⁵ incluyendo el diseño de los ODS.

¿Qué son las colaboraciones público-privadas?

Las colaboraciones público-privadas (CPP) se consideran como la respuesta lógica a los cambios estructurales en las relaciones estado-mercados que se han producido desde el comienzo de la globalización económica y financiera, con el retroceso de las responsabilidades estatales y

el crecimiento masivo de la influencia empresarial. Personifican un cambio principal de gobernanza en la provisión de servicios públicos: desde el establecimiento institucional basado en estructuras formales y líneas de responsabilidades claras, hasta iniciativas o contratos funcionales basados en enfoques voluntarios, y la hibridación institución-empresa.

Las CPP pueden variar en génesis y objetivos. En su conjunto, son contratos a largo plazo entre gobiernos y empresas privadas, asegurados por garantías gubernamentales, bajo los cuales las empresas financian, crean y operan elementos de un servicio tradicionalmente proporcionado por el estado, como hospitales, colegios, transporte e higiene, entre otros. Las empresas son compensadas tanto a través de tarifas por parte de los usuarios, como por pagos del estado. Las concesiones son versiones clásicas de CPP, en las que los actores del sector privado acuerdan construir u operar un sistema específico (agua, sanidad, electricidad, etc.) a cambio de un monopolio concedido por el estado, permitiéndoles cubrir costes y generar beneficios cobrando a los usuarios. La razón principal por la que los gobiernos buscan las CPP es su necesidad de tomar medidas de contención de costes neoliberales que limitan el endeudamiento público. La realidad es que, en la mayoría de los casos, las CPP son la estrategia de financiación más costosa para el sector público, especialmente a largo plazo. Es más, promueven la desigualdad, porque favorecen a aquellos que ya son ricos (poseedores de activos y de capital), mientras que a menudo extraen su efectivo de la población desfavorecida.⁶⁶

Reimaginar los sistemas sanitarios como mercados para los inversores



La sanidad de la población es una condición preliminar para un desarrollo sostenible, pero existen variaciones tremendas en la provisión de la sanidad.⁶⁷ El

62 <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5976>.

63 Mackintosh y M. Koivusalo, *Commercialization of Health Care: Global and Local Dynamics and Policy Response*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.

64 P. Utting, y A. Zammit, "Beyond Pragmatism: Appraising UN-Business Partnerships", Programa de Mercados, Empresas y Regulación, Documento número 1, octubre de 2006, UNRISD, Ginebra, [http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/\(httpPublications\)/225508544695E8F3C12572300038ED22?OpenDocument](http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/(httpPublications)/225508544695E8F3C12572300038ED22?OpenDocument).

65 J. Richter, "Public-Private Partnerships for Health: A Trend with no Alternatives?" *Development* 47(2), 2004, págs. 43-48.

66 <https://eurodad.org/files/pdf/1546822-public-private-partnerships-global-campaign-manifesto-1507748444.pdf>.

67 J. Dieleman, et al., "Future and Potential Spending on Health 2015-2040: Development Assistance for Health, and Government, Prepaid Private, and Out-Of-Pocket Spending in 184 Countries", *The Lancet* 389(10083), 2017, págs. 2005-2030. Disponible en [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(17\)30873-5/fulltext#tables](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30873-5/fulltext#tables).

gasto en sanidad es un producto de una compleja combinación entre la política nacional, internacional y subnacional, la oferta y demanda del sistema sanitario, el desarrollo económico e incluso la guerra, enfrentamientos civiles, desastres naturales y factores medioambientales cada vez más asociados al cambio climático. Esto es lo que hace que el cálculo del gasto futuro sea inherentemente incierto. Aun así, se considera necesario un gasto adicional de 274 mil millones de USD en sanidad para 2030 si la comunidad internacional quiere progresar hacia el ODS 3 - “garantizar vidas saludables y promover el bienestar”.⁶⁸ Las cifras proyectadas para conseguir, simplemente, los objetivos del sistema sanitario del ODS 3 ascienden a 371 mil millones de USD al año.⁶⁹ Aunque dichos objetivos demandarían iniciativas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades más allá del cuidado sanitario, son las industrias sanitarias las que están obteniendo beneficios rápidamente.⁷⁰ Los cálculos sugieren que el gasto per cápita mundial en sanidad subirá un 50 por ciento para 2030, concentrándose la parte más significativa del aumento en los países de renta media.⁷¹ La paradoja es que se espera que el rango de desigualdades en el gasto sanitario amplíe una brecha de desigualdad incluso mayor para 2030.⁷²

Pero, ¿es realmente una paradoja? Muchas trayectorias sanitarias ejemplifican las tendencias de crecimiento de la financiarización dentro de la sanidad mundial. Merece la pena destacar dos de ellas para ejemplificar las externalidades negativas que un pequeño número de conglomerados transnacionales pueden dirigir sobre los sistemas sanitarios, la gobernanza de la sanidad mundial y la reducción del espacio político para la consecución del derecho a la sanidad.

Medicamentos esenciales en la encrucijada de las especulaciones financieras

Tras más de dos décadas de iniciativas diplomáticas internacionales y resoluciones y estrategias de la OMS,⁷³ una serie de luchas legales y sentencias formales de los Tribunales Supremos nacionales,⁷⁴ e incesantes protestas en las calles de organizaciones de la sociedad civil por todo el mundo, los precios de los medicamentos siguen descontrolados. La reivindicación “vidas antes que el beneficio” refleja un caso paradigmático, quizás uno de los ejemplos más ilustrativos de las implicaciones que derivan de la financiarización de la sanidad. El acceso a medicamentos, vacunas y diagnósticos esenciales persiste como obstáculo en el camino para afirmar la primacía del derecho a la sanidad sobre el mercado y el régimen de monopolio alrededor de la propiedad intelectual (PI) establecido por la OMC en 1995,⁷⁵ para el beneficio de las farmacéuticas.

La falta de acceso a medicamentos ha sido, de manera histórica, un problema de los países de renta baja, pero en los últimos años se ha convertido en un problema mundial, ya que los países de renta alta también comienzan a encontrar barreras importantes para garantizar el acceso universal a los medicamentos. Los costes de investigación y desarrollo (I+D) siguen siendo uno de los secretos mejor guardados en los círculos farmacéuticos, sometiéndose a menudo a cálculos muy inflados. Gracias a la potencia de su grupo de presión,⁷⁶ las farmacéuticas han creado constantemente una variedad de estrategias para bloquear la competencia de los medicamentos genéricos y fortalecer sus monopolios de propiedad intelectual (PI) mediante nuevas rondas de acuerdos comerciales bilaterales. Al mismo tiempo, el poder sobre los precios conferido por su posición dominante les ha permitido transformar

68 <https://www.who.int/sdg/targets/en/>.

69 K. Stenberg et al., “Financing transformative health systems towards achievement of the health Sustainable Development Goals: a model for projected resource needs in 67 low-income and middle-income countries,” *The Lancet Global Health* 5 (9), 2017, pags. 875–87. Disponible en <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X%2817%2930263-2>

70 Deloitte, *2019 Global Health Care Sector Outlook: Shaping the Future*, Londres, Deloitte, 2019. Disponible en <https://www2.deloitte.com/global/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/global-health-care-sector-outlook.html>.

71 De 914 USD en 2014 a 2072 USD en 2030 para los países de renta media-alta; de 267 USD en 2014 a 525 USD en 2030 para los países de renta media-baja; de 120 USD en 2014 a 154 USD en 2030 para los países de renta baja. Consulte Dieleman, et al., “Future and Potential Spending on Health 2015-2040d Private, and Out-Of-Pocket Spending in 184 Countries”, pags. 2005-2030.

72 *Ibidem*.

73 Organización Mundial de la Salud, “Public Health, Innovation and Intellectual Property Rights,” Informe de la Comisión sobre Derechos sobre la Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública, OMS, Ginebra, 2006. Disponible en <https://www.who.int/intellectualproperty/report/en/>. Más recientemente, consulte el informe del Panel de Alto Nivel sobre el Acceso a Medicamentos de la Secretaría General de la ONU, publicado en 2016, <http://www.unsgaccessmeds.org/final-report>.

74 Por ejemplo, la decisión del Tribunal Supremo de Sudáfrica sobre la acción legal interpuesta por 39 farmacéuticas contra el gobierno en 1997 por los tratamientos para el SIDA, que finalmente desestimó el caso en 2001 tras la demanda de transparencia en sus balances; años después, llegó la instancia del Tribunal Supremo de India que en 2013 desestimó la apelación del gigante farmacéutico Novartis AG por una patente para su fármaco contra el cáncer comercializado con el nombre Glivec en la mayoría del planeta. Cinco años más tarde, ea denuncia de Novartis ante las medidas de protección contra perpetuidad – Sección 3(d) – efue bloqueado por el Tribunal Supremo de India. Consulte https://en.wikipedia.org/wiki/Novartis_v._Union_of_India_%26_Others

75 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf.

76 *Corporate Power, Policy Prescriptions: the Firepower of the EU pharmaceutical lobby and implications for public health*, 2015. Disponible en https://corporateeurope.org/sites/default/files/20150904_bigpharma_web.pdf.



Centro de salud de la comunidad de Ebenator, estado Anambra, Nigeria. Crédito de la imagen: Christian Aid / Tom Saater

progresivamente los medicamentos en productos financieros especulativos.⁷⁷ Los costes de los nuevos medicamentos han aumentado significativamente y están creando una gran y desconcertante carga para los presupuestos de sanidad.⁷⁸ Por otro lado, la localización estratégica de la propiedad intelectual de las farmacéuticas en los paraísos fiscales o en economías de baja fiscalidad para minimizar su carga fiscal es la norma.⁷⁹ Las autoridades fiscales tienen dificultades para rastrear el vínculo entre las actividades de I+D y la localización de la patente.

Un buen ejemplo, y una fuente de indignación constructiva, es el enfoque transformador de la empresa californiana Gilead Science ante el problema del acceso a medicamentos al establecer el precio del nuevo medicamento que puede salvar vidas frente a la Hepatitis C (HCV) Sofosbuvir, aprobado por la FDA en diciembre de 2013. El fármaco se comercializó en principio bajo el nombre Solvaldi a un coste de 84 000 USD (1 000 USD por píldora) para un tratamiento completo de 12 semanas. El coste de fabricación del fármaco original era inferior a 1 400 USD, y con un gran aporte del dinero de los contribuyentes. Gilead buscó varios fabricantes genéricos en India para firmar

voluntariamente acuerdos de licencia para la fabricación del mismo fármaco, con un precio de 900 USD para los países de renta baja. El acuerdo de licencia tenía restricciones que prohibían a las empresas genéricas exportar los productos HCV licenciados a países de renta media, donde la enfermedad es prevalente, excluyendo potencialmente del tratamiento a millones de pacientes que viven con HCV.⁸⁰ Los profesionales y expertos de la sanidad pública de todo el Sur Global se unieron para destapar las barreras al tratamiento. Egipto, India, Brasil y Ucrania cuestionaron la solicitud de patente de la empresa, basándose en que Gilead había privatizado una investigación financiada con fondos públicos.⁸¹ Los gobiernos del Norte Global negociaron en secreto reducciones de precios con Gilead, para aumentar el acceso.

El informe de una investigación clave⁸² descubrió que las ventas y beneficios de Gilead se habían triplicado desde el lanzamiento del medicamento: de 11,2 mil millones de USD en 2013 hasta 32,6 mil millones de USD en 2015. Pero, durante el mismo tiempo, el tipo fiscal efectivo de Gilead en todo el mundo se desplomó en un 40 por ciento. Cayendo del 27,3 por ciento en 2013 hasta el 16,4 por ciento en 2015. La empresa había movido la mayoría

77 Soy de la opinión de que podemos considerar los medicamentos como derivados financieros. Sus valores derivan del rendimiento de otras entidades "subyacentes", tales como activos, índices, tipos de cambio de divisa, o una variedad de opciones (p. ej. comprar y vender el derivado a un precio acordado durante un tiempo acordado). Los derivados se pueden negociar en términos de intercambio financiero público, o "extrabursátil" (cuando existe un acuerdo privado entre dos especuladores financieros). En el caso de algunos medicamentos innovadores recientes, nos hemos encontrado con negociaciones secretas extrabursátiles entre el especulador que fabrica el medicamento y algunos de los ministerios de sanidad individuales de Europa, como mención de casos específicos.

78 H. Kuchler, "Novartis wins approval for the most expensive drug", *Financial Times*, Nueva York, 24 de mayo de 2019, <https://www.ft.com/content/10086870-7e50-11e9-81d2-f785092ab560>.

79 T. Karkinsky y N. Rieder, "Corporate Taxation and the Choice of Patent Location", *Journal of International Economics*, 2012. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2012.04.002>. Sobre este tema, consulte también Ernst y Young, *Global Taxation of Intellectual Property: New and Emerging Tax Policies Create High Stakes Balancing Act*, 2016. Disponible en [https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-global-taxation-of-intellectual-property-20160518.pdf/\\$FILE/EY-global-taxation-of-intellectual-property-20160518.pdf](https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-global-taxation-of-intellectual-property-20160518.pdf/$FILE/EY-global-taxation-of-intellectual-property-20160518.pdf)

80 <https://www.msfindia.in/msf-access-campaign-response-gileads-deal-generic-companies-sofosbuvir-and-ledipasvir/>

81 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf.

82 Americans for Tax Fairness, *Gilead Sciences Price Gouger*, *Tax Dodger*, julio de 2016, <https://americansfortaxfairness.org/files/ATF-Gilead-Report-Finalv3-for-Web.pdf>

de los beneficios generados de su medicamento exorbitantemente caro a Irlanda, y mediante dos subsidiarias irlandesas, a las Bahamas, un paraíso fiscal.⁸³

Cobertura sanitaria universal



La cobertura sanitaria universal (CSU) representa el discurso principal del capítulo de sanidad de los ODS y fue diseñada originalmente con el reconocimiento explícito de dos aspectos importantes de la sanidad

pública. Al prescribir un papel central para el estado en la obtención de fondos para el cuidado de la salud y en la regulación de la calidad y la gama de los servicios, la CSU encontró fallos en el mercado. La CSU también implicaba que la sanidad es un bien público, y que el estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud. Desde la primera mención de la CSU en la 58ª Asamblea de Salud Mundial de 2005, la atención se ha centrado en la “financiación sanitaria sostenible”.⁸⁴ “La creencia subyacente parecía ser que si se garantizaba la financiación, la provisión de los servicios sanitarios podría ser realizada por una variedad de entidades que implicasen tanto al sector privado como al público”,⁸⁵ en nombre de la inclusión financiera y la ampliación de los servicios financieros a las comunidades de renta baja. Esto significaba abandonar la aspiración de un sistema sanitario nacional concebido como una red integrada de servicios situados en los niveles primario, secundario y terciario del cuidado, y reemplazarlo por un escenario de instalaciones y proveedores de servicios dispersados, ajustados a la capacidad de compra.

Aunque la CSU es lo suficientemente amplia como para incluir una gama de soluciones financieras gestionadas públicamente, en la actualidad es una de las rutas institucionales motoras que están estimulando y facilitando la penetración de la financiación privada en el escenario social de la sanidad, a nivel nacional. Con diferentes formas, la CSU se presenta, de manera general, mediante esfuerzos concertados para promover modelos de financiación del cuidado sanitario basados en tarifas *asequibles* para los

usuarios y programas de seguros de salud voluntarios, junto con la expansión de las infraestructuras sanitarias de propiedad privada.⁸⁶ De este modo, los enfoques basados en préstamos, como la microfinanciación, están abriendo nuevas oportunidades de alquiler a los pobres, al tiempo que invitan a los ciudadanos “a organizar su vida diaria a través de una gestión de riesgos individual, y comprometerse con los mercados financieros a través de la compra de préstamos y seguros”,⁸⁷ transformándoles de *titulares de derechos a sujetos de inversión*, confrontados individualmente a la volatilidad de los mercados financieros frente a los sucesos que pueden poner en riesgo su vida.

Pero la invitación renovada a vivir mediante la financiación no se limita a los pobres del mundo, está entrando de manera salvaje en las sociedades que ya tienen sistemas de sanidad nacional universales, como el R. U. e Italia, produciendo grandes desigualdades, costes descontrolados y la concentración del mercado.⁸⁸ En Italia, donde el sistema de sanidad pública universal ha sido esencial para el desarrollo social y económico del país y aún hoy contribuye al alto nivel de esperanza de vida de la población,⁸⁹ está siendo progresivamente fraccionado y descartado ante las ventajas de los programas de seguros privados. En una sociedad envejecida, el presupuesto sanitario ha sido recortado en 25 mil millones de euros entre 2010 y 2012,⁹⁰ se han eliminado centros de salud locales (de 642 en la década de 1980 a 101 en 2017), y se han cerrado 175 hospitales. El título del informe de Censis-Rbm de 2018 – *Resentment Healthcare, Resentment for Healthcare: Scenes from an Unequal Country*⁹¹ – ilustra el inquietante retrato de una “sociedad fuera de control”. El desembolso privado para los servicios sanitarios aumentó en un 9,6 por ciento desde 2013 hasta 2017, obligando a más de 7 millones de personas a endeudarse, o a vender sus casas (2,8 millones) para acceder a su derecho constitucional a la sanidad. Considerando el importante papel del sistema de sanidad pública en el avance del desarrollo social y económico de las décadas pasadas, su venta progresiva a los seguros privados para mercantilizar de forma fácil la salud de la sociedad italiana envejecida se puede describir como la tormenta perfecta. Y el crimen perfecto contra el sentido común.

83 <https://americansfortaxfairness.org/irish-media-confirms-atf-claims-about-gilead-sciences-massive-profit-shifting/>

84 https://www.who.int/health_financing/documents/cov-wharesolution5833/en/, para 58.33

85 Movimiento Popular para la Salud, Medact. Medico International, Red del Tercer Mundo, Alames, *Global Health Watch 4: An Alternative World Health Report*, Zed Books, Londres, 2014, p. 77.

86 B. Hunter y S. Murray, “Deconstructing the Financialization of Healthcare,” *Development and Change* 0(0), 2019, pags. 1–25.

87 *Ibidem*, p. 11.

88 *Ibidem*, p. 4.

89 Bloomberg, *Most Efficient Health Care Around the World Report*, 2014. Disponible en <https://www.bloomberg.com/graphics/infographics/most-efficient-health-care-around-the-world.html>. A este respecto, consulte también <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-20/italy-s-struggling-economy-has-world-s-healthiest-people>

90 F. Carraro y M. Quezel M., *Salute SpA: La Sanità Svenduta alle Assicurazioni*, Chiarelettere, Milán, 2018.

91 https://www.sanita24.ilssole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_SANITA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/06/07/CENSIS_RBMSintesi.pdf?uuid=AEm4gx0E.

Plantear cuestiones sobre la financiación de la sanidad mundial



Los mercados de la sanidad están creciendo sin preocuparse por sus efectos a largo plazo sobre la salud y la igualdad. La expansión mundial de los modelos de sanidad que extraen beneficios de situaciones

de vulnerabilidad, en el nombre del desarrollo sostenible, es una clara contradicción. De hecho, se ha documentado la subida de precios a largo plazo tanto en el Norte como en el Sur Global.⁹²

Más allá del ámbito de la sanidad, la búsqueda sin límites de la financiación privada parece haber capturado definitivamente los círculos de desarrollo internacional, principalmente mediante las asociaciones entre entidades públicas y privadas. El acompañamiento de la financiación privada al desarrollo se ve cada vez más promovido por las alianzas de instituciones multilaterales, gobiernos nacionales, propietarios de fondos de inversión de capitales y capital privado. La justificación es que el multi-asociacionismo puede ser la solución a los problemas actuales con el sistema multilateral,⁹³ y que incorporar el dinero privado es la estrategia a seguir si el mundo quiere ponerse al día con la necesidad estimada en 2,5 trillones de USD anuales requeridos para alcanzar los ODS. Una brecha que se considera que está más allá de la capacidad de la financiación pública.⁹⁴ La Agenda de Acción de Addis Abeba de 2015 sobre financiación del desarrollo, además, hizo hincapié en la necesidad de utilizar fondos públicos para ampliar la infraestructura de financiación y de propiedad privada.⁹⁵ Por otro lado, el flujo de ayuda financiera continúa cayendo por la falta de objetivos y su recepción por los países está reduciéndose dramáticamente:⁹⁶ en este escenario, la aceptación de un argumento que hace de la pobreza un activo financiable encuentra reconocimiento institucional. El Banco Mundial ha creado con éxito una coalición para avanzar de manera eficaz en su agenda “Maximizar la financiación para el desarrollo” (MFD). Ha persuadido

a los gobiernos de los países periféricos de que generen subsidios y otras medidas de reducción de riesgos para garantizar a los capitales privados la rentabilidad exigida por los bancos transnacionales y los inversores institucionales.⁹⁷

Nunca ha existido un periodo tan favorable para los inversores en sanidad, especialmente ahora que la carga combinada de enfermedades transmisibles y no transmisibles está definiendo la necesidad de la sanidad en los países de renta baja. En esta línea, aparece el mensaje de la OMS sobre su propuesta de inversión objetivo del Triple Billón,⁹⁸ con detalles sobre el beneficio económico que resultará de apoyarles a ellos que siempre han estado financieramente retrasados durante las últimas décadas. El análisis del coste-beneficio de los próximos cinco años proyectados es un legado directo del informe de 1993. Al mismo tiempo, la “financiarización de la sanidad representa una nueva fase de formación de capital que crea, pero que es distinta de, las rondas anteriores de privatización y reforma sanitaria neoliberal, y esto se manifiesta en la creación de nuevas clases de activos”.⁹⁹ Estas nuevas clases de activos incluyen bonos de impacto (como el Bono de Rendimiento Cameroon Cataract)¹⁰⁰ o bonos de catástrofe como el Instrumento Financiero de emergencia pandémica de seguro internacional de salud.¹⁰¹

La financiarización de la sanidad mundial plantea una serie de problemas. Algunos de ellos son:

- un problema de gobernanza, debido a la fragmentación producida en el sistema sanitario y la hibridación del papel de las instituciones sanitarias con la financiarización a todos los niveles (desde internacional hasta local), que favorece la impotencia de la función pública;
- un problema democrático: los mercados financieros se basan en acuerdos privados, y los inversores tienden a mantener sus estrategias, bancos de datos, modelos de evaluación del riesgo e informes internos como confidenciales. Aunque en teoría el uso de la financiación

92 Hunter y Murray, “Deconstructing the Financialization of Healthcare,” p. 16.

93 H. Gleckman, “How the United Nations is quietly being turned into a public-private partnership: A new agreement with the World Economic Forum gives multinational corporations influence over matters of global governance”, *Democracia Abierta*, 2 de julio de Open 2019. Disponible en <https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/how-united-nations-quietly-being-turned-public-private-partnership/>.

94 Hunter y Murray, “Deconstructing the Financialization of Healthcare,” p. 1.

95 Naciones Unidas, *Agenda de Acción del Tercer Congreso Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Addis Ababa*, 2015. Disponible en https://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf.

96 <http://devinit.org/post/investments-to-end-poverty-2018/>, p 6.

97 <http://www.ipsnews.net/2019/04/world-bank-financialization-strategy-serves-big-finance/>.

98 Organización Mundial de la Salud, “A Healthier Humanity: The Who Investment Case for 2019-2023”, Ginebra, 2018. Disponible en <https://apps.who.int/iris/handle/10665/274710>.

99 Hunter y Murray, “Deconstructing the Financialization of Healthcare,” p. 8.

100 *Ibidem*.

101 F. Stein y D. Sridhar “The Financialization of Global Health”, Wellcome Open Research, 2018, p. 17.

pública se puede rastrear, esto no se aplica a las inversiones del sector privado; esto significa que existen nudos fundamentales en términos de transparencia y responsabilidad ante la sociedad. Es, en definitiva, un reto para la dinámica del interés público ya que encarna una desviación de los valores básicos de equidad y justicia social; un problema relacionado con el mercado: los mercados financieros son conocidos por sus ciclos de auge y crisis. Al financiarizar la sanidad mundial, la provisión de cuidados sanitarios se puede ver expuesta a la dinámica de casino vista antes y durante la crisis financiera mundial de 2008, poniendo a la población empobrecida en un riesgo inmenso;

- un problema cultural: la financiarización también puede influir mucho en el consumismo de sanidad, y la noción de la gente sobre el enfoque sanitario que se debe considerar viable y deseable. Las herramientas de los mercados nunca son neutrales y existen varias tensiones morales cuando se trata del control de la sanidad, que al final, es el control de la vida humana.¹⁰²

Aunque el derecho a la sanidad se ve rediseñado continuamente para tener un papel auxiliar en los mercados financieros, la comunidad sanitaria mundial necesita aumentar urgentemente el espectro visual más allá de las enfermedades. Así se puede comprender mejor y tratar la dinámica especulativa de la financiación en el sector sanitario, con pocas promesas de sostenibilidad. Está surgiendo una reacción organizada mundial para salir del modelo de financiación público-privada y garantizar que los beneficios de la inversión pública se mantienen en manos públicas, gracias en parte a la nueva conciencia de emergencia sobre el medioambiente. Existen signos de movilización y activismo que no se pueden ignorar, y que deben permanecer conectados.

102 Ibidem.

3. Derechos de las mujeres

La financiarización de los derechos de las mujeres

por **Rosana Miranda y Marcos Lopes Filho, Christian Aid; Renata Moreno y Miriam Nobre, Sempreviva Organização Feminista (SOF); y Janice Førde, KULU - Women and Development**

La dominación del capital financiero sobre otras áreas de la economía, del Estado y del día a día afectan especialmente a las mujeres. El papel que desempeña el capital financiero con fines especulativos de acumulación tiene un claro impacto en la desigualdad por razones de género y raza, lo cual se manifiesta en el hecho de que las mujeres, especialmente las descendientes de indígenas y afroamericanas, tienen menores ingresos y menos activos que los hombres en cualquier región del mundo. La financiarización supone un obstáculo para que las mujeres puedan resistir y desarrollar alternativas, ya sea como resultado de su endeudamiento, de su falta de acceso a los servicios públicos o como consecuencia de la disminución de recursos financieros por su constricción como colectivo. Este capítulo expone algunas de las tendencias a través de ejemplos concretos, así como movimientos de mujeres para resistir el proceso de financiarización.

Entender la financiarización y el desarrollo generado desde una perspectiva feminista

No es habitual encontrar narrativas políticas que sostengan que una solución al crecimiento de las desigualdades económicas podría desembocar en una mejora de las condiciones de vida de quienes se encuentran en los márgenes del sistema económico. Durante décadas, los pregoneros del crecimiento han afirmado que el crecimiento económico, ampliamente entendido como el buen rendimiento de indicadores financieros, podría desbloquear los recursos necesarios para que las personas puedan disfrutar de sus derechos, incluyendo los derechos humanos.

Recientemente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha advertido de que solo con el trabajo común, global y revitalizado en favor del crecimiento económico sostenible, aquellos que se han quedado atrás en la llamada senda del desarrollo tendrán la oportunidad de disfrutar de su potencial de dignidad

e igualdad en un entorno saludable. Sin embargo, la misma Agenda 2030 reconoce en el Objetivo del Desarrollo Sostenible 5 que las mujeres y las niñas son las más afectadas, con diferencia, por el modelo actual de desarrollo que es incapaz de garantizar los derechos de las personas.

La dominación del capital financiero sobre otras áreas de la economía, del Estado y del día a día activan los sistemas de opresión a las mujeres, a las que afecta especialmente. El papel que desempeña el capital financiero con fines especulativos de acumulación tiene un claro impacto en la desigualdad por razones de género y raza, lo cual se manifiesta en el hecho de que las mujeres, especialmente las descendientes de indígenas y afroamericanas, tienen menores ingresos y menos activos que los hombres en cualquier región del mundo. En el caso de Brasil, por ejemplo, según los datos del Censo de Población de 2010, los ingresos de las mujeres en todas sus fuentes (trabajo, transferencias, remuneración del capital) era el 68 por ciento del total atribuido a los hombres. La renta media de las mujeres de color suponía el 35 por ciento de la de los hombres blancos.

La financiarización afecta a las mujeres en su día a día. Individual y colectivamente supone un obstáculo para que las mujeres puedan resistir y desarrollar alternativas, ya sea como resultado de su endeudamiento, de su falta de acceso a los servicios públicos o como consecuencia de la disminución de recursos financieros por su constricción como colectivo.

Otros autores de este informe se han referido a las múltiples crisis resultantes de la financiarización y la agenda de la austeridad impuestas a los ciudadanos de a pie, como forma de proteger los beneficios de los grandes operadores financieros transnacionales. Agrupaciones de mujeres y el movimiento feminista apuntan la carencia de información sobre el impacto de esta agenda de austeridad en las mujeres, debido al papel de reproducción social, especialmente por actividades que se desarrollan en el ámbito doméstico.

Esta perspectiva feminista ha demostrado que se produce un aumento de la carga de trabajo doméstico para las mujeres en periodos de crisis en los que se aplican políticas de ajustes estructurales. La reducción del gasto en áreas vitales como salud y



Mujeres construyendo un centro de salud en Sawula, en el distrito Pujehun de Sierra Leona. Créditos de la imagen: Christian Aid / Tom Pilston

educación traslada estas obligaciones a la esfera doméstica, forzando que sean las mujeres las que tengan que compensar los recortes invirtiendo más horas de trabajo en casa. Por tanto, la financiarización extiende la integración de la esfera doméstica a los mecanismos de extracción de riquezas producidos por las mujeres trabajadoras.

Financiarización como pilar de una economía de la obediencia



Un mecanismo que propicia el endeudamiento doméstico. Las familias tienen que recurrir constantemente al endeudamiento para satisfacer las necesidades básicas a causa de la congelación salarial y la ausencia de adecuados servicios públicos educativos y sanitarios. En abril de 2019, el 62,7 % de las familias brasileñas estaban endeudadas con un 23,9 % de morosidad. Teniendo las tarjetas de crédito como principal fuente de dinero en efectivo para el 77,6 % de las familias endeudadas. Otra característica es el crecimiento del endeudamiento entre las personas mayores. La senda del endeudamiento incluye, entre otros factores: aumento de riesgos como la pérdida de trabajo e ingresos, enfermedad propia o de otros miembros de la familia, la muerte de quien trae el pan a casa, embarazos no programados, separaciones matrimoniales y mujeres cuyos nombres son usados para contratar préstamos por parte de sus hijos y maridos.

Como las mujeres suelen ser responsables del bienestar de toda la familia, especialmente entre las mujeres de color, suelen ser más propensas al endeudamiento aunque también se las considere las contribuyentes más fiables. Por este motivo, se han convertido en el público objetivo de programas de microcréditos, lo que se traduce en que dinero que ya circulaba informalmente entre redes sociales de mujeres, pase a formar parte de la economía formal, sin atajar el problema estructural de la pobreza. Más recientemente, estos programas, muchas veces revestidos de inclusión financiera femenina, también se han puesto en cuestión por sus desorbitados y humillantes intereses, y las intensas presiones a las que las mujeres se ven sometidas por no poder afrontar los pagos regulares a las que están sujetas. El endeudamiento de las mujeres reduce sus opciones laborales y su visión de futuro: las empuja a aceptar cualquier condición laboral para poder afrontar las obligaciones ya contraídas. El endeudamiento continuado define las condiciones laborales que las mujeres tienen que aceptar y, en ese sentido, se convierte en una eficaz herramienta de explotación. De hecho, las deudas propician lo que los grupos feministas de Argentina denominan: “economía de obediencia”,¹⁰³ por la que los mecanismos de control de las instituciones, opciones, comportamientos y prácticas feministas están a la orden del día, reforzando la división sexual en el entorno laboral. La economía de obediencia que desencadena la deuda es simplemente otra forma de violencia de género.

103 L. Cavallero and V. Gago, *Una lectura feminista de la deuda*. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Buenos Aires, Rosa Luxemburg Stiftung, 2019.

Desarrollo sostenible del gender washing

Además, al mismo tiempo las políticas de austeridad fiscal que afectan al sustento de las mujeres reducen los presupuestos relativos de derechos y servicios básicos, empujándolas a las manos de la financiación privada para satisfacer estas carencias. La financiarización de la financiación al desarrollo tiene un significado específico para el avance de los derechos de las mujeres, dado que el movimiento feminista, históricamente infrafinanciado, se enfrenta al discurso mundialmente extendido de la “inclusión financiera de las mujeres”, que ahora forma parte de la forma en la que se miden los avances en igualdad de género, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al mismo tiempo que se reduce el acceso a recursos capaces de equilibrar la desigualdad con un enfoque basado en derechos.

Hasta la adopción de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los nuevos actores y la nueva economía que han entrado en escena para apoyar los esfuerzos del desarrollo, la responsabilidad social corporativa expandida y los programas filantrópicos de las empresas tenderán a priorizar el *crecimiento económico y el retorno de la inversión*, en lugar de potenciar una perspectiva basada en derechos. El bajo nivel de financiación de las entidades de las Naciones Unidas determina la capacidad de vincularse a grupos feministas y de derechos humanos de las mujeres en el Sur Global, lo que les empuja a asociarse con el sector privado *utilizando herramientas financieras innovadoras*. Muchas de estas *herramientas financieras innovadoras* responden a una visión reduccionista de inversiones en materia de igualdad de género y siempre que las inversiones inteligentes no tengan un impacto en las políticas macroeconómicas, reglas comerciales, valores globales y otras políticas nacionales e internacionales, no harán otra cosa que dañar a las mujeres. Las colaboraciones público-privadas, que también incluyen a las organizaciones de la sociedad civil, se han convertido en *herramientas de financiación innovadora* de preferencia.

A su vez, las organizaciones feministas y de derechos de las mujeres no suelen ser socios ni patrocinadores

preferentes, ni siquiera si el propósito principal de la alianza es la promoción de la igualdad de género. Los patrocinadores tradicionales, incluyendo las agencias de la ONU, tienen cada vez más a asociarse con y financiar organizaciones empresariales de mujeres y el sector privado. La moda de financiar el empoderamiento económico de las mujeres “porque se entiende como economía inteligente” es una “visión reduccionista de la igualdad de género como inversión inteligente”,¹⁰⁴ cuando la igualdad de género es un objetivo en sí mismo. De hecho, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) dispone de 200 mil millones de dólares anuales de presupuesto y destina solo el 1 por ciento a proyectos relacionados con las mujeres. De esta pequeña cantidad, el uno por ciento se destina a organizaciones feministas o de derechos de las mujeres.¹⁰⁵ Aunque los movimientos de mujeres han sido clave en la defensa de los derechos de las mujeres y de la justicia de género a nivel mundial, una investigación de 2010 muestra que el presupuesto medio de las organizaciones feministas y de los derechos de las mujeres suele ser de 20 000 dólares anuales, en comparación con las grandes ONG como Save the Children y World Vision International con 1.442 miles de millones y 2.611 miles de millones de dólares respectivamente.¹⁰⁶

La Institución de Financiación para el Desarrollo danesa, las alianzas público y privadas y la igualdad de género

El Gobierno danés está implantando una estrategia de desarrollo denominada World 2030: Denmark's strategy for development cooperation and humanitarian action que fue adoptada en 2017. Adopta la misma lógica que UN Women en cuanto a solventar las necesidades financieras en cooperación al desarrollo a través de colaboraciones público-privadas.

“Dinamarca incrementará su inversión al Fondo de Países en Vías de Desarrollo (IFU/DFI) como institución e inversión al desarrollo. Con la intención de invertir en crecimiento sostenible, empleo decente y transferencia de la tecnología

104 L. Alpizar Durán, “20 years of Shamefully Scarce Funding for Feminists and Women's Rights Movements”, 14 de mayo de 2015. Disponible en: <https://www.awid.org/news-and-analysis/20-years-shamefully-scarce-funding-feminists-and-womens-rights-movements>

105 Consulte “UN Women together with Impact Investment Exchange (IIX)” en el Foro Político de Alto Nivel, 11 de julio de 2019; consulte K. Staszewka, T. Dolker y K. Miller (AWID), “Only 1% of gender equality funding is going to women's organisations – why?”, The Guardian, 2 de julio de 2019; World 2030: *Denmark's strategy for development cooperation and humanitarian action*, Ministerio danés de Asuntos/DANIDA, enero de 2017. En este momento, la estrategia de acción danesa recién adoptada para el desarrollo y la acción humanitaria estimó que la brecha de financiación de los ODS está entre 1,9 y 3,1 trillones de USD al año. Todos los países, no solo los países en vías de desarrollo, son responsables de implementar los ODS a nivel nacional e internacional.

106 L. Alpizar Durán, “20 years of Shamefully Scarce Funding for Feminists and Women's Rights Movements”, 14 de mayo de 2015. Disponible en: <https://www.awid.org/news-and-analysis/20-years-shamefully-scarce-funding-feminists-and-womens-rights-movements>

para atajar, por ejemplo: el cambio climático y los problemas medioambientales en mercados difíciles de los países en vías de desarrollo. El IFU, al mismo tiempo, contribuirá a la internacionalización de las empresas danesas, incluyendo las PYMES. El apoyo danés al desarrollo del sector privado y su compromiso... seguirá los principios de eficacia, responsabilidad social y además... Los fondos de ayudas no se deben poner en marcha en el sector privado cuando este esté en condiciones solventes". ODA apoya las iniciativas empresariales en los Países Menos Desarrollados con un subsidio del 50 y del 35 por ciento en el resto.

La estrategia danesa de desarrollo también permite a las organizaciones de la sociedad civil suscribir estrategias de colaboraciones público-privadas con el Fondo para Países en Vías de Desarrollo. El fondo coopera con las organizaciones de la sociedad civil danesa mediante políticas en la esfera pública y organizando foros de diálogo. Sin embargo, no está claro cómo las organizaciones de la sociedad civil puedan supervisar el fondo para los países periféricos y las inversiones de las colaboraciones público-privadas en los sectores de la educación y la salud, sin exacerbar desigualdades y asegurando la protección y la provisión de igualdad de género y derechos humanos. Esta es, entonces, un área de acción para justicia financiera y de género.

La experiencia de la financiarización de igualdad de género en el Sur Global



Mientras todas las dimensiones discutidas anteriormente se reflejan en el Sur Global, tienen particularidades relacionadas con el papel histórico de los países como proveedores de materias primas y recursos naturales, y su posición particular en relación a la financiación mundial. El endeudamiento resultante de la inclusión financiera se expresa mediante el fuerte aumento del consumo de bienes no duraderos en América Latina, en un movimiento que muestra una ciudadanía por consumo, estrechamente relacionada con el acceso a los servicios básicos. La privatización y la financiarización de los servicios públicos exacerban las desigualdades en el contexto del aumento de la pobreza en regiones como América Latina y el Caribe. Además, un desencadenante deferencial del impacto de la financiarización en las vidas de las

mujeres está relacionado con la mercantilización de bienes naturales de bienes naturales basados en un ciclo económico neo-extractivo que combina una extraordinaria rentabilidad, la vuelta a una economía basada en los servicios básicos, o en la reprimarización de la economía, los conflictos sociambientales y la criminalización y la represión de los grupos sociales y los movimientos organizados.

Brasil: El trabajo informal de las mujeres y las operaciones mediante tarjetas de crédito

Además de la amplia oferta de microcréditos dirigidos a mujeres, especialmente a microempendedoras, el aumento de las tarjetas de créditos como herramienta preferente para los pagos del día a día, refuerza la concentración de poder en las manos de las compañías de tarjetas de crédito. Esto también se impone a las mujeres que trabajan en el mercado informal, como las vendedoras callejeras. Como la mayoría de las personas compra a través de las tarjetas de crédito, las vendedoras, incluso de botellas de agua o aperitivos en los semáforos, necesitan tener un datáfono. Para disponer de este aparato en Brasil hay que registrarse como microempresa y pagar la Seguridad Social, lo que, por lo menos, ofrece una mínima cobertura a las mujeres. Entre los microempendedores registrados solicitantes del dispositivo. El 77 % son mujeres y en el sector de la perfumería y la higiene representa el 75 %. Hay muchas empresas que ofrecen datáfonos y algunas sin cargo adicional. Sin embargo, en estas operaciones las empresas retienen cantidades entre el 2 y el 7 %, que pueden ser mayores en el caso de avances de dinero a modo de créditos. Los plazos de pagos también varían y siendo mayores, permiten que las empresas lleven a cabo transacciones financieras con el capital. El uso extendido de las tarjetas no parece haber tocado techo, de hecho las deudas mediante tarjetas de crédito representan hoy la mayor fuente de endeudamiento en el país.

La financiarización de la naturaleza, con especial reflejo en la agricultura en el Sur Global, tiene implicaciones directas en el trabajo de las mujeres. Como responsables de la preparación y distribución de la comida en las familias, las mujeres sufren las crisis de la especulación relacionada con los precios de los alimentos. De hecho, después de la gran crisis alimentaria de 2008, se sucedieron manifestaciones y



Agricultora delante de Mthombowesizwe Market Garden en Zimbabwe. El nombre significa “de hoja perenne”. Crédito de la imagen: Christian Aid / Charlotte Scott

revueltas lideradas por mujeres en 18 países. En Costa de Marfil, la mayoría de los manifestantes del 31 de marzo de ese año eran mujeres coreando “¡Tenemos hambre!” En Zimbabwe, las manifestaciones fueron organizadas por WOZA, Women of Zimbabwe Arise. En Perú, las mujeres de las llamadas comedores populares fueron las primeras en movilizarse ante el Congreso el 30 de abril, junto con los sindicatos y los movimientos campesinos.¹⁰⁷

La producción de alimentos está sufriendo un gran impacto debido al creciente número de proyectos de gran infraestructura en el Sur Global, alimentado a costa de capital internacional. Por ahora en el Amazonas, se han instalado 140 presas o están en construcción, con otras 288 en planificación, conjuntamente con los gobiernos nacionales, el sector privado, los bancos internacionales de inversión y el mercado financiero.

Finalmente, la financiarización de la naturaleza, en forma de mecanismos del mercado del carbono y la agricultura, priva a las mujeres de su territorio, ignora sus contribuciones económicas a las comunidades y en muchas ocasiones refuerza los roles de género relacionados con la división sexual del trabajo.

Brasil: Mujeres y Economía Verde

Los mecanismos financieros como el mercado de los créditos del carbono y el mercado de futuros agrícola son mecanismos de intercambio y comercialización de crédito que permite a las industrias del Norte Global continuar sus actividades contaminantes. Frente a las presiones por el crecimiento social y las normas legales que buscan evitar las tragedias climáticas y medioambientales, mecanismos como el mercado del carbono permite a los responsables de la contaminación solucionar sus problemas con dinero en lugar de cambiar sus modelos de negocio.

En el Sur Global, estos mecanismos financieros del mercado del carbono están implantados en empresas y organizaciones no gubernamentales que vienen a las comunidades a negociar la posibilidad de áreas de reforestación o conservación en forma de compensación medioambiental o la venta de créditos en el mercado del carbono. Proponen enviar materiales y técnicos que puedan ayudar en la plantación, recursos financieros para la

107 M. Schneider, We are hungry! A summary report of food riots, 2008. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/237113525_We_Are_Hungry_A_Summary_Report_of_Food_Riots_Government_Responses_and_States_of_Democracy_in_2008

zona de siembra e incluso beneficios para los residentes que trabajan en proyectos de reforestación. Las comunidades siempre están abiertas a proyectos de conservación medioambiental, porque hay una necesidad permanente de restaurar áreas y de restituir la biodiversidad. Sin embargo, una prioridad de la comunidad es combinar recuperación con plantaciones, gestiones, encuentros y prácticas pesqueras tradicionales que aseguren la alimentación y el bienestar de las personas. Los proyectos de reforestación son generalmente muy restrictivos a la hora de determinar las especies que se deben plantar, en el uso de ciertas áreas, incluso a la hora de prevenir el tránsito de personas de comunidades a través de ellas mismas, e implican periodos largos de gestión de hasta 99 años. Las voces de las mujeres en las comunidades suelen quedarse sin ser escuchadas y sus actividades tienden a prohibirse debido a las extremadas restricciones, como la recogida de leña, plantas medicinales y alimentos. En otros casos, las organizaciones que promueven la denominada "economía verde" se dirigen a las mujeres donando pequeños recursos y explotando las contradicciones de las comunidades. Muchos de estos proyectos sobrecargan a las mujeres pues no reconocen las actividades económicas que han llevado a cabo.

Resistir el proceso de financiarización: visibilizar la producción y la reproducción femenina



La lucha de las mujeres por la igualdad, la justicia y la transformación social siempre planta cara al poder y al sistema hegemónico. Para hacer frente a la lógica de la financiarización, es necesario dar una respuesta las necesidades concretas de las mujeres y las comunidades, con una acción colectiva y procesos que refuercen la economía productiva, que acabe con las jerarquías y las desigualdades, y que coloque la sostenibilidad de la vida en el lugar central que merece.

La economía feminista es un campo que ha sido adoptado y utilizado por los movimientos sociales como una herramienta potente de análisis crítico y como referencia para proponer alternativas. La economía feminista muestra lo reduccionistas que son

los puntos de vista hegemónicos sobre la economía porque, restringiendo la economía a lo que circula en el mercado con equivalentes monetarios, excluyen el día a día del trabajo de las mujeres que asegura la persistencia de la vida. De forma que para lograr la igualdad, no es suficiente incluir a las mujeres en los esquemas analíticos diseñados con la referencia de la experiencia de los hombres. Proponemos ampliar los horizontes de lo que entendemos por economía, acompañando todo el trabajo y todos los procesos que hacen posible la vida. Con esta finalidad, la separación artificial entre producción y reproducción queda en cuestión demostrando que ocultan los vínculos entre los procesos que actualmente son interdependientes. Las labores domésticas y el cuidado son la base de la producción de vida y son, por lo tanto, fundamentales para el funcionamiento del sistema económico. A continuación resumimos algunos ejemplos de Argentina y Brasil.

El movimiento argentino de mujeres en lucha contra el endeudamiento (Vivas, libres y desendeudadas nos queremos)

Los grupos feministas de Argentina inspiran la lucha contra el sistema financiero y sus mecanismos de deudas con sus exigencias de derechos y justicia para las mujeres. Estos grupos han publicado recientemente el libro *A Feminist Reading of Debt*,¹⁰⁸ en el que ofrecen respuestas prácticas al desafío de la lógica financiera neoliberal con sus tasas de interés y la expropiación del tiempo y los cuerpos de las mujeres. Estos grupos hacen un llamamiento a la "desobediencia radical" contra el sistema financiero, para sacar la deuda de las familias fuera del entorno privado, donde se convierte en vergüenza y un tabú, para llevarlo a la primera línea del debate público del sistema económico con toda la ciudadanía y especialmente con las mujeres. Luchan por la erradicación total de la deuda como eje de la estrategia feminista. Promueven esta agenda de manera muy activa mediante huelgas feministas que destacan la estrecha conexión entre la feminización de la explotación financiera y laboral, compilando datos sobre el endeudamiento de las mujeres (incluyendo la publicación de falsedades sobre los objetivos de la inclusión financiera) y recopilando y publicando experiencias positivas de desobediencia a la deuda (como en México, Bolivia y España) para inspirar tácticas y estrategias en Argentina.

108 L. Cavallero y V. Gago, *Una lectura feminista de la deuda. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos*. Buenos Aires, Rosa Luxemburg Stiftung, 2019.



La brasileña Bebé Albenize es muy famosa a nivel local por su conocimiento sobre dónde y cómo recolectar nueces en Brasil. Su comunidad confía en ella para obtener beneficio de las nueces, pero su cultivo y recolección es un trabajo intenso que no garantiza un buen precio porque no tienen forma de retirar las cáscaras antes de la venta. Crédito de la imagen: Christian Aid / Tabitha Ross

Las mujeres brasileñas organizan alternativas mediante la agroecología¹⁰⁹

Miles de mujeres producen alimentos en todo el mundo, incluyendo terrenos como patios y huertos urbanos. En muchos lugares la producción se basa en prácticas agroecológicas que combinan el conocimiento tradicional que pasa de generación en generación, nuevos experimentos y el conocimiento sistematizado de los centros de investigación y las universidades. Las formas habituales de mediciones económicas no llegan a incluir estas contribuciones de mujeres a la reproducción social. En Brasil, las mujeres del movimiento agroecológico buscan formas de cuantificar, visibilizar y entender la dinámica de la economía productiva. Durante el año 2017, 264 agricultoras de diferentes regiones del mundo han advertido en la Caderneta Agroecológica el destino de su producción en términos de cantidad y precio, como forma de visibilizar su contribución. Considerando el valor de la producción registrada, el 62 % se destinó a la venta, el 28 % al consumo, el 9 % a donaciones y

el 1 % al intercambio. Considerando el número de entradas en el registro, el 51 % se refieren al consumo, el 27 % a la venta, el 19 % a la donación y el 3 % al intercambio. La principal referencia de consumo en los registros indica la intención de las agricultoras de dar visibilidad a la producción bajo su responsabilidad, en ocasiones en casa como trabajo en el hogar.¹¹⁰ Las ventas en las redes de marketing solidario como los grupos de consumo solidario e iniciativas de comunidades que apoyan la agricultura confirman el papel predominante de las mujeres, por ejemplo, a la hora de organizarse para ofrecer una amplia gama de productos, posicionarse contra la violencia de género y la defensa de los derechos de las mujeres con respecto a la tierra y al territorio.

Las formas de donación e intercambio no solo demuestran el dinamismo que tiene lugar en los barrios, sino también en las relaciones que se crean entre familiares que residen en diferentes lugares. Son ejemplos de cómo las prácticas puestas en marcha por mujeres para satisfacer las necesidades diarias de comida, techo, cuidado y condiciones de crecimiento integral en armonía con la naturaleza moviliza dimensiones de solidaridad colectiva y constituye alternativas a la financiarización.

109 CTAZM. 2018. Caderneta agroecológica e os quintais. Sistematização da produção das mulheres rurais no Brasil. <https://ctazm.org.br/bibliotecas/livro-caderneta-agroecologica-e-os-quintais-268.pdf>

110 Ibid

La financiarización afecta diariamente a los derechos de las mujeres desde el nivel doméstico hasta las esferas internacionales. La financiarización del dinero que actualmente circula informalmente en las redes sociales informales de las mujeres y los mercados orientados hacia la inclusión financiera de las mujeres, abocan a la mujer a situaciones de endeudamiento que mina su capacidad de autoempleo. Desde Argentina hasta Zimbabue, las políticas de austeridad justificadas por argumentos financieros que dan forma a cómo la mujer concilia su labor productiva y reproductiva, sobrecargan hasta el extremo un grupo ya muy penalizado con múltiples jornadas. Además, incluso los mecanismos internacionales creados para solventar las desigualdades de género históricas y estructurales se están viendo amenazados por la falta de financiación adecuada y una narrativa naif que esgrime el argumento de que el mismo sistema financiero que margina a las mujeres será el responsable de crear alternativas de financiación para el autoempoderamiento de las mujeres.

En una trayectoria de críticas hacia el neoliberalismo y el patriarcado, la economía feminista apunta a la existencia de una lógica de confrontación entre la acumulación del capitalismo y la sostenibilidad de la vida. Haciendo frente a la violencia, resistiendo al desmantelamiento de los servicios públicos, defendiendo la naturaleza y los territorios frente a grandes proyectos extractivos, la lucha de las mujeres conecta con las situaciones locales concretas en la dinámica internacional, situando la defensa de la vida en el centro de sus acciones políticas. Ampliando la visión de la economía desde la sostenibilidad de la perspectiva de la vida, el feminismo revela las opresiones que sufren nuestras sociedades en sus vertientes estructurales de género, raza y clase. Con este punto de partida, es posible ir más allá en la identificación de los impactos del sistema económico en las mujeres, con la intención de entender la lógica por la que la financiarización se expande a las diferentes esferas vitales.

En este contexto, resulta crítico canalizar más fondos para la cooperación internacional y buscar cómo impulsar, sistematizar y replicar experiencias económicas feministas, especialmente en el Sur Global. No solo experiencias de resistencia, sino también alternativas concretas para un sistema económico que sistemáticamente respalde a la mujer. También resulta vital reforzar los actuales mecanismos, y crear nuevos, para asegurar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones relacionadas con políticas financieras y económicas, como participantes activas, no solo como sujetos pasivos y secundarios.

4. Vivienda

La financiarización y el derecho a la vivienda

por C.J. (Kees) Hudig, Globalinfo; y Éilis Ryan, Financial Justice Ireland*¹¹¹

“La alienación residencial se puede encontrar en todo el mundo. Es el producto de la hiper-mercantilización de la vivienda, la precarización del empleo, el aumento de la desigualdad y el asalto neoliberal a la red de la seguridad social. Estos procesos afectan tanto a quienes tienen la propiedad de las viviendas como a quienes las arrendan, tanto a las viviendas de clase media como a las de la clase trabajadora. Su impacto se siente de manera desigual, pero es un error suponer que es solo un problema para las viviendas más pobres.”

David Madden y Peter Marcuse, *In Defense of Housing: The Politics of Crisis*, 2016

Es difícil nombrar un país actual en el que no exista una crisis de la vivienda. En otras palabras, en el que no exista una falta de vivienda decente y asequible. Mientras que las causas de esta vasta crisis preceden, en muchos casos, el aumento del capitalismo financiero neoliberal, la financiarización del “mercado” de la vivienda ha agravado esta crisis de manera dramática y ha dificultado la provisión de soluciones.

El papel de la crisis financiera mundial en la financiarización de la vivienda



Existen dos vínculos principales entre la financiarización, la vivienda y el golpe financiero de 2008. El primero, el motor principal e inicial de dicha

crisis fue la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Dicha crisis fue provocada por la compraventa de “préstamos tóxicos” con fines especulativos. Las hipotecas inmobiliarias son el vehículo principal de la financiarización y la escala a la cual crecieron los préstamos de poco rendimiento en el periodo previo a la crisis, significó que la financiación mundial puso sus garras a familias y viviendas por todo el mundo.

En segundo lugar, la respuesta internacional a la crisis financiera, en lugar de intentar arreglar el sistema de préstamos internacional tan desregulado que provocó la crisis, lo recrudeció. En su libro *The Financialization of Housing*, el sociólogo Manuel Aalbers apunta hacia cómo la expansión cuantitativa (conocida como QE) por parte de los bancos centrales en Europa y en EE. UU. – la compra de deuda para inyectar dinero a los mercados mundiales – impulsó la financiarización de la vivienda: “Un gran volumen mundial de dinero busca inversiones Colaterales de Alta Calidad (CAC), y la vivienda es uno de las pocas clases de activos consideradas CAC. Esto explica por qué la vivienda se está financiarizando cada vez más.”¹¹²

La “recuperación” como oportunidad de beneficio para la financiación privada: el caso de Dublín

La ciudad de Dublín, en Irlanda, proporciona una visión general excelente de cómo la crisis financiera mundial provocó el aumento de poder de los actores financieros.

Irlanda fue uno de los países denominados PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, España) que se situaban en el epicentro de la crisis financiera en Europa. Irlanda es una de las economías más favorables al mercado del planeta y una sucesión de gobiernos previos a 2008 ha creado una completa estrategia económica de atracción de actores financieros y bancarios mundiales en el país como los bajos impuestos corporativos y una normativa “flexible”. Junto a dichas políticas, el peso del sector inmobiliario y de la construcción de Irlanda se vio fuertemente inflado en el PIB. Los promotores

111 Con la valiosa colaboración de Zsófia Miklós, DemNet

112 Manuel B. Aalbers, *The Financialization of Housing, A political economy approach*, Routledge 2016, p. 134.

inmobiliarios, grandes y pequeños, se expusieron a cantidades enormes de deuda, junto con los bancos que les prestaron de manera insostenible.

En 2008, Irlanda fue el epicentro de la exposición a los mercados financieros mundiales y se expuso profundamente al sector de la vivienda, que fue esencial para la crisis. Debido a esto, Irlanda sufrió las consecuencias. Entre 2008 y 2011, los precios de los pisos habían caído un 60 por ciento. Quedó claro que los promotores eran incapaces de pagar las enormes deudas que debían a la banca. El gobierno irlandés respondió ampliando un cheque en blanco para toda la deuda empresarial, lo que costó 64 mil millones de euros a los contribuyentes irlandeses.

Pero mientras la crisis desinfló temporalmente el sobrecalentado mercado irlandés de la vivienda, la “recuperación” resultó en una sorprendente expansión del papel del capital financiero mundial en todos los aspectos de la vivienda irlandesa. Esto no fue simplemente un efecto lateral de la recesión en Irlanda, la ausencia de financiación pública y la expansión cuantitativa del Banco Europeo Central, como se mencionó anteriormente. En su lugar, fue un conjunto explícito de estrategias, adoptado por el gobierno irlandés, para incentivar el capital financiero en la vivienda y renovar el sector de la propiedad.

Los investigadores irlandeses han demostrado cómo la combinación de una elevada cantidad de viviendas en propiedad, los niveles insostenibles de deuda personal y empresarial, el auge y caída de la construcción y la política gubernamental posterior a la crisis, interactuaron para aumentar de manera masiva el nivel de propiedad empresarial de la vivienda en Dublín después de 2008.¹¹³ El gobierno irlandés estableció un “banco malo” para albergar las deudas problemáticas de los promotores inmobiliarios, con una estrategia explícita de la venta de activos asociada a dichas deudas para recuperar el dinero gastado en el rescate bancario. Mientras tanto, en un contexto de rápido descenso del precio de la vivienda y escasez de suministros, las rentas del sector privado se dispararon. En 2013, el gobierno aprobó una legislación para permitir que los Fondos de Inversión Inmobiliaria (REITs), un tipo de fondo de inversión especializado en inversión a largo plazo en vivienda, operasen en Irlanda. Los REITs se convirtieron en compradores principales de los enormes activos problemáticos de los “bancos malos” de Irlanda, buscando capitalizar el aumento de rentas privadas. Cinco años después, el Departamento de Finanzas ha emitido informes que alertan de que la gran concentración de propiedad de

pisos alquilados por parte de los REITs – en algunos barrios, hasta el 50 por ciento – ha permitido de manera efectiva “establecer precios”, aumentando las ya disparadas rentas privadas de la ciudad.

La vivienda social como vehículo para el beneficio: el caso de Ámsterdam

Las hipotecas privadas han sido durante mucho tiempo la forma más obvia de vincular las viviendas ordinarias a los flujos de capital globalizados. Pero cada vez más, incluso la vivienda que tradicionalmente estaba totalmente fuera del mercado privado, ha entrado en el cauce de los flujos financieros.

Los Países Bajos han visto cómo su tradicionalmente amplio inventario de vivienda sin ánimo de lucro ha ido cayendo gradualmente en los mercados financieros. En marzo de 2019 se produjo una enorme venta única de 10 000 casas residenciales. El vendedor fue el inversor británico Round Hill Capital y el comprador fue otro inversor de Suecia, Heimstaden, participante del mercado de valores de Estocolmo. Curiosamente, el hecho de que las 10 000 viviendas fuesen originalmente viviendas sociales estuvo prácticamente ausente de la discusión de los medios sobre la venta. Anteriormente habían sido propiedad de las conocidas asociaciones de vivienda holandesas que proporcionaban viviendas de alquiler asequible para las familias de rentas más bajas de todos los Países Bajos.

En 2008, muchas de las asociaciones de viviendas casi se hundieron durante la crisis financiera, parcialmente debido a que estas viviendas se convirtieron en objeto de negocio entre los dos inversores financieros mundiales. Round Hill Capital eligió vender porque, en unos pocos años, la firma ya había obtenido los beneficios que había prometido a sus accionistas. Es una historia que lamentablemente se repitió en todo el sector de la vivienda holandés.

La venta de vivienda social a inversores es la política oficial del gobierno holandés. El Ministerio del Interior creó una página web especial para informar a los inversores de cómo sacar beneficio de la compra de inmuebles que previamente pertenecieron al sector de alquiler social. En ella, se les informa abiertamente de que “se calcula que cerca de un millón de viviendas reguladas son de tal calidad que dichas casas pueden entrar en el mercado no regulado”.¹¹⁴

113 M. Byrne, “The financialization of housing and the growth of the private rental sector in Ireland, the UK and Spain,” Documento de trabajo del Instituto Geary, 2019. Disponible en: <http://www.ucd.ie/geary/static/publications/workingpapers/gearywp201902.pdf>

114 Consulte Kees Stad, “The State and the Privatization of Housing”, *Global Housing Debt*, noviembre de 2018. Disponible en: <https://www.globalhousingdebt.org/>

El capital financiero como motor de la gentrificación urbana: el caso de Budapest¹¹⁵

El declive de la financiación pública de los proyectos de vivienda, y consecuentemente las políticas gubernamentales para incentivar que el capital privado invierta en proyectos de desarrollo, ha sido un factor principal en la gentrificación de los barrios de clase obrera en ciudades de todo el mundo.

En Hungría, en la década de 1990, las altas tasas de pobreza y la falta de financiación pública forzaron al distrito de Józsefváros - un barrio del interior históricamente pobre en el municipio de Budapest - a recurrir a fondos privados para mejorar su situación. Esto incrementó la calidad de la infraestructura física, pero a un precio muy alto. La inversión pública se unió a inversores privados como Futureal, propiedad de un mil millonario húngaro, y una serie de bancos de financiación internacionales, como Raiffeisen Bank. El proyecto abarcó dos programas de desarrollo urbano significativos: Los Barrios de Magdolna y Corvin. El proyecto Corvin Promenade fue uno de los proyectos de desarrollo urbano más grandes en Europa Central desde 2000, cubriendo 22 hectáreas y 500 000 metros cuadrados de fincas vacías. Más de 1 100 pisos antiguos fueron demolidos durante su implementación, de los cuales el 70 por ciento eran viviendas sociales. La casi completa demolición y reconstrucción del barrio cambió por completo el tejido urbano y social de la zona y contribuyó sustancialmente a los procesos de gentrificación del distrito.

El proyecto Magdolna fue diseñado para ser un proyecto de rehabilitación social sin demolición de viviendas y, en teoría, los antiguos habitantes podrían quedarse en sus hogares. En la práctica, sin embargo, esto no sucedió. Los nuevos contratos de alquiler a corto plazo ahora son predominantes en los bloques de vivienda pública y previamente se aplicaron desalojos obligatorios. Los precios del alquiler privado también se dispararon: las rentas casi se duplicaron entre 2013 y 2017, y el precio de venta medio se triplicó. Se ha producido un desplazamiento significativo de los antiguos residentes, muchos a otro distrito periférico de baja renta (exterior de Józsefváros), que ahora se enfrenta a un proceso de gentrificación similar. En la última fase del proyecto de re-desarrollo, la compensación otorgada a los propietarios solo fue el 60 por ciento del valor de mercado de la propiedad. Los críticos creen que el gobierno local utiliza la política de vivienda para

dirigir a la población más pobre al exterior del distrito.

Financiarización y vivienda en el Sur Global

“En muchos países del Sur Global, donde la mayoría de las viviendas no suelen tener acceso a créditos formales, el impacto de la financiarización se vive de manera diferente, pero con un ámbito común: la transformación de la vivienda y la tierra de bienes sociales a materias para la acumulación de riqueza, lo que resulta en desalojos y desplazamientos generalizados. Los asentamientos informales son a menudo reemplazados por residenciales de lujo y centros comerciales de alto nivel.”

Informe del Relator Especial sobre vivienda adecuada, enero de 2017¹¹⁶

La financiarización va mucho más allá de las capitales en el Norte Global. De hecho, puede tener un efecto incluso más devastador en las ciudades en crecimiento de los países de renta media, donde los enormes niveles de migración urbana no están siendo cubiertos con inversión pública en viviendas asequibles para la población trabajadora.

En su libro *Urban Warfare*, la urbanista y antigua Relatora Especial de la ONU sobre vivienda digna, Raquel Rolnik, describe cómo la financiarización también llega a los países pobres e incluso, a los suburbios. Uno de los vehículos principales de esto han sido los microcréditos y la microfinanciación, garantizando que la “vivienda asequible” se alcanza no a través de la inversión pública, que proporcionó alojamiento a principios del siglo XX en Europa, sino a través de unos niveles cada vez mayores de deuda entre la clase obrera. Rolnik concluye: “La microfinanciación marca la expansión del capital hacia su última frontera urbana: los suburbios de las periferias del capitalismo.”¹¹⁷

org/the-state-and-the-privatisation-of-housing/

115 Para más información, consulte M. Czirfusz, V. Horváth, et al. “Gentrification and Rescaling Urban Governance in Budapest-Józsefváros”, *Intersections* 1(4), 2015; Habitat for Humanity: *Annual Report on Housing Poverty*, 2018. Habitat for Humanity Hungary, A. Város Mindenkié: Kilakoltatási hullám Józsefvárosban: Az önkormányzat elüldözi a szegénységben élőket.

116 <http://www.unhousingrapp.org/user/pages/04.resources/Thematic-Report-3-The-Financialization-of-Housing.pdf>

117 Raquel Rolnik, *Urban Warfare, Housing Under the Empire of Finance*, Verso, 2019.



Elza de Fatima vivió previamente en una habitación de los suburbios como esta. Gracias al apoyo de Gaspar García (un grupo local que apoya el derecho a la vivienda), ahora vive sola en un lugar asequible y decente. Christian Aid/ Tabitha Ross

Mientras tanto, el terreno vacío dentro y alrededor de los centros urbanos es tan comercializable como la vivienda en muchos países. Las grandes empresas agrícolas obligan a las personas a abandonar sus tierras y a migrar a las ciudades. A la vez los grandes proyectos de infraestructura asociados a eventos como los campeonatos mundiales de fútbol o los Juegos Olímpicos, pueden tener el mismo efecto. Y después existe la tercera “esfera de financiarización”: las hipotecas. Sobre este punto, Manuel Aalbers, un experto holandés sobre bienes inmuebles y financiación, destaca:

los países más desarrollados del mismo y las viviendas decentes y asequibles casi no están al alcance de las masas, como sucedió en muchos países occidentales durante el periodo moderno/fordista. Como resultado, los mercados de la vivienda en la mayor parte del Sur Global están extremadamente estratificados.”¹¹⁸

“La neoliberalización y financiación de la vivienda no se limita a los EE. UU. o al mundo desarrollado o en vías de desarrollo. La contratación de hipotecas y su bursatilización puede permanecer muy limitada en la mayor parte del Sur Global, pero existe un aumento significativo en

Cada vez es más evidente que las políticas de instituciones, como las del Banco Mundial, para apoyar activamente la expansión de los mercados de hipotecas en los países en vías de desarrollo, atentan contra los objetivos establecidos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, promover “ciudades y comunidades sostenibles.”¹¹⁹

118 Aalbers, *The Financialization of Housing*, p. 73.

119 <https://www.brettonwoodsproject.org/2018/07/world-bank-globalisation-housing-finance-mortgaging-development/>



Cuando el sr. Oom se jubiló, volvió a su chabola de Reiger Park, Sudáfrica. Vive con sus cuatro nietos y una hija. Además del problema de la vivienda (vivir en una frágil chabola sobre terreno privado), no tiene sistema de saneamiento. El agua se extrae de un grifo fuera de la casa y no tiene cuarto de baño. Crédito de la imagen: Christian Aid / Gui Carvalho

Sudáfrica: organizar a los activistas para reclamar terrenos para la vivienda

Tras el final del apartheid en Sudáfrica, algunas cosas mejoraron en los municipios, especialmente los derechos políticos. Uno de los problemas que persiste, sin embargo, es la ausencia de vivienda adecuada y digna y de los servicios relacionados, lo que ha llevado a protestas por el acceso a servicios y por los derechos sobre la tierra.

El Instituto de Estudios sobre la Pobreza y la Desigualdad apunta que el derecho a la vivienda es un derecho consagrado en la nueva Constitución de Sudáfrica, que presta atención clara a los derechos sociales y económicos en particular. Pero, como sucede tan a menudo con los derechos legales, la realidad es muy diferente. Una serie de diversos movimientos han respondido a la ausencia de viviendas decentes reclamando la tierra, resistiendo a los

desalojos y desafiando al poder corporativo, que cada vez es más dominante en las zonas urbanas.

Una organización, Church Land Programme, comenzó su trabajo centrándose en los derechos comunitarios sobre los terrenos abandonados que son propiedad de la iglesia. Ahora forman a activistas y trabajan junto a las comunidades luchando por la justicia y sus derechos sobre la tierra, los servicios y la vivienda.

Otro grupo, Abahlali base Mjondolo (el movimiento de los chabolistas), permite a las personas organizarse en grupos autónomos para proteger su derecho a la vivienda, con estrategias que incluyen la ocupación de la tierra. Consideran la vivienda en relación a otras causas de la pobreza, como los precios de la electricidad, el transporte, la comida o demás, y utilizan su campaña sobre la vivienda para analizar mejor el amplio sistema económico. Este análisis sistémico es prevalente en las campañas sobre la vivienda en el Sur Global en particular.

Estrategias y alternativas para oponerse a la financiarización de la vivienda¹²⁰

Una primera línea de resistencia son las **campañas políticas** para intentar mantener la vivienda pública como tal, y así mantener alejados a los mercados a de la misma. Esta estrategia incluye intentar conservar lo que queda del estado de bienestar tras décadas de ataques continuados a la propia idea de vivienda pública. Aún quedan ejemplos impresionantes de proyectos y programas de vivienda pública y social, como por ejemplo, en Austria y Francia.¹²¹ En Alemania, por ejemplo, los gobiernos locales tienen que limitar la libertad en el aumento del precio de los alquileres por los propietarios privados de bienes inmuebles.

Una segunda línea de resistencia es la de la **legislación y normativa**. La campaña actual para la socialización de la vivienda en Berlín es un buen ejemplo; la posibilidad legal de expropiación forma parte de la Constitución, y existe una normativa local que permite un referéndum vinculante para su exigencia. Estas oportunidades han sido utilizadas por una vasta red de grupos activistas de la vivienda para demandar acciones relacionadas con los alquileres y la propiedad. Se iniciará un referéndum si el gobierno local no responde a las demandas de expropiación de grandes empresas privadas de vivienda.

Un tercer campo es el de las **necesidades y derechos individuales**, tanto en el Norte como en el Sur Global. La PAH en España¹²² ha organizado a las personas amenazadas con ser desahuciadas de sus hogares debido al impago de las hipotecas, después de que perdieran sus vías de ingresos tras la crisis de 2008. Muchas acciones de ocupación ilegal también proporcionan formas directas de solucionar la crisis de la vivienda en las ciudades españolas.

En muchos casos, los activistas han comenzado a organizarse alrededor del concepto del Derecho a la Ciudad, que ha surgido de las ideas del urbanista Henri Lefebvre y otros. En lugar de centrarse exclusivamente en la vivienda, estos movimientos interpelan a todos los usuarios de la ciudad - trabajadores, usuarios de servicios etc. - en una acción colectiva.¹²³ Este enfoque también ha echado raíces en ciudades del Sur Global. Por ejemplo, las

campañas del Centro Gaspar Garcia de São Paulo para una vivienda accesible y asequible en los barrios de clase trabajadora, como también se está centrando en los derechos de las mujeres y de los basureros indocumentados.

Para socializar la vivienda, debemos socializar la financiación

Existen esfuerzos para articular propuestas de formas de financiación alternativas, esenciales para desafiar de manera específica la financiarización de la vivienda. Por ejemplo, la PAH en España ha marcado el fondo de valores privado Blackstone con un vídeo amenazante al mismo tiempo que ofrece propuestas bien documentadas para la construcción de programas de vivienda colectiva.¹²⁴ Si se debe socializar la vivienda, debe suceder lo mismo con la financiación, tanto a nivel local como transnacional.

Aunque las autoridades de muchos países enumeran nuevas e innovadoras formas de afrontar la crisis de la vivienda, la mayoría siguen siendo opciones "boutique" a pequeña escala que no se adecúan a la financiación pública a gran escala. Por ejemplo, en Hungría, un grupo llamado Rakoczi Collective promueve un modelo de vivienda colectiva, en el que el propio edificio es propiedad de una cooperativa y los habitantes solo tienen la cesión de la vivienda a largo plazo. Sin embargo, las limitaciones financieras impiden gravemente el desarrollo de la vivienda colectiva a una escala mayor. Los bancos son reticentes a proporcionar préstamos a las cooperativas, y en su lugar solo ponen la financiación a disposición de las personas a través de hipotecas individuales, o en la forma de construcción para su venta al sector privado. Hungría, lamentablemente, parece no tener los mecanismos financieros a largo plazo con condiciones favorables para los proyectos de vivienda colectiva, y la tendencia no es muy prometedora.

En todo el planeta, la ausencia de financiación pública para las soluciones sociales a la crisis de la vivienda ha creado un vacío que está siendo llenado por la financiación privada.

120 Se pueden encontrar numerosos ejemplos de comunidades que resisten estos procesos en el folleto publicado por la Coalición Europea para la Vivienda, *Housing Financialization; trends, actors and processes*, Rosa Luxemburg Stiftung, 2018.

121 Para más información sobre la Vivienda Pública en Viena, consulte <https://archinect.com/news/article/150074889/vienna-leads-globally-in-affordable-housing-and-quality-of-life>

122 Plataforma de Afectados por la Hipoteca (Platform for People Affected by Mortgages)

123 Samuel Stein, Capital City, *Gentrification and the Real Estate State*, Verso, 2019.

124 <https://www.youtube.com/watch?v=gPGGjP0isel>

¿Qué queremos?



Como muchas de las facetas de la financiarización descritas en este informe, las soluciones a la mercantilización de la vivienda son profundas, estructurales y difíciles de alcanzar. Las soluciones necesarias raramente son simples cambios políticos, sino que son una profunda reconfiguración de la normativa y del funcionamiento de la financiación pública y privada de todo el planeta.

Para los países del Sur Global, en plena expansión urbanística, existen signos mínimos de que se vaya a producir una revolución de la vivienda pública similar a la de los asentamientos anteriores y posteriores a la guerra en Europa. De hecho, parece que muchas de las “soluciones” propuestas por donantes internacionales y agencias de ayuda van a ser peor medicina que la enfermedad, como los microcréditos y colaboraciones público-privadas (CPPs). La atención que prestan las agencias de financiación internacionales a las CPPs, como por ejemplo, la estrategia “Maximizar la financiación para el desarrollo” del Banco Mundial, es claramente incompatible con el objetivo de desmercantilizar la vivienda. En cambio, es probable que empuje a más ciudades dentro de la misma categoría que las tratadas en Europa, donde la vivienda no es asequible excepto para una elite selecta. **Demandamos a los donantes que acepten la importancia de construir sistemas de vivienda pública, ya que es la norma para otros bienes públicos como la educación.**

Para los países en **Europa**, el motor clave para hacer retroceder la financiarización debe ser una atención renovada en invertir el dinero público en la construcción de viviendas públicas. Esto significa cambios fuertes en la normativa actual, en especial:

- La relajación de la normativa de gasto de la UE, para exonerar el gasto de capital de los cálculos de déficit;
- La inclusión de toda la **vivienda pública** en listas de Servicios de Interés Económico General, exentas de normativas que impidan la ayuda estatal;
- La creación de un fondo de vivienda pública dentro del Banco Europeo de Inversión, para su uso en el desarrollo de viviendas de propiedad pública, no mercantilizadas.

En efecto, lo que estos cambios podrían hacer es modificar el desequilibrio actual, en el que las manos del estado están atadas mientras que las empresas transnacionales siguen adelante alterando la forma de nuestras ciudades.

5. Infraestructuras

La financiarización de las infraestructuras: ¿un medio para un fin o un fin en sí mismo?

por **Xavier Sol, Counter Balance;** y **Nicola Scherer, Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)*¹²⁵**

Disponer de infraestructuras es un requisito imprescindible en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, las redes de agua y energía nos proporcionan bienes básicos sin los que no podríamos vivir ni producir, contribuyendo al funcionamiento de nuestra economía. Las vías de transporte nos ofrecen la posibilidad de desplazarnos hasta nuestros lugares de trabajo, y enviar mercancías y productos de un lugar a otro. El uso que hacemos de todos los diferentes tipos de infraestructuras implica su inevitable degradación y, a medida que avanzan la tecnología y la ciencia, se produce una necesidad continua de arreglos, recambios, actualizaciones y desarrollo constante de nuevas formas. En resumen, las infraestructuras necesitan financiación para ser mantenidas y mejoradas.

Aquí es cuando se producen los problemas: la financiación mundial privada es la que se está apoderando de las infraestructuras. De hecho, las personas y comunidades están perdiendo, cada vez más, la oportunidad de decidir sobre qué infraestructura necesitan, cuál se construye y quién la construye. Esto significa que cada vez más, son los inversores y no los ciudadanos quienes deciden sobre la planificación de las infraestructuras, basando sus decisiones en posibles beneficios financieros. Como consecuencia, se mantiene el modelo GRAN-GRAN-GRAN: grandes proyectos, grandes inversiones y grandes corporaciones. Este es el modelo propuesto por los inversores y gobiernos, a costa de los proyectos a pequeña escala,¹²⁶ que tienen que luchar por garantizar su financiación. Esto ignora ampliamente el hecho de que las infraestructuras que proporcionan el bien público más necesario no son generalmente las que garantizan los mayores ingresos a los inversores.

¿Qué son mega infraestructuras, mega proyectos y mega corredores?

Las mega infraestructuras son, esencialmente, grandes proyectos de ingeniería, que conllevan sistemas complejos dirigidos por un promotor, pero que incluyen otros actores, como reguladores, banqueros y prestamistas. Estos proyectos tienen varias formas, que van desde autovías, líneas de ferrocarril, puertos, aeropuertos, plantas de procesamiento industrial, oleoductos, gasoductos y almacenes, hasta grandes embalses y otros sistemas de producción de energía.

El concepto de mega proyectos (y el término relacionado mega infraestructura, utilizado cuando hablamos de infraestructuras) es especialmente relevante cuando se trata de temas relacionados con una gobernanza difusa y falta de procesos abiertos de toma de decisiones, conectados con los, normalmente, graves efectos y consecuencias socio-ambientales que conllevan. Como ha destacado el profesor Bent Flyvbjerg del Programa de Gestión de la Universidad de Oxford, los mega-proyectos son “negocios complejos a gran escala que normalmente cuestan mil millones de USD o más, se tarda muchos años en desarrollar y construirlos, implican múltiples beneficiarios públicos y privados, producen transformaciones y afectan a millones de personas”.¹²⁷

La “agenda de infraestructura mundial”, promovida por el Banco Mundial y otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), junto con el sector corporativo, bajo la bandera de la consecución de los ODS, también busca crear “mega-corredores” de infraestructuras en

125 * Este capítulo ha sido revisado de forma excelente por Aleksandra Antonowicz-Cyglicka (Ola) (Polska Zielona Sieć /Polish Green Network, Polonia) y Elena Gerebizza (Recommon, Italia).

126 XSE, Tenim energia! Reptes per transició cap a la sobirania energètica. Xarxa per la Sobirania Energètica. Barcelona, 2018.

127 B. Flyvbjerg, “What you should know about megaprojects, and why,” *Project Management Journal* 45 (2), 2014.

nombre del desarrollo. Los corredores de infraestructuras no son novedosos. Pero los planes que ahora se ponen sobre la mesa son de una escala tan increíble que explican por sí solos el creciente uso del término “mega-corredores”. No se excluye ningún continente (excepto la Antártida). Desde África hasta Asia y Sudamérica, se han diseñado planes maestros de infraestructuras para reconfigurar grandes extensiones de tierra (y los mares que las conectan) en “polos de producción y distribución”, “corredores de desarrollo”, “zonas económicas especiales” e “interconectores”.

El “Padre” de los planes de corredores es, sin duda, la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) de China, que ha sido muy criticada por sus implicaciones geopolíticas, no tanto por la extracción física y financiera que la sustenta. La escala gigantesca de las infraestructuras propuestas transformará y rediseñará profundamente territorios, regiones y economías completas y consecuentemente, la vida de miles de millones de personas. Los mega-corredores están dirigidos, principalmente, a fomentar la exportación de materias primas y bienes y la integración de las economías en los mercados mundiales. También modernizan las rutas de transporte a nivel mundial y fomentan el acceso a un número limitado de puntos en los que se centralizará la demanda.

En resumen, Esta agenda pretende acelerar la circulación en la esfera productiva mundial y así renovar la globalización económica. Finalmente, actualizará un modelo de desarrollo que ya está fallando y su división mundial asociada del trabajo, que podría verse bloqueada en las próximas décadas.

ser rentable para el inversor y generar un flujo de ingresos, por ejemplo, a través de tarifas de uso pagadas por la ciudadanía. Este enfoque dirigido hacia los beneficios ha resultado ser, a menudo, incompatible con el servicio a las necesidades de las personas y comunidades, o a la sociedad en general. Un tipo de infraestructura que beneficia a las personas, por ejemplo, es la gestión y suministro del agua pública, con el control de los ciudadanos. Por ejemplo, en Terrasa, España, la entidad ciudadana Taula d’Aigua trabaja junto con el ayuntamiento en la remunicipalización del agua tras una concesión de 75 años de duración otorgada durante la dictadura fascista a la empresa privada Mina Pública de Aigües de Terrasa SA, cuyo accionista principal es la multinacional Agbar-Suez.

La gente y las comunidades están sufriendo una reestructuración permanente de sus territorios en nombre de la acumulación de capital. La construcción de grandes presas, redes eléctricas, plataformas petrolíferas, gasoductos, minas, puertos, ferrocarriles y autovías han tendido a surgir con costes medioambientales y sociales significativos. Los proyectos de infraestructura destruyen territorios y ecosistemas, y están reconfigurando comunidades completas a la par que atentan contra los derechos humanos y de las mujeres. Mientras el G20 y el Banco Mundial están obsesionados con crear un puente para cerrar la “brecha de infraestructura”¹²⁸ aumentando las inversiones “de miles de millones a trillones”, están prestando poca atención a las posibles consecuencias. Como indicó de manera acertada la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en su informe “The Other Infrastructure Gap: Sustainability”,¹²⁹ se está ignorando el impacto sobre los derechos humanos de los proyectos de infraestructura y su expansión planificada. Y a medida que las mega infraestructuras se desarrollan aún más, sus efectos se ven exacerbados. Numerosas comunidades y ONGs de todo el mundo llevan décadas documentando los efectos del enfoque del extractivismo¹³⁰ vinculado al desarrollo de las infraestructuras.

La pérdida de infraestructura como bien público

En lugar de construir infraestructuras que respondan a las necesidades de las personas y las comunidades locales, los proyectos de infraestructura se orientan hacia las necesidades de los inversores para atraer grandes cantidades de capital durante mucho tiempo. En este sentido, un proyecto de infraestructura debe

El modelo de mega infraestructuras: efectos sobre las personas y el clima



El modelo de mega infraestructuras tiene un efecto devastador sobre el clima, poniendo en peligro a futuras generaciones y comunidades, que se

128 La conocida como “brecha de infraestructura” es la diferencia entre las inversiones actuales en proyectos de infraestructura y lo que los promotores de este concepto prevén como el nivel de inversiones necesario para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU.

129 <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/InfrastructureGapSummary.pdf>

130 El enfoque del extractivismo se refiere al proceso de extraer recursos naturales de la Tierra, principalmente del Sur Global, para venderlos en el mercado mundial, principalmente en el Norte Global.

ven afectadas por el cambio climático, especialmente en el Sur Global. Los mega-corredores diseñados en todo el mundo se basan en el transporte ligado a altos niveles de carbono (aeropuertos, autovías) y en las infraestructuras de la energía (incluyendo combustibles fósiles). Como resultado, la agenda de infraestructura tal como la promueve el G20 y las IFIs simplemente no se ajusta a los objetivos de descarbonización ni a los planes para afrontar el cambio climático a nivel mundial ni alinean los flujos financieros con los objetivos del Acuerdo de París.¹³¹

Actualmente existen intentos a nivel regional europeo, a través del Grupo de Expertos de Alto Nivel Sobre la Financiación Sostenible de la UE, para impulsar la creación de una “Europa de Infraestructura Sostenible”.¹³² O más recientemente, por parte de la OCDE y del Banco Mundial,¹³³ de etiquetar esta agenda bajo el encabezado de “infraestructura sostenible”. Pero estas ideas aún están por materializar y existe el riesgo de que puedan terminar siendo simplemente un ejercicio de blanqueo ecológico. Por ejemplo, recientes conclusiones del G20 sobre la infraestructura sostenible ni siquiera mencionan el Acuerdo de París y el problema de los combustibles fósiles.

La privatización de las infraestructuras incrementa la desigualdad de género. Esto se produce de, al menos, tres maneras: La primera, la búsqueda de beneficios por parte de las entidades privadas restringe el acceso a los servicios de infraestructura para la mayoría de colectivos desfavorecidos, que a menudo son mujeres y, en especial, mujeres con origen emigrante. Por ejemplo, un cambio en las tarifas a los usuarios afecta especialmente a las mujeres ya que ellas son el mayor colectivo de usuarios del transporte público para ir a trabajar o para realizar sus tareas.¹³⁴ A medida que la agenda de infraestructuras privatizadas afecta a los recursos disponibles para los gobiernos, estos van minando la capacidad del estado para proporcionar servicios públicos e infraestructuras que supongan una transformación de género¹³⁵. La segunda, las mujeres también son sujeto de una división injusta del trabajo. En los proyectos de infraestructura de

extracción, por ejemplo, la mayoría de los puestos de trabajo, especialmente los que requieren una alta cualificación, están en manos de los hombres. Aker Solutions, la mayor empresa de contratación internacional en el sector petrolero y de gas, afirmó que el 24 por ciento del trabajo administrativo y solo el 3 por ciento del trabajo cualificado es desempeñado por mujeres.¹³⁶ La tercera, las motivaciones que buscan la rentabilidad también limitan la provisión de un trabajo digno a las mujeres dentro de los proyectos de infraestructura. Por ejemplo, existe una tendencia creciente a utilizar agencias internacionales para subcontratar trabajadores con contratos flexibles.¹³⁷ La lógica de la subcontratación lleva al deterioro de las condiciones laborales, especialmente en lo referente a la prevención de riesgos y lesiones laborales.

Las mega infraestructuras provocan violaciones de los derechos humanos de diferentes tipos. La ONU clasifica los posibles efectos negativos sobre los derechos humanos de las inversiones de mega infraestructuras en tres niveles: micro, meso y macro. A nivel micro, los proyectos de infraestructura se pueden asociar con los efectos directos sobre los derechos humanos de las comunidades, trabajadores y del medioambiente, tales como la adquisición de tierras y recursos, reubicación, desalojos forzosos y la pérdida de estándares adecuados de vida y vivienda, sanidad y problemas de seguridad para los trabajadores, violencia sexual, intimidación y represalias contra los defensores de los derechos humanos que se oponen a los proyectos. A nivel meso, los problemas de asequibilidad pueden discriminar y excluir a algunos grupos del acceso a los servicios que proporcionan las infraestructuras, que están protegidos por la legislación de derechos humanos (p. ej., el acceso al agua). A nivel macro, las agendas fallidas de mega infraestructuras a niveles nacionales y superiores pueden provocar efectos negativos para las personas y el medioambiente durante décadas, aumentando los efectos de la crisis climática y acelerando la financiarización del sector. Una mala gestión fiscal y financiera puede malgastar recursos y aumentar el endeudamiento, tendiendo así a incrementar las desigualdades sociales.¹³⁸

131 Existen tres objetivos a largo plazo en el Acuerdo de París de 2015: un compromiso para “que los flujos financieros sean coherentes con una ruta hacia la reducción de los gases de invernadero y un desarrollo resistente frente al clima”; limitar el aumento de la temperatura media mundial; y aumentar la capacidad para adaptarnos a los efectos climáticos.

132 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf

133 Consulte, por ejemplo, la ODCE *Financing Climate Futures: Rethinking Infrastructure*, París, 2018.

134 EURODAD, *Can public-private partnerships deliver gender equality?* Documento borrador, Red de Género y Desarrollo, FEMNET, marzo de 2019.

135 *Ibidem*.

136 Aker Solutions, *Face value: Corporate responsibility report 2008/2009*. Lysaker: Aker Solutions, 2008.

137 I. Graham, “Working conditions of contract workers in the oil and gas industries”. Documentos de trabajo 276. Oficina Internacional de Empleo, Ginebra, 2010.

138 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, *Baseline Study on the Human Rights Impacts and Implications of Mega-Infrastructure Investment*, 2017.

La infraestructura como un tipo de activo rentable

Las comunidades han perdido el control de las infraestructuras, ya que se han convertido en una clase de activo. Esta tendencia se puede comprender como el núcleo del proceso de la financiarización de la infraestructura.

Tanto en el Norte como en el Sur Global, las inversiones en infraestructuras se presentan como un medio para restaurar el crecimiento económico, la demanda y el empleo en economías golpeadas por la crisis financiera que comenzó en 2008. Como resurgida de las cenizas de las crisis económicas, la infraestructura se vende como la “solución mágica”.¹³⁹

Basados en la suposición de que el crecimiento económico es ilimitado, los proyectos de mega infraestructuras se están convirtiendo en un nuevo activo para que el capital internacional realice inversiones y obtenga beneficios. Pero ¿por qué la mega infraestructura se percibe como un motor del crecimiento? Instituciones multilaterales neoliberales como el Banco Mundial, el FMI y la mayoría de bancos de desarrollo presentan una explicación relativamente fácil: el crecimiento económico no es posible sin grandes infraestructuras que funcionen bien, especialmente porque permite la extracción y transporte de energía y recursos desde las zonas de producción hasta las zonas de consumo, en especial en el Norte Global.¹⁴⁰

Desde la crisis financiera, los gobiernos se han estado enfrentando a un dilema: cómo financiar su infraestructura y fomentar la recuperación económica con recursos públicos, al tiempo que cumplen con la dura lógica de austeridad y los dogmas neoliberales que a menudo acatan. Por lo tanto, dirigido por las IFIs, ha surgido un consenso sobre una “agenda de infraestructura mundial” que se basa principalmente en la asunción de que existe una gran “brecha de infraestructura” que se debe cerrar con financiación privada. La OCDE calcula que se necesitarán 70 trillones de USD adicionales en infraestructura para 2030 y se plantea que los gobiernos aborden esta situación a través de la financiación privada.

Al mismo tiempo, los mercados mundiales de capitales, que ayudaron a la acumulación sin precedentes de la riqueza privada en manos de unos pocos, han convertido a su vez las oportunidades de inversión en nuevos activos rentables. La crisis financiera llevó a la ruptura total de los antiguos activos lucrativos como, por ejemplo, el mercado de la vivienda.

Aquí es donde se supone que se produce la “magia” para cubrir ambas necesidades: muchos gobiernos esperan que las infraestructuras se conviertan en un nuevo tipo de activo, que atraiga toda la liquidez privada y aligere la carga financiera que constriñe las arcas públicas.

Así las cosas, el ámbito de las infraestructuras se encuentra en la parte superior de las agendas políticas en las reuniones de alto nivel como las del G20 o el Foro Mundial de la Infraestructura, donde cada año se reúnen representantes de los mayores bancos de desarrollo¹⁴¹ del mundo. Esta agenda es dirigida, principalmente, por el sector privado para garantizar los beneficios, pero requiere de la financiación pública para desarrollarse como está planeada.¹⁴² Existe una amenaza real de que la financiación pública se vea realmente capturada por esta agenda, en detrimento de las comunidades locales y la ciudadanía. El dinero público ya está siguiendo su ejemplo: un informe conjunto elaborado por 13 bancos de desarrollo indicó que en 2017 movilizaron 73,3 miles de millones de USD en financiación de inversores institucionales y privados a largo plazo para infraestructuras como energía, agua, transporte y sistema de telecomunicaciones.¹⁴³ Los bancos de desarrollo también ven su papel de ayuda al desarrollo como un canal para proyectos financiables y de eliminación de riesgos, invitando cada vez más los inversores privados a participar.

Para gestionar el comercio y promover las infraestructuras como una clase de activo, se ha creado un entorno financiero atrayente para los inversores. Esto se consigue, comúnmente, mediante la eliminación de las restricciones a la inversión para fondos de pensiones y planes de seguros o aumentando los productos financieros basados en derivados.¹⁴⁴ A menudo se excluye a personas, comunidades y a la sociedad civil de los procesos de toma de decisiones

139 X. Sol, «Rebuilding the world: the hubris behind the global infrastructure agenda», OpenDemocracy, abril de 2019. Disponible en <https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/rebuilding-world-hubris-behind-global-infrastructure-agenda/>

140 ODG – Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), *Mega-infrastructure as a mechanism of indebtedness. The risk of illegitimate, ecological and gender debt*. Barcelona, 2018.

141 Esto incluye, por ejemplo: bancos de desarrollo multilaterales (MDBs) como el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD), el Grupo Bancario Mundial y el Banco Europeo de Inversión (EIB)

142 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4366950e-b757-4190-8074-7db86e2860a7/201806_Mobilization-of-Private-Finance_2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mfmjKJZ

143 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4366950e-b757-4190-8074-7db86e2860a7/201806_Mobilization-of-Private-Finance_2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mfmjKJZ

144 Generalmente pertenecientes al ámbito de la inversión avanzada, los derivados son valores secundarios cuyo valor se basa únicamente (deriva) del valor del elemento primario al que están vinculados. Por sí solo, un derivado no tiene valía alguna. Los contratos a futuros, las opciones, swaps y garantías son derivados comunes.



Vista de la central termoeléctrica de Kolaghat en East Medinipur, West Bengal, India Crédito de la imagen: Christian Aid / Elizabeth Dalziel

en la normativa del sector financiero. Existe una gran cantidad de opacidad, falta de transparencia y por otro lado, de influencia de los grupos de presión financiera cuando se trata de tomar decisiones sobre la legislación favorable a los inversores.

Una nueva oleada de colaboraciones público-privadas (CPPs)



A través de este modelo de inversión público-privada, no solo se privatizan las infraestructuras, sino también más servicios públicos tradicionales, como la sanidad y la educación. Incluso el Banco Mundial está promoviendo

las CPPs como el mecanismo más eficaz para atraer la financiación privada y proporcionar una buena infraestructura.

Pero los estudios de caso de todo el mundo continúan demostrando que cuando los gobiernos optan por la inversión privada para la construcción y la provisión de sanidad, transporte, educación y energía, se restringe el acceso de los más pobres a servicios esenciales y las desigualdades tienden a aumentar.¹⁴⁵

No es de extrañar, entonces, la posible ruptura del consenso sobre los beneficios de la expansión de los instrumentos de financiación privada como las CPPs. Las CPPs se enfrentan cada vez más a contestación social a medida que sus efectos se hacen más claros con el tiempo, y algunos países europeos ya se están alejando de las CPPs.¹⁴⁶ En marzo de 2018, el Tribunal Europeo de Auditores publicó un informe especial que exponía los fallos de las CPPs y criticaba el apoyo de la UE a este modelo mediante los fondos del Banco Europeo de Inversión (BEI) y de la UE. El informe afirmaba que las CPPs “no son siempre gestionados de forma eficaz y no proporcionaban una relación calidad-precio adecuada”.¹⁴⁷

Sobre todo, las CPPs han demostrado ser más caros que la provisión pública de los servicios y que conllevan un alto riesgo de deuda futura y/o ilegal desconocida, ya que pueden ocultarse “fuera del balance” de manera que no aparezcan en el presupuesto ni en las cifras de deuda de los gobiernos. En este sentido, el senado francés ha calificado las CPP de “bombas temporales”.¹⁴⁸ A pesar de las demandas contradictorias, existe un riesgo financiero compartido de manera desigual,¹⁴⁹ ya que las CPPs implican a menudo más riesgos para los gobiernos que para las empresas privadas implicadas.

145 https://jubileedebt.org.uk/wp-content/uploads/2013/01/Double-standards_Final-version_08.17.pdf

146 Por ejemplo, en Francia, en marzo de 2018, la Ministra de Justicia, Nicole Belloubet, anunció el abandono de las CPPs para la futura construcción de prisiones y tribunales. Su argumento principal fue que consideraba esta opción “demasiado cara”.

147 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_EN.pdf

148 J-P. Sueur y H. Portelli, *Parliamentary information report n°773 Partnership contracts: time bombs?*, 2014. Disponible en <http://www.senat.fr/rap/r13-733/r13-733.html> (in French).

149 ODG (Observatori del Deute en la Globalització), *APP Asociaciones Público-Privadas: el caso de las Infraestructuras*, 2018. Disponible en: <https://odg.cat/es/publicacion/app-infraestructuras/>

Cuando todo va bien, la empresa recibe los beneficios, mientras que a menudo el gobierno debe dar un paso al frente y asumir los costes si las cosas van mal. Esto queda muy bien ilustrado en el informe “History Repeated”¹⁵⁰ en el que la red Eurodad recopiló casos de 10 proyectos de CPP que han tenido lugar en los cuatro continentes, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo.

¿Qué son las colaboraciones público-privadas (CPPs)?

Las CPPs son contratos a medio y largo plazo entre el sector público y el privado. Respaldado por garantías gubernamentales, el sector privado construye y/o gestiona bienes o servicios tradicionalmente proporcionados por el Estado (tanto a nivel nacional, regional como local), como hospitales, colegios, carreteras, líneas férreas, agua, higiene y energía, entre otros. De este modo, el riesgo del proyecto se reparte entre los sectores público y privado o directamente recae por completo sobre la parte pública. El contrato puede abarcar las fases de diseño, construcción, financiación, funcionamiento o mantenimiento, o cubrir la totalidad del proyecto. Los ingresos para el inversor privado normalmente provienen de tarifas a los usuarios o directamente de la Administración pública.

En 2017, se lanzó una campaña de la sociedad civil internacional sobre las CPPs para revertir la peligrosa fiebre por promover CPPs caros y de alto riesgo. Se emitió un Manifiesto¹⁵¹ respaldado por 152 organizaciones de 45 países, demandando que los gobiernos occidentales, el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo dejasen de priorizar las CPPs sobre el préstamo público tradicional para financiar la infraestructura y servicios sociales y económicos.

Entre otros motivos, el Manifiesto destacó que las CPPs aumentan el riesgo de corrupción y reducen la capacidad de los gobiernos de regular a favor del interés público. De hecho, los contratos de CPPs

son extremadamente complejos. Las negociaciones están protegidas por la confidencialidad comercial, dificultando que la sociedad civil y los parlamentarios puedan analizarlas. Esta falta de transparencia aumenta significativamente el riesgo de corrupción y socava la responsabilidad democrática. Además, los contratos de CPP a menudo socavan el derecho y la obligación del estado de regular a favor del interés público. Las CPPs pueden limitar la capacidad de los gobiernos de promulgar nuevas políticas – por ejemplo, normativas medioambientales o sociales fortalecidas – que puedan afectar a proyectos particulares. Además, las CPPs amenazan a la democracia nacional porque los contratos de CPP tienden a favorecer la adjudicación internacional opaca y no responsable en lugar de los tribunales locales o nacionales, sin considerar los inconvenientes de estos sistemas de resolución de disputas entre inversor y estado (RDIE).¹⁵² Según los contratos de CPP propuestos por el Banco Mundial, el estado puede ser responsable incluso de los costes provocados por huelgas de trabajadores.

Como su nombre indica, la “agenda mundial de infraestructura” tiene ámbito internacional. Pero de hecho, sus efectos e impactos ya están siendo gravemente sentidos por el Sur Global.

Efectos sobre el Sur Global

Un buen ejemplo es la nueva onda de crisis de deuda soberana en el Sur Global, que está relacionado en parte con los proyectos de infraestructura y la financiación privada. El Sur Global, especialmente los países de renta baja, han sufrido una explosión de préstamos a través de la financiación de bonos nacionales y proyectos desde el final de la crisis financiera en 2008. Especialmente los inversores privados han buscado beneficios fuera de los mercados centrales, donde la expansión cuantitativa (QE)¹⁵³ y los tipos de interés bajo hacen menos interesante la inversión. Cuantos más riesgos presenta la inversión, mayores son los intereses y a menudo, más beneficioso es el negocio cuando la deuda se vende en el mercado financiero internacional.¹⁵⁴ Como resultado, el nivel de préstamos externos anuales para los países de renta

150 EURODAD, *History Repeated: how public private partnerships are failing*, Bruselas, 2017. Disponible en: <https://eurodad.org/files/pdf/1546956-history-repeated-how-public-private-partnerships-are-failing-.pdf>

151 EURODAD, *World Bank Must Stop Promoting Dangerous public-private partnerships*, Bruselas, 2017. Disponible en: <https://eurodad.org/files/pdf/1546821-world-bank-must-stop-promoting-dangerous-public-private-partnerships-1549891747.pdf>

152 Consulte, p. ej., Alfred de Zayas, Informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo (A/70/285), agosto de 2015.

153 El *Alivio cuantitativo* es una política monetaria no convencional en la que un banco central compra bonos gubernamentales u otros tipos de valores del mercado para aumentar el suministro de dinero y fomentar el préstamo y la inversión.

154 <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/11/13/borrowing-by-low-and-middle-income-economies-more-than-tripled-in-2017-world-bank-international-debt-statistics-show>

baja y media aumentaron hasta 607 mil millones de USD en 2017 desde los 181 mil millones de USD del año anterior, el nivel más alto en tres años. Como resultado, según el FMI, 32 de los 72 países de renta baja están sufriendo estrés por endeudamiento.¹⁵⁵ Muchos de los países de renta baja han alcanzado niveles de endeudamiento que no se han conocido desde la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (IPPAE) del Banco Mundial o la iniciativa de Alivio de la Deuda Multilateral del FMI de las décadas de 1990 y 2000; algunos ejemplos incluyen Mozambique, Angola, Zimbabue, Sierra Leona, República del Congo, Ghana, Egipto, Líbano, Túnez, Yemen, Sri Lanka, Mongolia, Nicaragua, El Salvador y los países del Caribe.¹⁵⁶

El Sur Global está cada vez más expuesto a los acreedores privados (a menudo fondos buitres), que no participan en procesos del cálculo de la deuda internacional. En cuanto a los acreedores externos a quienes los países de renta baja y media deben su deuda, el 39 por ciento se debe al sector privado, el 33 por ciento a instituciones multilaterales y el 28 por ciento a otros gobiernos (principalmente a China).¹⁵⁷ Incluso aunque no se conocen los números exactos, se puede afirmar que el modelo de CPP ha contribuido considerablemente a que los gobiernos del Sur Global conviertan la deuda privada en pública a través de garantías públicas. El vínculo entre la financiación privada de la infraestructura y la deuda es clara. Según el Banco Mundial, en 2018 los compromisos de inversión privada en infraestructuras como energía, transporte, tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) e infraestructuras de agua en los países de renta baja y media ascendieron a 90 mil millones de USD en 335 proyectos en 41 países.¹⁵⁸

De hecho, la financiación en infraestructuras representa una amenaza masiva a la sostenibilidad de la deuda. Es muy probable que los miles de millones y trillones que se planifican gastar en las próximas décadas para los proyectos de infraestructura a gran escala supongan un dilema para muchos gobiernos: ¿aceptarán un mayor endeudamiento o serán acusados de incumplir las necesidades de su población al no financiar los proyectos de infraestructuras? Es probable que los nuevos programas de financiación y las CPPs relacionados generen una nueva ola de deuda

externa y nacional. Si algo va mal, en último lugar los gobiernos serán los que corran con la factura. Y esto ya está sucediendo en el Sur Global.

El mayor reto para las comunidades en el Sur Global está relacionado con la limitación de los mecanismos puestos en marcha para que el público controle las decisiones sobre planificación y construcción de infraestructuras. Existen muchos motivos para esta falta de procesos democráticos, incluyendo la falta de transparencia sobre los acuerdos de financiación alrededor de los mega proyectos o los programas anticorrupción relacionados con proyectos a gran escala. La ampliación de la autopista de Mombasa a Mariakani en Kenia, por ejemplo, que ha provocado el desalojo forzoso de más de 300 personas, es un ejemplo de cómo los grupos más vulnerables están al margen de los procesos de toma de decisiones. Sus ciudadanos no se opusieron al proyecto, debido a la falta de información y la represión violenta.¹⁵⁹

También existe un fuerte desequilibrio de poder frente a las comunidades locales que buscan cambiar la agenda de infraestructuras, al igual que proyectos concretos en los que están involucrados inversores y empresas extranjeros. En muchos países en vías de desarrollo, el criticar los proyectos de infraestructuras públicas a menudo es presentado por los gobiernos y corporaciones como una posición “contra el gobierno” y una amenaza para los intereses nacionales, proporcionando argumentos para una mayor militarización y etiquetando los proyectos de infraestructura como esenciales para la seguridad nacional.

Rutas para la resistencia y el cambio



Se están llevando a cabo movimientos de resistencia contra los proyectos de infraestructura a gran escala por todo el mundo,¹⁶⁰ es difícil extraer ejemplos representativos de estas luchas. Sin embargo, se deben anotar las siguientes herramientas para localizarlos, junto con la resistencia a los mismos:

- Mapas de conflictos: El mapa EJOLT¹⁶¹ es un recurso útil para visualizar los conflictos medioambientales,

155 IMF, World Economic Outlook. Washington, mayo de 2019.

156 <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/11/13/borrowing-by-low-and-middle-income-economies-more-than-tripled-in-2017-world-bank-international-debt-statistics-show>

157 Banco Mundial, Base de datos de los Indicadores de Desarrollo Mundial.

158 https://ppi.worldbank.org/content/dam/PPI/documents/PPI_2018_AnnualReport.pdf

159 Para más información, consulte Bankwatch: <https://bankwatch.org/project/mombasa-mariakani-road-project-kenya>

160 Consulte, p. ej., el informe recientemente publicado por CIEL. “Uncalculated Risks: Threats and Attacks Against Human Rights Defenders and the Role of Development Financiers”, Washington, DC, 2019. Disponible en: <https://www.ciel.org/reports/uncalculated-risks-threats-and-attacks-against-human-rights-defenders-and-the-role-of-development-financiers/>

161 <http://www.ejolt.org/maps/>



Activistas europeos de la plataforma Cal Net, Xarxa per a la Sobirania Energètica, y Volt 3, protestan contra grandes proyectos de infraestructura en una petroquímica de Tarragona, España 2016 Crédito de la imagen: Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)

la movilización y la resistencia alrededor de los proyectos de infraestructura. El objetivo del proyecto internacional es hacer visibles las voces que luchan por la justicia medioambiental y prestar atención a las comunidades amenazadas que a menudo se quedan sin poder ante las instituciones y son ignoradas por los medios.

- Mapas de alternativas: Existe un importante proceso de municipalización que está teniendo lugar en todo el planeta, en el que se están realizando enfoques alternativos a nivel local sobre las infraestructuras. El "Atlas of Utopias"¹⁶² publicado por la Iniciativa de Ciudades Transformadoras está localizando prácticas de transformación y las respuestas que están teniendo lugar a nivel municipal en todo el mundo. Puede ser interpretado como una especie de telescopio para ver la compleja galaxia de luchas y cambios radicales a nivel local en todo el planeta.
- Teorías transformadoras: En contraste con la promoción de las infraestructuras a gran escala que promueve el sistema actual del capitalismo, existe el concepto de infraestructuras para

la vida diaria demandado por el movimiento de urbanismo feminista, que se refiere a las infraestructuras físicas, económicas y sociales para facilitar el desarrollo de la vida diaria y la calidad de vida en general. Estos proyectos de infraestructuras se deben diseñar desde la responsabilidad hacia la naturaleza y teniendo en cuenta los derechos humanos de todas las personas, dando valor y reconocimiento al trabajo de las mujeres como cuidadoras y al medioambiente.¹⁶³

- Quienes toman las decisiones a nivel nacional y las instituciones internacionales deben comprometerse para apoyar a las infraestructuras que priorizan la justicia social y medioambiental, en lugar de aumentar los esfuerzos para financiar la infraestructura y desconectarla de las necesidades de los ciudadanos y territorios. En este contexto, la "agenda mundial de infraestructura" actual entra en conflicto con dichos objetivos, ya que está principalmente vinculada a un enfoque extractivista, financiado y de arriba hacia abajo. Debido a esta naturaleza tan poco democrática, es muy probable que esta agenda no cumpla las

162 <https://transformativecities.org/#tni>

163 <http://www.righttothecityplatform.org.br/espanol-que-es-el-urbanismo-feminista/>

necesidades de las personas que se encuentren afectadas por los mega-corredores, más bien se profundiza su situación de desigualdad.

Por tanto, el papel de los gobiernos y la financiación pública debería ser poner límites a lo que están planificando el sector financiero, los inversores y las corporaciones (financiación de mega-corredores y de infraestructuras a gran escala) en lugar de alimentar y ayudar a diseñar esta agenda.

Lo que está en juego es que la ciudadanía, las comunidades y los movimientos sociales reclamen las infraestructuras y los servicios esenciales. Exponer esta agenda es un paso importante para avanzar una crítica pública de la infraestructura como ajuste estructural.

Las comunidades deben desafiar la agenda mundial de infraestructura

La dimensión de los problemas analizados hace que sea muy difícil que la sociedad civil y quienes toman decisiones importantes comprendan esta nueva agenda y encuentren medios para oponerse a ella. Existen dificultades inherentes al mero concepto de infraestructura que necesitará superarse: ¿cómo criticar una agenda relacionada con la infraestructura en países en los que no se cumplen las necesidades básicas de la población que podrían verse cubiertas por una infraestructura bien diseñada? ¿Cómo oponerse a la creciente implicación del sector privado y financiero, cuando en muchos países el sector público ha fallado en la provisión de una infraestructura básica?

Datos y cifras de financiarización

- El aumento de la financiarización en la UE en las dos últimas décadas ha tenido efectos negativos sobre varios de los objetivos de la agenda 2030 de la UE, incluyendo el crecimiento inclusivo, la innovación, la desigualdad y la estabilidad financiera.¹⁶⁴ Los ingresos del veinte por ciento de la población de la Unión Europea están por debajo del umbral de pobreza en su país, mientras que el número de personas que viven en la pobreza de ingresos en la UE ha subido en más del 8 por ciento desde 2005.¹⁶⁵ Eurostat calcula que existen 112,8 millones de personas viviendo en riesgo de pobreza y de exclusión social.¹⁶⁶
- En el R. U., uno de los epicentros de las finanzas mundiales, la desigualdad entre el 1 por ciento más rico y el resto del país ha crecido de manera continuada desde 2008, con solo el 10 por ciento de la población en posesión del 44 por ciento de la riqueza del país, cinco veces la riqueza total en posesión de la mitad más pobre.¹⁶⁷
- En 2012, el último año con datos registrados, los países en vías de desarrollo recibieron un total de 1,3 trillones de dólares (USD), incluyendo todas las ayudas, inversiones e ingresos procedentes del extranjero. Pero ese mismo año, cerca de 3,3 trillones de USD salieron de dichos países. En otras palabras, los países en vías de desarrollo enviaron 2 trillones de USD más al resto del mundo de lo que recibieron.¹⁶⁸
- Un informe de 2018 del Instituto de Investigación Política y Economía de Sheffield, *The UK's Finance ¿Curse? Costs and Processes*, sugiere que el coste total del potencial de crecimiento perdido por el R. U. causado por “demasiada financiación” entre 1995 y 2015 es aproximadamente de 4.500 millones de libras esterlinas. Esta cifra total asciende a casi 2,5 años de PIB medio durante ese periodo.¹⁶⁹
- Un análisis de los datos estadounidenses indica que los máximos ganadores, el 1 por ciento o incluso el 0,1 por ciento de la pirámide de distribución de los ingresos, obtiene el grueso de sus ingresos de los pagos como directivo o de la financiación.¹⁷⁰ El trabajo econométrico dirigido hacia la relación entre la financiarización y la desigualdad también está creciendo. Los economistas estadounidenses Donald Tomaskovic-Devey y Ken Hou Lin han presentado un modelo econométrico que indica que desde la década de 1970, se transfirieron entre 5,8 y 6,6 trillones de dólares USD hacia el sector financiero provenientes de otros sectores en la economía, incluyendo el empleo y los contribuyentes.¹⁷¹

164 http://www.isigrowth.eu/wp-content/uploads/2018/07/working_paper_2018_36.pdf

165 <https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/06/FALLING-THROUGH-THE-CRACKS-JUNE-2019.pdf>

166 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion

167 <https://www.theguardian.com/inequality/2018/sep/05/qa-how-unequal-is-britain-and-are-the-poor-getting-poorer>

168 https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jan/14/aid-in-reverse-how-poor-countries-develop-rich-countries?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR3Hevd03vf3dZwQ-Pt4pjdV-5GHZomNG8bdmruV9fAS9yQd_aHyKfkznB0

169 <http://speri.dept.shef.ac.uk/2018/10/05/uk-finance-curse-report/>

170 <https://truthout.org/articles/financialization-has-turned-the-global-economy-into-a-house-of-cards-an-interview-with-gerald-epstein/>

171 D. Tomaskovic-Devey y K. Hou Lin, “Income Dynamics, Economic Rents, and the Financialization of the U.S. Economy”, 2011.



Citizens for Financial Justice es un variado grupo de socios europeos; desde grupos de base local hasta grandes organizaciones internacionales. Juntos, pretendemos informar y conectar a la ciudadanía para actuar conjuntamente y conseguir que el sistema financiero mundial satisfaga las necesidades de todas las personas.

Obtenemos financiación de la Unión Europea y pretendemos apoyar la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) movilizándolo a la ciudadanía europea para apoyar una financiación eficaz para el desarrollo (FpD).

citizensforfinancialjustice.org

 [@financing4dev](https://twitter.com/financing4dev)



Financiado por
la Unión Europea